

ABRIL 23 DE 1932

## 9.ª REUNION — 8.ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA, HECTOR S. LOPEZ  
Y AUGUSTO BUNGE

**MINISTROS PRESENTES:** interior, doctor Leopoldo Melo; relaciones exteriores y culto, doctor Carlos Saavedra Lamas; hacienda, doctor Alberto Hueyo; justicia e instrucción pública, doctor Manuel M. de Iriando; guerra, coronel Manuel Rodríguez; agricultura, doctor Antonio de Tomaso; obras públicas, don Manuel R. Alvarado; **DIPUTADOS EN EJERCICIO, PRESENTES:** Abalos Próspero, Acosta Abel, Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Albarracín Belisario, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Amcodo Aurelio F., Andreis Fernando de, Antelo Mario, Aráoz Ernesto M., Aráoz José Ignacio, Argonz Joaquín, Becerra Eugenio A. (h.), Bermúdez Manuel A., Besasso Domingo, Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bordabehere Enzo, Boiano Ansaldo Daniel, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyn Marcelino, Cafferata Juan F., Calderón Osvaldo M., Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carreras José, Carús Agustín J., Castellanos José D., Castiglioni Eduardo, Castro Felipe, Culombres Carlos G., Cante José A., Cornejo Armas Victor, Corominas Segura Rodolfo, Coronel Carlos, Cortés Arteaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Courrel Carlos D., Da Rocha Arturo, Dávila Miguel V., Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Duhau Luis, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreyra Antenor R., Fresco Manuel A. (h.), Frías Silva Raúl, Ganza Marcelino, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Hernán F., González Benjamín S., González Guerrero Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Harispe Albino H., Herráiz Pascual, Herrera Bruno J., Iribarne Alberto, Lanesa Juan B., Lazo Plácido C., Lima Vicente Solano, López Héctor S., Loredo José, Lórraro Ramón G., Luján Abdón P., Maglione Francisco L., Magris Amleto, Manacorda Carlos, Martella Julio C., Martínez Erasmo, Martínez José Heriberto, Mayo Ramón, Messone Ricardo N., Molina Serapio, Moreira Alejandro E., Moret Carlos (h.), Morrogh Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Mouesca Eduardo, Moyano Rodolfo, Navello Miguel E., Negro Juan, Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Ortiz Basualdo Samuel, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palisa Mujica Arturo, Palmeiro José, Parodi Misael J., Pascarelli Miguel, Pona José Luis, Pereira Ododomiro, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pietranera Bruno J., Pinedo Federico, Pintos Angel, Pressacco Juan P., Pueyrredón Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Repetto Nicolás, Rodríguez Pinto Domingo, Rojas Marcos E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Guisasa Jacinto, Saggese Angel, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Sierra Bernardo, Simón Padrés Juan, Solari Juan Antonio, Solla Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Tourrés León P., Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Balgorri José, Vignat Uberto F., Vionnet Rodolfo L., Zaccagnini Antonio, Zalazar Altamira Benjamín, Zarazaga Marcial J., Zerdá Justiniano de la; **AUSENTES, CON AVISO:** Becerra Bernardo, Castibérras Alejandro, Costanti Gerardo, Garayalde José María, Guglielmelli Aquiles M., Inda Rufino, Mattos Luis María, Mosset Iturraspe Mario, Parera Gregorio, Pomponio Vicente E., Uriburu Francisco.

## SUMARIO

## 1.—Acta.

## 2.—Asuntos entrados:

## I.—Comunicaciones del Honorable Senado.

## II.—Peticiones particulares.

## 3.—Homenaje a la memoria del ex diputado don José Luis Alvarez.

## 4.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial de Presupuestos y Hacienda sobre impuestos (régimen fiscal de los seguros).

## 5.—Consideración del despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda sobre impuesto a los réditos.

## 6.—Moción del señor diputado Aguirrezabala, limitando a quince minutos la duración de los discursos. Es aprobada.

## 7.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial de Presupuestos y Hacienda sobre impuesto a los réditos.

## 8.—Indicación del señor diputado Martínez (J. H.) para que se trate de inmediato el despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda sobre impuestos (disposiciones generales).

## 9.—Se considera y aprueba el despacho a que se refiere el número anterior.

## 10.—Consideración del despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Ha-

cienda sobre impuesto a las transacciones.

- 11.—Indicación del señor diputado Pena para que se considere de inmediato el despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda sobre impuesto a las herencias.

—En Buenos Aires, a veintitrés de Abril de 1932, siendo la hora 15 y 31 minutos:

## 1

## ACTA

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Que- da abierta la sesión con la presencia de 87 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Para una rectificación de la versión taquigráfica que me hace aparecer en un grosero error: que el gobierno de San Juan cobra un impuesto a la exportación de uva de 8 centavos el kilo. He dicho de 4 centavos el kilo.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se hará la aclaración como pide el señor diputado.

—Por indicación del señor diputado Amadeo y Videla se suprime la lectura y se da el acta por aprobada.

## 2

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## I

## Comunicaciones del Honorable Senado

Comunica que ha sancionado definitivamente el proyecto de ley que le fué pasado en revisión, por el que se abre un crédito extraordinario al Departamento del Interior, por la suma de \$ 10.000 moneda nacional, para atender las necesidades que determinaron los fenómenos

sísmicos en las poblaciones de Malargüe y zona Sur del departamento de San Rafael, Mendoza. *(Al archivo).*

—Comunica que ha sancionado definitivamente el proyecto de ley que le fué pasado en revisión, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir de rentas generales hasta la suma de \$ 50.000 moneda nacional con destino a subvenir las necesidades originadas por las erupciones volcánicas a las poblaciones de Caleufú, Castex, Conhella, La Dorila, Ingeniero Foster, Metileo, Monte Nieves, General Pico, Rucunello, La Maruja y Trenel. *(Al archivo).*

## II

## Peticiónes particulares

La Concentración del Comercio minorista metropolitano formula observaciones relacionadas con los proyectos de leyes impositivas. *(A sus antecedentes).*

—La Sociedad Vitivinícola de Mendoza solicita no se sancione el impuesto al vino. *(A sus antecedentes).*

## 3

## HOMENAJE

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe, para un homenaje.

**Sr. Bosano Ansaldo.** — Voy a pronunciar breves palabras para solicitar que esta Honorable Cámara rinda un homenaje a uno de sus ex miembros, el ex diputado nacional José Luis Alvarez, que representó al electorado de la Capital Federal durante el período de 1924-1928.

Fué este legislador un hombre que participó activamente en las luchas cívicas de nuestro país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pues era oriundo de la localidad de Salto. Tuvo una actuación destacada en la jornada revolucionaria del año 93 y luego en la vida interna del radicalismo ocupó siempre puestos espectaculares de responsabilidad y de labor.

Son esas las razones por las cuales el partido creyó conveniente otorgarle la representación por ese distrito y en

**Sr. Pueyrredón.** — En sustitución de los artículos 9º, 10 y 11 y del proyecto de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Queda sancionado.

**Sr. Dickmann (E.).** — Se podrían ir remitiendo los despachos al Senado a medida que se fueran sancionando.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Así se hará.

**Sr. Ruiz Guñazú.** — No tengo inconveniente en que los artículos a que me he referido se reserven para las sesiones ordinarias.

**Sr. Pueyrredón.** — El señor diputado está conforme en que los artículos 12 y 13 queden en suspenso hasta las sesiones ordinarias, lo que creo es muy razonable.

Apoyo su indicación.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — ¿La comisión acepta que queden en suspenso los artículos que ha propuesto el señor diputado por Buenos Aires?

**Sr. Martínez (J. H.).** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Quedarán suspendidos hasta las sesiones ordinarias.

**Sr. Secretario (Zambrano).** — Suspéndese la aplicación hasta las sesiones ordinarias de los artículos 12 y 13 del decreto citado.

**Sr. Ruiz Guñazú.** — Es el decreto de 39 de Enero de 1932.

**Sr. Repetto.** — ¿De qué se trata?

**Sr. Presidente (Cafferata).** — La Secretaría va a informar.

**Sr. Secretario (Zambrano).** — El señor diputado propone que como agregado al inciso 25, se sancione lo siguiente: «Suspéndese hasta las sesiones ordinarias la aplicación de los artículos 12 y 13 del decreto citado.»

**Sr. de la Vega.** — La comisión acepta que se postergue la discusión hasta las sesiones ordinarias, pero mientras tanto continuará en vigencia lo establecido en los artículos 12 y 13. En las sesiones ordinarias se resolverá definitivamente el asunto.

**Sr. Martínez (J. H.).** — ¿Pero qué

inconveniente hay, ya que se ha tenido una liberalidad con las compañías extranjeras, que se tenga la misma con las compañías argentinas, hasta tanto se estudia a fondo el asunto?

**Sr. Pena.** — La comisión podría haberlo estudiado.

**Sr. Martínez (J. H.).** — No lo ha estudiado, porque no lo ha podido hacer.

**Sr. de la Vega.** — Y es por eso que no podemos admitir que se suspendan las disposiciones en vigor.

**Sr. Pena.** — Este asunto está terminado.

**Sr. de la Vega.** — La comisión no acepta.

**Sr. Pinedo.** — Lo trataremos en las sesiones ordinarias: ahora la comisión no puede suspender esos artículos.

**Sr. Ruiz Guñazú.** — Los artículos 12 y 13 obligan a emplear a las compañías el 60 % de sus reservas en fondos públicos, lo que es una enormidad.

**Sr. Dickmann (A.).** — Hago indicación de que el asunto pase a comisión.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Es la única moción que se puede hacer.

**Sr. Dickmann (A.).** — Es evidente que mi indicación sólo alcanza a lo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires: no a lo que se ha votado.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital, que consiste en que pase a comisión lo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires, es decir, la suspensión de los artículos 12 y 13 del decreto citado hasta las sesiones ordinarias.

**Sr. de la Vega.** — Eso no lo acepta la comisión.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar si se pasa a comisión.

—Resulta afirmativa.

5

#### IMPUESTO A LOS REDITOS

*Honorable Cámara:*

Vuestra Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda ha considerado el decreto del Go-

bierno Provisional de fecha 19 de Enero de 1932, sobre impuesto de emergencia a los réditos; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja la sanción del siguiente:

# PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Modifícase el impuesto de emergencia a los réditos establecido por el Gobierno Provisional el 19 de Enero de 1932, en la siguiente forma:

Artículo 1º — A partir del 1º de Enero de 1932, y por el término de tres años, todos los réditos derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o de extranjeros, residentes o no residentes en el territorio de la República, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece la presente ley.

Una ley determinará cómo deberá repartirse a contar del 1º de Enero de 1934 entre la Nación y las provincias, el producido del impuesto. Si a esa fecha no hubiera sido sancionada esa ley se considerará derogado este impuesto.

Artículo 4º — Inciso b) Las ganancias que las sociedades cooperativas distribuyan a sus asociados de acuerdo con el artículo 2º, inciso 17 de la ley número 11.688 y las que se destinen a su fondo de previsión o reserva. Quedan excluidas de esta exención las ventas realizadas a los no socios y a los que siéndolo compran productos a las cooperativas para su reventa;

e) Las indemnizaciones, premios y devoluciones de primas que paguen las compañías de seguros;

f) Las indemnizaciones que en forma de capital o rentas se paguen por accidentes o por enfermedades profesionales, por lesiones o incapacidad parcial o absoluta para el trabajo, temporal o permanente, y las que perciban los herederos a título de indemnización por la muerte de miembros de su familia.

Artículo 5º — La renta de los inmuebles rurales queda gravada en la siguiente forma:

a) Cuando la tierra no fuese trabajada personalmente por su propietario, se pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los arrendamientos devengados anualmente, previas las deducciones del artículo 7º. Se presume que el monto total de los arrendamientos equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo prueba en contrario, y hasta el límite mínimo del 3 por ciento;

b) Cuando la tierra fuese trabajada personalmente por su propietario y su valuación fiscal excediese de pesos 25.000 moneda nacional, se pagará un impuesto de 4 % sobre su renta anual. Con tal propósito se presume que la renta anual equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo que el propietario demostrase que la renta no alcanza a la proporción precitada y hasta el límite mínimo del 5 %;

c) Cuando la tierra fuese trabajada personalmente por su propietario, y su valuación fiscal no excediese de 25.000 pesos moneda nacional, queda exenta del gravamen establecido en el inciso b).

Esta exención no se aplicará a más de un inmueble del mismo propietario

Artículo 6º — La renta de los inmuebles urbanos queda gravada en la siguiente forma:

a) Cuando el propietario arrendase su inmueble pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los alquileres devengados anualmente.

Se presume que el monto de los alquileres equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo prueba en contrario por el contribuyente y hasta el límite mínimo del 3 %;

b) Cuando el propietario habitase su inmueble o lo emplease para el ejercicio de su profesión o negocio, pagará un impuesto de 5 % sobre la renta anual que se presume equivalente al 5 % de la valuación fiscal del inmueble.

En este caso si la valuación no excediese de \$ 25.000 moneda nacional, el propietario queda exento de grava-



men; pero la exención no se aplicará a más de un inmueble.

Artículo 7º — Antes de la liquidación del inmueble referido en los artículos 5º y 6º, el contribuyente podrá deducir del monto de la renta los intereses de los gravámenes hipotecarios sobre los inmuebles en cuestión, los impuestos y tasas que recayesen directamente sobre los mismos, y en el caso de edificios o construcciones urbanas, además la suma que determinará el fisco entre un mínimo del 5 % y un máximo del 10 % de la renta que presume el fisco para el inmueble, por concepto de gastos de mantenimiento.

Artículo 8º — Suprimido.

#### *Ausentismo*

Artículo 9º (nuevo). — Los propietarios territoriales, sean personas de existencia ideal o de existencia visible, que no tengan domicilio en la República, pagarán el impuesto de esta categoría (renta territorial), con un recargo del 30 %. Se incluyen en esta situación a los domiciliados en el país que, sin estar al servicio de la Nación, se hallen ausentes durante más de un año, así como las sociedades anónimas o personas jurídicas que tuvieran su directorio fuera del territorio nacional.

Artículo 10.—Agregar al final del inciso a):

Quedan también excluidos (hasta el 4 y  $\frac{1}{2}$  %) los réditos provenientes de las reservas matemáticas de las compañías de seguros, destinados a integrar esas reservas, en cuanto fueran necesarios para constituir el fondo con que hacen frente a las obligaciones contraídas con sus asegurados;

b) Los comerciantes, Bancos y demás entidades comerciales y civiles, públicas o privadas, quedan obligados a retener el monto de este gravamen en el momento de abonar los intereses devengados por los capitales recibidos a título de préstamo o depósitos a la vista o a plazos.

La misma obligación tienen las entidades civiles o comerciales con respecto a los intereses devengados por las debentures o bonos emitidos por las mismas. Se excluye de esta disposi-

ción los intereses pagados sobre títulos públicos emitidos por los gobiernos nacional, provinciales o municipales, y sobre sus cédulas por el Banco Hipotecario Nacional y por el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y se excluye asimismo los intereses de cualquier índole pagados a los Bancos de depósitos y descuentos.

Artículo 11. — Los beneficios netos del comercio, la industria y los auxiliares de comercio, quedan sujetos a un impuesto de 5 % sobre el monto de los mismos. A los fines de este artículo se considera como beneficio neto el obtenido durante el ejercicio completo. El impuesto se aplicará a los ejercicios vencidos con posterioridad al 1º de Enero de 1932, proporcionalmente por los meses que correspondan a este año.

Artículo 12, inciso f) (nuevo).—La suma de tres mil seiscientos pesos al año, que se declara renta no imponible. Esta reducción no regirá para las personas jurídicas o sociedades civiles o comerciales por acciones, ni cuando el contribuyente, siéndolo también de otra categoría, se hubiera acogido a alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b), o 15 de esta ley.

El impuesto de esta categoría se aplicará sobre el 75 % de la renta que exceda de tres mil seiscientos pesos moneda nacional, hasta veinticuatro mil; y sin discriminación sobre el excedente de dicha suma.

Artículo 14. — En los comercios o industrias cuyo volumen de ventas fuese inferior a pesos 50.000 anuales, se presume que los beneficios netos y el trabajo personal equivalen al 10 % de ese volumen. En tal caso los beneficios netos pagarán el impuesto como si fuesen réditos del trabajo.

Artículo 15. — Los réditos del trabajo pagarán un impuesto del 4 % sobre el excedente de la cantidad de trescientos pesos moneda nacional mensuales, que se declara renta mínima no imponible.

Este impuesto se aplicará sobre el 50 % de la renta que excediendo de tres mil seiscientos pesos moneda nacional no pase de doce mil; sobre el 75 % del excedente de esta última

suma hasta veinticuatro mil; y sin discriminación sobre el excedente de esta cantidad.

No se descontará de estos réditos la renta mínima no imponible cuando el contribuyente que lo es también de otra categoría ha aceptado alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b), o 12, letra f).

*Sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones  
y dietas*

Artículo 16. — Las personas, comerciantes o entidades comerciales o civiles, públicas o privadas, que pagasen a sus empleados, obreros, pensionistas o jubilados, sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones, dietas o cualquiera otra remuneración de servicios personales, excluidos los descuentos para jubilaciones, quedan obligadas a deducir por cuenta del contribuyente el impuesto del artículo anterior, al efectuar el pago de dichas remuneraciones.

Artículo 17. — A los fines del artículo 15 se presume que el rédito de los contribuyentes que ejercen una profesión u oficio es de tres veces el alquiler que pagan o que se les computa de acuerdo con el artículo 6º, letra b) por el local de su trabajo y el de su casa habitación, cuando dicho alquiler no exceda de doscientos pesos mensuales, y de cuatro veces cuando el alquiler es superior a esa cantidad, sin perjuicio de la manifestación sobre las entradas reales.

Artículo 18. — Toda persona, comerciante o entidad comercial o civil, pública o privada, que pague a un profesional liberal una remuneración u honorario no comprendido en el artículo 16, está obligado a descontar, por cuenta del contribuyente, al efectuar el pago, un impuesto del 2 % cuando ese honorario no exceda de un mil pesos moneda nacional; de 3 % cuando excediendo de esta última suma no sea superior a dos mil pesos moneda nacional, y del 4 % cuando se trate de mayor cantidad.

El mismo descuento se hará en las regulaciones judiciales de honorarios en el momento de su pago. Queda derogado el artículo 25 de la ley 11.290.

Artículo 21. — Toda persona de existencia visible cuyos réditos en su conjunto sobrepasen de pesos 25.000 moneda nacional por año, está sujeta a un gravamen adicional progresivo sobre el monto global de los mismos, además

del impuesto que hubiese pagado por cada categoría de rédito, de acuerdo con la adjunta tabla.

Artículo 21a (nuevo). — A los fines del impuesto adicional se incluirá como renta de las personas naturales las derivadas de dividendos sobre el capital social o de las ganancias netas de toda corporación, sociedad anónima o compañía de seguros, con exclusión de las utilidades exentas de impuestos por el artículo 4º, inciso b) de esta ley. A este efecto, dichas entidades harán y entregarán a la dirección del impuesto a los réditos las respectivas declaraciones.

Artículo 21 b (nuevo). — La renta de bienes de personas fallecidas y que se perciba hasta la división de la herencia estará sujeta al impuesto de su respectiva categoría, atribuyéndose a cada heredero en la proporción que le corresponda a los fines del impuesto a su renta global.

Artículo 22 a (nuevo). — Los contribuyentes casados, tienen derecho a la reducción del 10 por ciento de su renta imponible por categoría y de un 5 % por cada hijo a su cargo que, careciendo de réditos propios, sea menor de veinte años o esté físicamente incapacitado para el trabajo, o ascendiente, sin rentas e incapacitado, que esté a su cuidado, o persona que perciba alimentos de conformidad con las disposiciones del Código Civil, hasta un máximo del 30 %. Esta reducción no se aplicará al impuesto global ni sobre el excedente de diez mil pesos de cada categoría de renta.

Artículo 22 b (nuevo). — Los contribuyentes solteros, por réditos superiores a diez mil pesos, sufrirán un recargo del 10 % sobre el monto del impuesto.

Artículo 28. — Los representantes legales de las personas de existencia ideal en el caso de omisiones o hechos que importen infracción o defraudación a las disposiciones de este impuesto, obligan a sus representados, los que son responsables por las sanciones que corresponda.

Artículo 33. — Los pagos de impuestos o multas que no se efectúen en debido tiempo, devengarán el interés de 1 y ½ % mensual, sin necesidad de interpelación administrativa ni judicial.

Artículo 35. — Los denunciante tienen derecho al 25 % de la multa que ingresa al fisco, siempre que presenten los elementos necesarios para comprobar el hecho denunciado. No tendrán intervención alguna en el sumario, ni ac-

ceso a las informaciones del contribuyente. El denunciante deberá prestar fianza a satisfacción de la Dirección de Impuestos, la que perderá a beneficio del Consejo Nacional de Educación si resulta infundada la denuncia.

Artículo 2º — Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 13 de Abril de 1932.

*Abraham de la Vega. — José M. Bustillo. — José Heriberto Martínez. — M. A. Bermúdez. — F. Pinedo. — Pedro Groppo. — Belisario Albarra-cín. — J. Simón Padrós. — Juan F. Morrogh Bernard. — Héctor S. López. — Raúl Godoy.*

*Honorable Cámara:*

Vuestra Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda en minoría, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso; etcétera, sancionan con fuerza de*

#### LEY:

Artículo 1º — A partir del 1º de Enero de 1932, y por el término de cinco años, todos los réditos derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o de extranjeros, residentes en el territorio de la República, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece la presente disposición.

Art. 2º — La percepción de este impuesto se efectuará en la misma fuente de los réditos, siempre que ello sea posible.

En los casos en que no pueda aplicarse esta disposición, el pago de este impuesto deberá efectuarse en el lugar del domicilio del contribuyente en el país, o del representante, en su ausencia.

Cuando haya varios domicilios o el domicilio no pudiera determinarse, o no se conociese el representante en ausencia del contribuyente, el fisco fijará el lugar de pago.

Art. 3º — Ningún rédito, bajo concepto alguno, pagará más de una vez al año el presente impuesto.

Art. 4º — Quedan excluidos de este gravamen:

- a) Los réditos oficiales de los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales reconocidos de naciones extranjeras y los réditos de los depósitos bancarios oficiales de los mismos, a condición de reciprocidad;
- b) Las ganancias que las sociedades cooperativas distribuyan a sus asociados de acuerdo con el artículo 2º, inciso 17 de la ley-número 11.688 y las que se destinen a su fondo de previsión o reserva. Quedan excluidas de esta exención, las ventas realizadas a los no socios y a los que siéndolo compran productos a las cooperativas para su reventa;
- c) Las sumas que se donasen a entidades de beneficio público que no persiguiesen fines lucrativos, y los réditos obtenidos por dichas entidades, siempre que se destinen totalmente al beneficio público;
- d) Los aumentos de capital que no proviniesen de la acumulación de réditos;
- e) Las indemnizaciones, premios y devoluciones de primas que pagan las compañías de seguro;
- f) Las indemnizaciones que en forma de capital o renta se paguen por accidentes o por enfermedades profesionales, por lesiones o incapacidad parcial o absoluta para el trabajo, temporal o permanente, y las que perciban los herederos a título de indemnización por la muerte de miembros de su familia.

1ª categoría: Renta del suelo

#### Renta rural

Art. 5º — La renta de los inmuebles rurales queda gravada en la siguiente forma:

- a) Cuando la tierra no fuese trabajada personalmente por su propietario, se pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los arrendamientos devengados anualmente, previa las deducciones del artículo 7º;

Se presume que el monto total de los arrendamientos equivale, como mi-

nimo al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, y se declara renta mínima imponible, cualquiera sea el monto de las deducciones, el 3 % de dicha transacción;

- b) Cuando la tierra fuese trabajada personalmente por su propietario y su valuación fiscal, excediese de 25.000 pesos moneda nacional, se pagará un impuesto de 5 % sobre su renta anual. Con tal propósito se presume que la renta mínima anual equivale al 5 % de la tasación fiscal del inmueble, y la mínima imponible, después de las deducciones del artículo 7º, el 3 %;

- c) Cuando el inmueble fuese trabajado personalmente por su propietario, y su valuación fiscal no excediese de 25.000 pesos moneda nacional, queda exento del gravamen establecido en el inciso b). Esta exención no se aplicará a más de un inmueble del mismo propietario.

#### *Renta urbana*

Art. 6º — La renta de los inmuebles urbanos queda gravada en la siguiente forma:

- a) Cuando el propietario arrendase su inmueble pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los alquileres devengados anualmente.

Se presume que el monto total de los alquileres equivale como mínimo al 5 % de la valuación fiscal del inmueble; y se declara renta mínima imponible, después de efectuadas las deducciones del artículo 7º, el 2 % de dicho avalúo;

- b) Cuando el inmueble fuese ocupado por su propietario, para vivienda de su familia o para el ejercicio de su profesión o negocio, pagará un impuesto del 5 % sobre la renta anual, que se presume equivalente al 5 % de la valuación fiscal, fijándose como renta mínima imponible la del inciso anterior. En este caso si la valuación no excediere de 25.000 pesos moneda nacional, el propietario queda exento de gravamen; pero la exención no se aplicará a más de un inmueble ni a la renta que obtenga de la parte de la propiedad arrendada a terceros.

#### *Deducciones*

Art. 7º — Antes de la liquidación del impuesto referido en los artículos 5º y 6º, el contribuyente podrá deducir del monto de la renta los intereses de los gravámenes hipotecarios sobre los inmuebles en cuestión, los impuestos y tasas que recayesen directamente sobre los mismos, y en el caso de edificios o construcciones urbanas además la suma que determinará el fisco entre un mínimo del 5 % y un máximo del 10 % de la renta que presume el fisco para el inmueble, por concepto de gastos de mantenimiento.

#### *Ausentismo y mayor valor*

Art. 8º (nuevo). — Los propietarios territoriales, sean personas de existencia ideal o de existencia visible, que no tengan domicilio en la República, pagarán el impuesto de esta categoría (renta territorial) con un recargo del 30 %.

Se incluye en esta situación a los domiciliados en el país que, sin estar al servicio de la Nación, se hallen ausentes durante más de un año, así como las sociedades anónimas o personas jurídicas que tuvieran su directorio fuera del territorio nacional.

La renta imponible por el mayor valor obtenido con la venta de todo bien raíz, será equivalente a la diferencia entre el precio de adquisición del inmueble y el de su venta, deducido el importe, en el momento de la operación, de las mejoras incorporadas definitivamente al suelo por el vendedor en el tiempo de su domicilio. En ningún caso el valor de las mejoras excederá de su costo. Sobre esa ganancia o mayor valor se aplicará el impuesto de 6 %.

Art. 9º — El contribuyente de la Capital Federal y territorios nacionales podrá descontar en cualquier caso, del impuesto a su renta correspondiente a 1932, el importe de la contribución de 2 o/o establecida con carácter adicional sobre el valor fiscal de la finca.

#### **2ª categoría: Réditos de los capitales mobiliarios**

##### *Tasas y percepción del gravamen*

Art. 10. — Los réditos de los capitales mobiliarios quedan sujetos a un gravamen de 6 % que se aplicará en la siguiente forma:

a) Los contribuyentes que percibiesen intereses de préstamos hipotecarios, o de cualquier título de renta fija, o de dinero o valores prestados a particulares, pagarán el gravamen susodicho, que se aplicará sin deducción alguna sobre el monto global de tales intereses. Se excluye de esta disposición los intereses percibidos por los bancos de depósito y descuentos, cuyos beneficios netos están sujetos al gravamen de la categoría 3ª, salvo los intereses percibidos por las secciones hipotecarias de dichos bancos;

b) Los comerciantes, bancos y demás entidades comerciales y civiles, públicas o privadas, quedan obligados a retener el monto de este gravamen en el momento de abonar los intereses devengados por los capitales recibidos a título de préstamo o depósitos a la vista o a plazos. La misma obligación tienen las entidades civiles o comerciales con respecto a los intereses devengados por los debentures o bonos emitidos por las mismas. Se excluye de esta disposición los intereses pagados sobre títulos públicos emitidos por los gobiernos nacional, provinciales y municipales, y sobre sus cédulas por el Banco Hipotecario Nacional y por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y se excluye asimismo los intereses de cualquier índole pagados a los bancos de depósitos y descuentos.

### 3ª categoría: Réditos del comercio y la industria

#### *Tasa del gravamen*

Art. 11. — Los beneficios netos del comercio, la industria y los auxiliares del comercio, quedan sujetos a un impuesto de 5 % sobre el monto de los mismos. A los fines de este artículo se considera como beneficio neto el obtenido durante el ejercicio completo. El impuesto se aplicará a los ejercicios vencidos con posterioridad al 1º de Enero de 1932, proporcionalmente por los meses que correspondan a este año.

#### *Determinación del beneficio neto imponible*

Art. 12. — Para determinar el beneficio neto imponible se podrá deducir de las entradas brutas:

- a) Los intereses de la deuda, salvo los correspondientes al capital invertido por el contribuyente en el negocio;
- b) Los impuestos y tasas que recaen sobre el negocio, excepto los que se hiciesen pagar directamente a la clientela, toda vez que no se incluyan en el valor comercial de las mercaderías o servicios vendidos ni se contabilicen entre los gastos del negocio;
- c) Los castigos o amortizaciones efectuados en forma usual en los malos créditos y los bienes del negocio;
- d) Todos los gastos ordinarios destinados a producir los beneficios en cuestión, salvo la remuneración y los gastos personales del contribuyente y su familia, la remuneración por cualquier concepto de los directores de las sociedades anónimas, y los gastos que aumenten el valor capital de los bienes del negocio;
- e) Eventualmente los daños extraordinarios sufridos por los bienes del negocio, en cuanto no fuesen cubiertos por seguros o indemnizaciones;
- f) (nuevo). La suma de tres mil seiscientos pesos al año, que se declara renta no imponible. Esta reducción no regirá para las personas jurídicas o sociedades civiles o comerciales por acciones, ni cuando el contribuyente, siéndolo también de otra categoría, se hubiera acogido a alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b) o 15 de esta ley.

El impuesto de esta categoría se aplicará sobre el 75 % de la renta que exceda de tres mil seiscientos pesos moneda nacional hasta veinticuatro mil; y sin discriminación sobre el excedente de dicha suma.

#### *Beneficio neto presunto*

Art. 13. — Sin perjuicio de las disposiciones del artículo precedente, la Dirección del Impuesto sobre los réditos, que se crea por

el artículo 23, podrá determinar presuntivamente, cuando lo estime conveniente, el beneficio neto imponible, ya esa sobre la base del capital invertido, o del volumen del negocio, salvo prueba en contrario por el contribuyente.

#### *Pequeño comercio*

Art. 14. — En los comercios o industrias cuyo volumen de ventas fuese inferior a pesos 50.000 anuales, se presume que los beneficios netos y el trabajo personal equivalen al 10 % de ese volumen. En tal caso los beneficios netos pagarán el impuesto como si fuesen réditos del trabajo.

#### **4ª Categoría: Réditos del trabajo personal**

##### *Tasa del gravamen*

Art. 15. — Los réditos del trabajo pagarán un impuesto del 4 % sobre el excedente de la cantidad de trescientos pesos moneda nacional, que se declara renta mínima no imponible.

Este impuesto se aplicará sobre el 50 % de la renta que excediendo de tres mil seiscientos pesos moneda nacional no pase de doce mil; sobre el 75 % del excedente de esta última suma hasta veinticuatro mil; y sin discriminación sobre el excedente de esta cantidad.

No se descontará de estos réditos la renta mínima no imponible cuando el contribuyente que lo es también de otra categoría ha aceptado alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b); o 12, letra f).

##### *Sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones y dietas*

Art. 16. — Las personas, comerciantes o entidades comerciales o civiles, públicas o privadas, que pagasen a sus empleados, obreros, pensionistas o jubilados, sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones, dietas o cualquiera otra remuneración de servicios personales, excluidos los descuentos para jubilaciones, quedan obligados a deducir por cuenta del contribuyente el impuesto del artículo anterior, al efectuar el pago de dichas remuneraciones.

Art. 17. — A los fines del artículo 15 se presume que el rédito de los contribuyentes que ejercen una profesión u oficio es de tres veces el alquiler que pagan o que se les computa de acuerdo con el artículo 6º, letra b), por el local de su trabajo y el de su casa habitación, cuando dicho alquiler no exceda de doscientos pesos mensuales, y de cuatro veces cuando el alquiler es superior a esa cantidad, sin perjuicio de la manifestación sobre las entradas reales.

Art. 18. — Toda persona, comerciantes o entidad comercial o civil, pública o privada, que pague a un profesional liberal una remuneración u honorario no comprendido en el artículo 16, está obligado a descontar, por cuenta del contribuyente, al efectuar el pago, un impuesto de 2 % cuando ese honorario no exceda de un mil pesos moneda nacional; de 3 % cuando excediendo de esta última suma no sea superior a dos mil pesos moneda nacional, y del ¼ % cuando se trata de mayor cantidad.

El mismo descuento se hará en las regulaciones judiciales de honorarios en el momento de su pago. Queda derogado el artículo 25 de la ley número 11.290.

Este impuesto se deducirá del que deba abonarse de acuerdo con el artículo 15, cualquiera sea el monto del rédito total del contribuyente en esta categoría.

##### *Deducciones del rédito presunto*

Art. 19. — Si el monto del rédito presunto conforme al artículo 17, no excediese de pesos 25.000 moneda nacional por año y el contribuyente que ejerciese una profesión u oficio gozara además de réditos de esta u otra categoría que ya hubieran pagado el impuesto en la fuente, se podrá efectuar las siguientes deducciones:

- a) Del monto del impuesto a pagar sobre el rédito presunto, el impuesto que se hubiese descontado en la fuente al abonar al contribuyente sueldos o cualquiera otra remuneración referida en los artículos 16 y 18;
- b) Del rédito presunto, el importe de los otros réditos excluidos los del párrafo anterior, que hubiesen pagado impuesto en la fuente.

*Rédito presunto superior a 25.000 pesos  
moneda nacional*

Art. 20. — Si el monto del rédito presunto, conforme al artículo 17 excediese de 25.000 pesos moneda nacional por año, se considerará dicho rédito como mínimo. En tal caso el contribuyente deberá manifestar sus entradas profesionales reales, al declarar su rédito global conforme al artículo 21.

*Impuesto a la renta global*

Art. 21. — Toda persona natural cuyos réditos imponibles, después de las reducciones y discriminaciones autorizadas en los impuestos cedulares, sobrepasen en su conjunto de veinticuatro mil pesos por año, está sujeta a un gravamen adicional progresivo sobre el monto global de los mismos, además del impuesto que hubiese pagado por cada categoría de renta de acuerdo con la siguiente tabla:

|    |             |           |    |   |
|----|-------------|-----------|----|---|
| De | 24.001 a    | 30.000    | 1  | % |
| "  | 30.001 "    | 40.000    | 2  | " |
| "  | 40.001 "    | 50.000    | 3  | " |
| "  | 50.001 "    | 60.000    | 4  | " |
| "  | 60.001 "    | 70.000    | 5  | " |
| "  | 70.001 "    | 80.000    | 6  | " |
| "  | 80.001 "    | 90.000    | 7  | " |
| "  | 90.001 "    | 100.000   | 8  | " |
| "  | 100.001 "   | 120.000   | 9  | " |
| "  | 120.001 "   | 140.000   | 10 | " |
| "  | 140.001 "   | 160.000   | 11 | " |
| "  | 160.001 "   | 180.000   | 12 | " |
| "  | 180.001 "   | 200.000   | 13 | " |
| "  | 200.001 "   | 250.000   | 14 | " |
| "  | 250.001 "   | 300.000   | 15 | " |
| "  | 300.001 "   | 350.000   | 16 | " |
| "  | 350.001 "   | 400.000   | 17 | " |
| "  | 400.001 "   | 450.000   | 18 | " |
| "  | 450.001 "   | 500.000   | 19 | " |
| "  | 500.001 "   | 600.000   | 20 | " |
| "  | 600.001 "   | 700.000   | 21 | " |
| "  | 700.001 "   | 800.000   | 22 | " |
| "  | 800.001 "   | 900.000   | 23 | " |
| "  | 900.001 "   | 1.000.000 | 24 | " |
| "  | 1.000.001 " | 1.200.000 | 25 | " |
| "  | 1.200.001 " | 1.400.000 | 26 | " |
| "  | 1.400.001 " | 1.600.000 | 27 | " |
| "  | 1.600.001 " | 1.800.000 | 28 | " |
| "  | 1.800.001 " | 2.000.000 | 29 | " |
| "  | 2.000.001 " | 2.200.000 | 30 | " |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| De 2.200.000 a 2.400.000 | 31 | % |
| " 2.400.001 ,, 2.600.000 | 32 | " |
| " 2.600.001 ,, 2.800.000 | 33 | " |
| " 2.800.001 ,, 3.000.000 | 34 | " |
| Más de 3.000.000         | 35 | " |

*Reducción del rédito global*

Art. 22. — Del importe del rédito global imponible podrán efectuarse deducciones antes de liquidar el adicional del artículo anterior:

- Los intereses que pagase sobre sus deudas el contribuyente, siempre que no los hubiese deducido de los réditos de cualquier categoría;
- Las pérdidas que hubiese sufrido durante el año a que se refiere el impuesto, de alguna explotación comercial o industrial;
- Los impuestos pagados o a pagar en el mismo año sobre los réditos de cualquier categoría que constituyen la renta global del contribuyente y el impuesto global pagado el año anterior

Art. 23. — (nuevo) A los fines del impuesto adicional se incluirá como renta de las personas naturales las derivadas de dividendos sobre el capital social o de las ganancias netas de toda corporación, sociedad anónima o compañía de seguros, con exclusión de las utilidades exentas de impuesto por el artículo 4o, inciso b), de esta ley. A este efecto, dichas entidades harán y entregarán a la Dirección del Impuesto a los Réditos las respectivas declaraciones.

Art. 24. — (nuevo). La renta de bienes de personas fallecidas y que se perciba hasta la división de la herencia estará sujeta al impuesto de su respectiva categoría, atribuyéndose a cada heredero en la proporción que le corresponda a los fines del impuesto a su renta global.

*Cargos de familia*

Art. 25. — (nuevo). Los contribuyentes casados tienen derecho a la reducción de un diez por ciento de su renta imponible por categoría y de un cinco por ciento por cada hijo a su cargo que, careciendo de réditos propios, sea menor de veinte años o esté físicamente inca-



pacitado para el trabajo, o ascendiente, sus rentas e incapacitado, que esté a su cuidado, o persona que perciba alimentos de conformidad con las disposiciones del Código Civil, hasta un máximo de 30 %. Esta reducción no se aplicará al impuesto global ni sobre el excedente de diez mil pesos de cada categoría de renta.

## SEGUNDA PARTE

### Administración del Impuesto

#### *Autoridades del Impuesto*

Art. 26. — (antes 23). En las cuestiones atinentes a este impuesto intervendrán las siguientes autoridades: una «Dirección del Impuesto sobre los Réditos», una «Comisión Honorable del Impuesto sobre los Réditos».

Art. 27. — (antes 24). La Dirección del Impuesto tendrá a su cargo el mecanismo, aplicación y percepción del gravamen sobre los contribuyentes.

Art. 28. — (antes 25). La Comisión Honorable compuesta de doce contribuyentes designados por decreto, tendrá las siguientes funciones: asesorar al Poder Ejecutivo en la reglamentación del impuesto; interpretar sus disposiciones en los casos generales; y evacuar las consultas de los contribuyentes con motivo de las cuestiones que suscite la aplicación del impuesto, mientras no sean materia de sumario, o las consultas que formule la Dirección del Impuesto.

Sus decisiones se aplicarán en tanto no fuesen modificadas por el Departamento de Hacienda, a raíz de la apelación de los contribuyentes, o a requerimiento de la Dirección del Impuesto.

La Comisión podrá proponer al Poder Ejecutivo modificaciones en la reglamentación y organización del impuesto.

Los miembros de la Comisión no podrán tener acceso en ningún caso a las informaciones confidenciales de los contribuyentes, o a la de terceros que les afecten.

Art. 29. — (antes 26). El tribunal adminis-

trativo estará compuesto de tres miembros inamovibles como los jueces, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

El tribunal, como única autoridad, entenderá en toda apelación de las resoluciones de la Dirección del Impuesto relativas a la determinación del rédito imponible de un contribuyente en particular, y al monto del impuesto exigido.

También se podrá apelar ante el Tribunal en el caso de multas aplicadas por la Dirección del Impuesto, siempre que ellas excedan de \$ 200 m/n. La opción de los interesados por la apelación ante el Tribunal, comportará la renuncia del recurso judicial y viceversa.

#### *Responsables por el Impuesto*

Art. 30. — (antes 27). Son responsables del cumplimiento de las disposiciones de este impuesto los que están obligados a pagarlo al fisco; y los terceros que sin estarlo contribuyan a facilitar su evasión con falsas declaraciones, documentos o anotaciones. Unos y otros son responsables asimismo, en cuanto a las penas pecuniarias y gastos del hecho, de sus factores, agentes o dependientes.

Art. 31. — (antes 28). Los representantes legales de las personas de existencia ideal, en el caso de omisiones o hechos que importen infracción o defraudación a las disposiciones de este impuesto, obligan a sus representados, los que son responsables por las sanciones que correspondan.

#### *Verificación de las declaraciones del contribuyente*

Art. 32. — (antes 29). La Dirección del Impuesto cuando lo juzgue necesario, podrá verificar lo manifestado o declarado por los contribuyentes, con las constancias de sus libros y documentos de contabilidad. Igual medida podrá disponer con el que se ocultase o negase a declarar, o con los terceros que interviniesen en el pago, movimiento, destino o aplicación de los réditos de un contribuyente.

*Penalidades*

Art. 33. — (antes 30). Los infractores a las disposiciones de este impuesto y a los reglamentos que diere en adelante el Poder Ejecutivo sufrirán una multa de 25 a 2.000 pesos moneda nacional.

Art. 34. — (antes 31). Cualquier falsa declaración o manifestación, acto u omisión, que tenga por mira defraudar el impuesto, será penado con una multa de diez tantos de la suma que se ha pretendido defraudar.

Art. 35. — (antes 32). La negativa u oposición de hecho a permitir la inspección llevada a cabo por empleados autorizados para ello, serán reprimidas con una multa de 25 a 500 pesos moneda nacional.

Art. 36. — (antes 33). Los pagos de impuesto o multas que no se efectúen en debido tiempo, devengarán el interés de 1 ½ % mensual, sin necesidad de interpelación administrativa ni judicial.

Art. 37. — (antes 34). La acción para imponer multas y la acción para hacerlas cumplir una vez impuestas, se prescriben a los diez años.

*Denunciantes*

Art. 38. — (antes 35). Los denunciantes tienen derecho al 25 % de la multa que ingrese al fisco, siempre que presenten los elementos necesarios para comprobar el hecho denunciado. No tendrán intervención alguna en el sumario, ni acceso a las informaciones del contribuyente.

*Carácter confidencial de las informaciones del contribuyente*

Art. 39. — (antes 36). Las declaraciones juradas, manifestaciones o informaciones que el contribuyente o terceros presentasen a la Dirección del Impuesto son estrictamente confidenciales. Los funcionarios y demás dependientes de la Dirección del Impuesto que las conociesen están obligados a mantener el más absoluto secreto, sin poder comunicarlas a persona alguna, salvo sus superiores jerárquicos de la Dirección del Impuesto.

La falta de cumplimiento de esta disposición hace pasible al que la cometiera de las sanciones del Código Penal, sin perjuicio e independientemente de las medidas administrativas que correspondan.

*Disposiciones complementarias y reglamentarias*

Art. 40. — (antes 37). Por conducto del Departamento de Hacienda se designará una comisión con amplias facultades para proponer las disposiciones que complementen o reglamenten la presente, y las líneas generales de la organización de la Dirección del Impuesto, lo que entrará en vigencia si es aprobado por el Poder Ejecutivo.

*Disposiciones transitorias*

Art. 41. — (antes 38). Hasta tanto no se determine los porcentajes del producido del impuesto sobre los réditos que el Gobierno Nacional debe distribuir a las provincias, no se aplicará el artículo 16 a las entidades oficiales de las mismas.

Art. 42. — Comuníquese, etc.

Rómulo Bogliolo. — Adolfo Dickmann.

— Américo Ghioldi. — José L. Pena.

— Nicolás Repetto.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Está en consideración.

**Sr. Martínez (J. H.)** — Pido la palabra.

La Comisión Especial de Presupuestos y Hacienda me ha encomendado el informe de su despacho sobre el impuesto a los réditos.

Como la Honorable Cámara necesita acelerar su trabajo y votó ayer fijar en 15 minutos el tiempo en que se puede expedir cada orador, haré una información...

**Sr. Ghioldi.** — La Cámara no votó la limitación a que se refiere el señor diputado.

**Sr. Martínez (J. H.)** — Si no la ha votado...

**Sr. Pena.** — Pero se puede acoger a ese término el señor diputado si lo desea.

6

MOCION

**Sr. Aguirrezabala.** — Propongo que los discursos duren como máximo 15 minutos y que los miembros informan-

tes se ajusten en lo posible a ese lapso.

**Sr. Martínez (J. H.).** — De todos modos las razones de urgencia que militan...

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Permítame, señor diputado. Debe votarse la moción de orden formulada por el señor diputado por Entre Ríos, para que el uso de la palabra se limite a 15 minutos.

**Sr. Pinedo.** — Excepto al miembro informante.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Exactamente.

Se va a votar la moción del señor diputado por Entre Ríos.

—Resulta afirmativa.

## 7

### IMPUESTO A LOS REDITOS

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Continúa con la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Bien, señor presidente. Yo voy a abreviar a la Honorable Cámara el estudio de los antecedentes sobre el impuesto a los réditos, que ha tenido aplicación en otros países de una evolución política más avanzada que la nuestra y de mayores necesidades fiscales. No hablaré por tanto de la legislación francesa, que ha tenido su expresión más orgánica en la ley de 9 de Marzo de 1909, debido a los proyectos de los diputados Roubier y Caillaux. Tampoco me detendré en los antecedentes ingleses, ya que este impuesto tiene en Inglaterra una larga antigüedad, desde la época del ministerio de Pitt en 1798, a través de la reforma de Charles Dilke y la del Partido Liberal con Lloyd George; ni menos del camino difícil que debió recorrer en Estados Unidos hasta su aplicación definitiva, desde los primeros ensayos en la época del secretario del Tesoro Dallos en 1815, pasando por el impuesto a la renta establecido durante la guerra de secesión, el conato de impuesto del año 1894 y, por último,

la propia reforma de la Constitución federal del año 1909 bajo la presidencia Taft, a fin de que este impuesto no pudiera ser tachado de inconstitucional; como lo había sido en sus ensayos anteriores.

Entre nosotros en materia de iniciativas tampoco es una novedad. Ya en el primer gobierno radical, el ministro de hacienda Salaberry proyectó el impuesto a la renta, y también lo proyectaron los ministros Herrera Vegas y Molina en el segundo. Pero nunca pudo convertirse en ley y no pasó de meros proyectos. Fué necesario que un gobierno como el Provisional, calificado de reaccionario, viniera en momentos graves para las finanzas, a establecerlo por primera vez y que un Congreso, con mayoría de partidos no socialistas, le diera carta de ciudadanía definitiva en el régimen fiscal argentino.

Respecto a la bondad de este impuesto, no se puede discutir. En primer lugar porque el impuesto a los réditos grava con espíritu de equidad la riqueza privada realmente existente en el momento económico oportuno de la circulación; segundo: porque es un impuesto que tiene un alto grado de elasticidad, como se ha demostrado en repetidas ocasiones, y especialmente por su aplicación en los países europeos, durante la gran guerra; y, por último, porque es de benéfica acción social, pues aparte de que tiende en cierto modo una distribución más acorde con la riqueza, sirve para atenuar las inquietudes de las clases menos favorecidas por la misma.

Es claro que en los países donde se ha aplicado este impuesto ha sido generalmente suprimiendo otros malos, y hubiera sido de desear que en la República Argentina, al establecerlo hubiera coincidido también y como consecuencia de su aplicación, en la supresión de una serie de gabelas y de impuestos antieconómicos, que por razones fiscales nos vemos en la obligación de mantener; pero ya se ha explicado repetidas veces que la mayoría de la Comisión de Presupuesto ha estado en la imposibilidad de hacer-

lo debido a las necesidades fiscales y a la urgencia con que ha debido proceder. Era menester alejar el peligro del déficit; era necesario recurrir a nuevos tributos, para llenar el escaso rendimiento de los otros, y no podíamos desprendernos de los actuales, aunque ellos fueran malos y en algunos casos antieconómicos.

Se ha discutido mucho respecto de la constitucionalidad de este impuesto, porque, dado nuestro sistema federal de gobierno, se ha dejado para el tesoro nacional las rentas determinadas expresamente por el artículo 4º de la Constitución, en tanto que las contribuciones directas son fuentes de recursos provinciales. Pero el artículo 67, inciso 2º, de la Constitución, establece la facultad del Congreso para imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan.

En este caso, señor presidente, se realizan esas condiciones. En primer lugar, porque este impuesto se establece por tiempo determinado, pues se fija su duración en 3 años. En segundo lugar, porque la seguridad y el bien general del Estado lo exigen, y la apreciación de esta situación constituye una facultad privativa del Honorable Congreso, porque es él quien debe considerar si se reúnen, o no, esas circunstancias, como lo ha declarado la Suprema Corte de la Nación en el caso Berro versus Fisco Nacional. Entre otros, con motivo de un juicio sobre inconstitucionalidad de los impuestos internos.

La Suprema Corte estableció en esa oportunidad, en el fallo que se registra en el tomo 121 de sus sentencias, que si las contribuciones aludidas — se refería a los impuestos internos — fueran los impuestos que se mencionan en el artículo 67, inciso 2º de la propia Constitución, el Congreso habría también podido establecerlas con el carácter extraordinario o por tiempo limita-

do, para atender la defensa, seguridad común y bien general del Estado.

«Que al enumerar el artículo 4º de la Constitución las fuentes del Tesoro nacional, incluye entre ellas las «contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General», y aun cuando se han suscitado graves dudas en repetidos y prolongados debates parlamentarios acerca del significado y alcance de esta cláusula, no puede desconocerse que con ella se quiso autorizar impuestos en circunstancias «muy excepcionales» sobre valores sujetos, en principio, a las leyes impositivas de las provincias, sin determinarlos o enumerarlos. (Actas de la Convención Constituyente, sesión 40 de 22 de Abril de 1853).

«Que si las contribuciones aludidas fueran las mismas que se mencionan en el artículo 67, inciso 2º de la propia Constitución, el Congreso habría también podido establecerlas con carácter de extraordinarias o por tiempo limitado, para atender a la defensa, seguridad común y bien general del Estado.

«Que a este respecto existen más poderosos motivos que los que obstan a la revisión judicial de las declaraciones del Congreso relativas a la necesidad o utilidad que pueden legitimar las expropiaciones y a su urgencia. (Fallos, tomo IV, página 311; tomo VI, página 67, tomo LVI, página 195).

Es decir, que si el Congreso puede calificar los casos de urgencia y por lo tanto las expropiaciones, con más razón puede establecer las oportunidades en que crea que las necesidades de la Nación exigen estos recursos de emergencia para reparar sus finanzas.

Es claro, señor presidente, que esto no obsta para que más adelante se procure realizar un acuerdo con las provincias. El impuesto a la renta es, en principio, un impuesto provincial. Así lo han sostenido las provincias y muchos de sus gobernantes.

Recordando a este respecto que en el año 1921 el ex gobernador de Córdoba don Rafael Núñez hizo reparos de esta

índole al proyecto de impuesto a la renta. Actualmente, los gobernadores de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba han hecho también las mismas objeciones en las notas que están en poder de este honorable cuerpo, pero sería antieconómico y perjudicial que el impuesto a la renta fuera aplicado separadamente por las distintas provincias y por la Nación. El desiderátum sería llegar a una armonía entre las provincias y la Nación, a fin de que este impuesto fuera recaudado por la Nación y distribuido proporcionalmente entre estas y las provincias. En la misma forma habría que resolver respecto a los impuestos internos, porque esta superposición de tributos encarece su percepción, tiene muchos inconvenientes de orden práctico y en ciertos casos traba la libre circulación de los productos que grava.

Entretanto se puede llegar a realizar este plan de armonía, es menester la sanción de este impuesto a los réditos, por el tiempo determinado que le ha fijado la comisión. A este propósito y para salvar las objeciones de los Estados provinciales, se ha establecido en el articulado una disposición, en virtud de la cual una ley del Congreso determinará la proporción del producido de este impuesto a repartirse entre las provincias, y si esa proporción no se estableciese antes del 1º de Enero de 1934, quedará caduco este impuesto, para de este modo estimular de un modo práctico la sanción de la distribución y que no quede como una de las muchas aspiraciones incumplidas de las provincias.

El impuesto a los réditos proyectado es un impuesto de una estructura muy simple. Es mixto, cedular y global; se aplica a cuatro cédulas: a la renta del suelo, a la réditos de los capitales mobiliarios, a los réditos del comercio y la industria y a los réditos del trabajo. Y se ha procurado establecer índices que permitan una apreciación cómoda y fácil para el fisco y los contribuyentes, de esos réditos sobre los cuales se aplica el impuesto.

Posiblemente, con este sistema nos hemos apartado un tanto del espíritu de justicia del mismo y de su construcción técnica como un verdadero impuesto a la renta, y por eso, con propiedad, se ha denominado impuesto a los réditos, pero en cambio se ha evitado los inconvenientes que tienen otras leyes impositivas que someten al contribuyente a una verdadera inquisición fiscal.

La comisión ha mantenido el proyecto en sus líneas esenciales tal cual fué establecido por el Gobierno Provisional y solamente lo ha modificado en cuestiones más bien de detalle. La reforma fundamental a este propósito fué la de suprimir una renta mínima establecida por el artículo 8º, a pesar de las discriminaciones que pudiera hacer el contribuyente a los servicios hipotecarios e impuestos, y también el establecer un recargo al ausentismo y un recargo a los solteros, habiendo aceptado la discriminación respecto de los casados y a la pequeña propiedad, esta última por iniciativa de la diputación socialista.

Me reservo contestar las preguntas que en concreto se puedan formular en el curso de la sanción de este proyecto, y dejo así informado brevemente el despacho de la Comisión de Presupuesto.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la minoría.

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

Cuando la Cámara designó la Comisión Especial de Presupuesto, el grupo parlamentario socialista sostuvo su derecho a tener en ella seis representantes. Dificultades que no son del caso exponer, determinaron que solamente cinco diputados de nuestro sector fueran designados para dicha comisión. Por razones de división del trabajo, el grupo parlamentario socialista había nombrado a seis de sus miembros para formar parte de la Comisión, y correspondió al doctor Ruggieri ocuparse del impuesto a los réditos. Por lo tanto él es quien ha elaborado nuestro proyecto; él es quien ha llevado las sugestio-

nes que han mejorado en alguna parte el despacho de la Comisión, según acababa de reconocerlo el miembro informante de la mayoría; y es, entonces, al señor diputado Ruggieri a quien corresponde informar en nuestro nombre en este asunto.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Aguirrezabala.** — Permítame, señor presidente.

No voy a hacer una cuestión, porque a la Cámara le va a resultar muy interesante la palabra ilustrada del señor diputado Ruggieri, pero quiero hacer la prevención para que este caso no vaya a sentar precedente.

**Sr. Pena.** — Bueno. Que no sienta precedente.

**Sr. Aguirrezabala.** — Porque sería un mal precedente.

**Sr. Pena.** — Pero será un buen discurso el del doctor Ruggieri.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Se tendrá presente la observación del señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Ruggieri.** — Los diputados socialistas de la Comisión de Presupuesto han apoyado sin vacilar el nuevo gravamen a la renta, aceptando, además, el tipo mixto, cédular y global, adoptado en el proyecto del Poder Ejecutivo y también en el despacho de la mayoría, con la simple proporcionalidad para cada categoría de réditos y la progresión para la renta global.

Si hemos coincidido en el pensamiento de apoyar la sanción de este impuesto, se han manifestado, en cambio, disidencias, que no son de detalle como erróneamente se acaba de expresar, sino de importancia, como podrá apreciarse más adelante. Especialmente en cuanto al porcentaje de las rentas mínimas imponibles de la propiedad del suelo rural y en la escala sobre el monto total de los réditos.

Esta Cámara ha discutido, y aun sancionado, en períodos anteriores, proyectos como este. Recuerdo el de 1917, del Poder Ejecutivo; el despacho de la Comisión de Presupuesto de 1919, apro-

bado por la Cámara, y los proyectos de 1923 y 1924; proyectos, los recordados, que sólo abordó la Cámara popular del Congreso, sin apoyo del Senado nacional, poco dispuesto, en aquellos momentos, a renovar nuestro anacrónico régimen tributario.

La representación socialista, señor presidente, jamás ha presentado antes de ahora proyectos de impuesto a la renta general. Los ha apoyado ante el fracaso de su propia iniciativa de gravar con una contribución nacional, progresiva, a la propiedad inmueble, y especialmente al mayor valor del suelo.

En el seno de la comisión, primero, y después en el recinto, el señor diputado por la Capital doctor Repetto ha anticipado los puntos de vista generales del sector socialista sobre esta materia. Hemos repetido conceptos que son tradicionales en la política impositiva de nuestro partido y que más de una vez fueron expuestos con admirable claridad por el doctor Justo en esta Cámara, y especialmente al considerarse el proyecto sobre impuesto a la renta, traído al debate por iniciativa de la primera presidencia irigoyenista. Preferimos el impuesto al privilegio y al vicio, para realizar todos los fines sociales posibles, como odiamos profundamente las contribuciones que inciden sobre el trabajo y los consumos del pueblo.

Consideramos que el método fiscal más justo y productivo es el que se apoya en fuentes permanentes, y apreciamos como más segura, en ese sentido, la renta de la propiedad territorial. No lo es, en cambio, en varias de sus categorías de renta, el gravamen que se discute.

El ex diputado doctor Justo decía, en un párrafo de su medular discurso de 1919, lo siguiente:

«Ahora se agrega esta otra consideración que es para nosotros de la mayor importancia, señores diputados. Este impuesto sobre la renta que se proyecta podrá tener buenos resultados fiscales, pero no esperamos de él ningún resultado social especialmente favorable, salvo que permita la abolición de los malos impuestos que hoy rigen. En este sentido, le atribuyo verdadera importancia. En cambio, el impuesto territorial

nacional, inteligente y honestamente aplicado, sería el punto de partida de una verdadera revolución agraria en el país y de un cambio completo en las condiciones esenciales de la economía nacional: impediría el excesivo ascenso del valor venal de la tierra; alejaría a los habitantes del país del vicio de la especulación en tierras, que sigue siendo una de las grandes aficiones nacionales; propendería a la división del suelo en unidades agrarias más proporcionadas a la buena técnica agrícola y contribuiría, estableciendo sobre bases firmes y científicas el verdadero valor de la tierra, al arreglo más o menos definitivo y permanente de la cuestión agraria, cuestión ardiente y que lo será cada día más mientras no se den bases sociales sanas y serias que arreglen las dificultades y diferencias entre propietarios y arrendatarios.»

Y agregaba, en otro párrafo, estas consideraciones que son también pertinentes en la situación presupuestal y financiera de este momento: «Asimismo, señor presidente, a pesar de la enorme superioridad que tiene el proyecto que hemos presentado a la consideración de la Cámara y que no ha merecido la atención de la comisión, no podemos votar contra el proyecto que está en discusión; no podemos votar contra él porque formamos parte de una Cámara que acaba de votar impuestos para los que fuman un cigarrillo, para los que toman un vaso de agua mineral, para los que se compran una prenda de vestir, para los que edifiquen su habitación con materiales que han de ser necesariamente importados. Con el criterio de equidad, podemos prescindir de que este impuesto sea más o menos perfecto, o más o menos científico en su modo de aplicación. Lo aceptamos así, a bulto cerrado, sabiendo que en conjunto es mucho más equitativo que todos los impuestos que han pesado hasta ahora sobre el pueblo contribuyente de la República.»

«También reconocemos la necesidad del impuesto, porque la Cámara acaba de seguir la práctica anual de votar un enorme presupuesto de gastos innecesarios y exagerados, gastos tendien-

tes a completar con gangas y privilegios de presupuesto las ventajas que ya tiene la clase pudiente argentina, cuyos hijos en gran parte van a buscar puestos parasitarios en las diferentes reparticiones públicas y los consiguen con tanta mayor facilidad cuanto más alta es la situación pecuniaria de sus familias. No nos desagrada, pues, ni nos pesa que de las entradas de la clase pudiente salgan los dineros con que se han de pagar esos gastos exagerados e innecesarios.»

No necesito, señor presidente, repetir y desarrollar estos diáfanos principios de política fiscal, en cuanto tienen de permanentes y a su adopción en situaciones de emergencia, como es la presente.

Refiriéndome al despacho formulado y en discusión, reconocemos que en su estructura general ha mejorado visiblemente el proyecto del Poder Ejecutivo, al que se han incorporado, como ya se ha dicho, sugerencias de la representación socialista, incluidas en forma más completa y precisa en su despacho propio: aclara la exención a las cooperativas genuinas regidas por la ley 11.368 y a las indemnizaciones por accidentes; establece la renta mínima no imponible en las categorías de las rentas del trabajo y del comercio y la industria, de modo que los sueldos, los salarios y las utilidades menores de 300 pesos por mes quedan libres del impuesto; establece que el gravamen sólo incidirá sobre el excedente de esa cantidad no imponible de 300 pesos, y además hasta determinada suma sólo se aplicará sobre el 50 y el 75 por ciento de ese excedente de renta.

En esta forma se ha eliminado la escala progresiva en la cédula de las rentas del trabajo; el impuesto se aplicará proporcionalmente, estableciendo una progresividad indirecta en razón de la base invariable de la renta no imponible, cualquiera sea el monto de los réditos.

Los dos despachos, el de la mayoría y el de la minoría, admiten el procedimiento indiciario para la fijación de las rentas, que se reducen a una proporción igual a tres veces el monto de



los alquileres, cuando éstos no exceden de doscientos pesos mensuales, y a cuatro veces cuando el arrendamiento es superior de esa suma.

Conviene aclarar, y especialmente para los que objetan este procedimiento, que es, sin duda, imperfecto, que sólo fija una renta conjetural, pues así como admite la prueba en contra del contribuyente, para demostrar que sus ingresos son inferiores a los que la ley determina en forma presuntiva, el fisco puede también, por otros medios de investigación, establecer la renta superior de los contribuyentes. Esta aclaración, si puede ser un consuelo para los profesionales pobres, debe tomarse también como un aviso a los profesionales ricos, de que ponemos en manos del fisco armas eficaces para impedir la evasión maliciosa en el pago del impuesto.

Se establece una escala para el gravamen que deberán pagar los profesionales en la fuente, es decir, en el momento en que cobran determinados honorarios o remuneraciones. Sobre este punto, llamo la atención de la mayoría de la comisión respecto a una omisión sin duda involuntaria. Al artículo 18 del despacho debe añadir el último apartado del mismo artículo del proyecto de la minoría, para evitar que el impuesto pagado en la fuente se abone de nuevo al liquidarse sobre la totalidad de la renta del trabajo. Se trataría de autorizar expresamente la deducción de lo que se ha pagado por primera vez en la fuente.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Está implícito, pero conviene la aclaración que hace el señor diputado.

**Sr. Ruggieri.** — Se grava, por último, en los dos despachos, el ausentismo, en una forma a mi juicio excesivamente atenuada, pues recarga en sólo un 30 por ciento el impuesto a la renta territorial. Los ausentes pagarán, entonces, 7,80 por ciento en vez del 6 por ciento que regirá para los propietarios aquí residentes.

El adicional para los ausentes acaba de ser objetado por sociedades anó-

nimas que se han constituido y tienen su domicilio en el extranjero, y poseen sucursales en el país, con personería jurídica obtenida aquí.

El fundamento aparentemente más racional de esa objeción es que el adicional del 30 por ciento conspira contra la atracción y radicación de los capitales extranjeros en el país. Alrededor de esta objeción se han formulado otras en publicaciones de la prensa, con errores de todo calibre. Se ha llegado a afirmar que se pretende confiscar el 30 por ciento de la renta probable de esas corporaciones jurídicas. La verdad es que sólo se recarga el 30 por ciento del impuesto del 6 por ciento fijado para los contribuyentes aquí radicados, de suerte que los ausentes sólo abonarán — puntualizo, señor presidente — nada más que el 7,80 por ciento. Además, y para disipar un error en que parece incurrir un señor letrado de sociedades anónimas en una publicación reciente, aclaro que el recargo se establece sólo sobre la renta territorial, como lo dice expresamente el artículo respectivo de los dos despachos de la comisión.

No regirá para los réditos del capital mobiliario, ni para la renta del comercio e industria, ni desde luego, para los réditos del trabajo.

La inconsistencia de la objeción se demuestra con esta concreta relación de números: si se admite el impuesto común a la renta, que ahora no existe: el 6 por ciento sobre la renta territorial; el 6 por ciento sobre la renta mobiliaria, el 5 por ciento sobre la del comercio y de la industria y hasta el 7 por ciento sobre la renta global, que es una repetición del impuesto sobre los mismos réditos, yo me pregunto si es serio, o siquiera relativamente discreto, presumir que el agregado del minúsculo 1,80 por ciento sobre la renta territorial a los ausentes pueda producir los efectos catastróficos que no se presienten con la aplicación de los demás gravámenes. A mi modo de ver, es tan ridícula e inconsistente la objeción, que no vale la pena siga preocupando la atención de la Honorable Cámara.

Vamos a señalar, ahora, señor presidente, algunos de los puntos que destacan la disidencia de la representación socialista con el despacho de la mayoría de la Comisión de Presupuesto.

La mayoría propone, en su artículo 1º, un término de vigencia de 3 años, y agrega todavía la declaración de que quedará derogado si en el presente o en el próximo período no se sanciona la ley que determine la distribución del impuesto entre la Nación y las provincias.

Creemos nosotros que tres años son los que necesitará el Poder Ejecutivo para organizar con relativa eficacia la percepción del impuesto. Así lo aseguran los técnicos de su organización, que han calculado sin pesimismo todas las dificultades probables, especialmente en el interior del país.

La diputación socialista cree, a este respecto, que debe mantenerse el término de cinco años establecido en el decreto del Gobierno Provisional y considera, además, como el más grave obstáculo opuesto al éxito de este gravamen, el agregado que figura en la última parte del artículo 1º, que declara posible la derogación al año y medio de su vigencia.

El problema de la participación de las provincias podrá votarlo el Congreso, pero sin esa cláusula de tortura que está matando el impuesto en el preciso momento de nacer.

**Sr. Bermúdez.** — Si me permite el señor diputado...

Ese agregado ha sido puesto en el seno de la comisión por las exigencias imperiosas e ineludibles de los intereses y derechos de las catorce provincias argentinas y como una provisión para que no se repita lo que ha pasado con los impuestos internos, que debiendo ser transitorios por circunstancias excepcionales del país, como lo establece la Constitución, se han convertido en permanentes, siendo ahora una de las principales fuentes de recursos de la Nación.

De ninguna manera los representantes de las provincias, aquí y en el Senado, habrían de permitir, me parece, la

persistencia de este impuesto, si no se llega a distribuir equitativamente esa renta, en el término que se indica en el artículo 1º, entre la Nación y las provincias.

Será, pues, inoficioso cualquier argumento que haga la diputación socialista en contra de este agregado, porque están seguros que los representantes de las catorce provincias apoyarán esa disposición, que es la única garantía que tienen, en el sentido que he indicado de la participación que les corresponde.

**Sr. Ruggieri** — Lamento que el señor diputado Bermúdez no haya entendido lo que yo he querido decir. (*Risas*).

En las disposiciones relativas a la renta del suelo, la disidencia de la representación socialista se ha manifestado con irreducible firmeza. Los artículos respectivos de los dos despachos señalan conceptos y orientaciones fundamentalmente distintos.

Los dos despachos modifican el proyecto primitivo del gobierno de facto, hecho suyo por el nuevo constitucional. Disponía este último, y hago referencias de orden muy general para no detenerme demasiado en los detalles, que el monto del arrendamiento equivaldría como mínimo al 5 % del valor fiscal del suelo, presunción que los letrados llamamos *juris tantum*, porque admite la prueba en contrario del contribuyente, hasta el mínimo del 1 %. En otra disposición, al reglamentar el derecho a las deducciones, relativas al monto de los impuestos que soportan los inmuebles y a los intereses hipotecarios cuando reconocen deudas con garantía real, se fija también un mínimo de renta imponible: el mismo uno por ciento de la avaluación fiscal.

La mayoría de la comisión introduce una reforma sin duda importante, aunque no tiene ni remotamente el alcance de la proposición socialista. Se trata de la fijación de un mínimo de renta presunta del 3 %, aumentando así en 2 puntos el proyecto del Poder Ejecutivo. Y note la Honorable Cámara que se trata del mínimo de renta presunta y no del mínimo de la renta

imponible, que sólo se definirá después de la deducción por impuestos e intereses de deudas hipotecarias.

Aquí aparece, desarrollando su hábil juego estratégico, el criterio de la mayoría de la Comisión de Presupuestos, cuya adopción por la Cámara importaría introducir una nueva cuña latifundista en la economía de esta ley, que hubiéramos deseado ver dirigida especialmente al privilegio de la renta territorial, en nuestro país más extenso que en ningún otro. En este punto aparece la destreza típica...

**Sr. Martínez (J. H.).** — No es ninguna destreza. Nosotros honradamente exponemos nuestras ideas; nosotros no somos socialistas ni enemigos de ese partido; hemos votado un impuesto a la renta que el Partido Socialista nunca ha presentado y ha sido un gobierno no socialista el que lo establece.

**Sr. Ruggieri.** — Tenga paciencia...

**Sr. Martínez (J. H.).** — Tengo paciencia.

**Sr. Ruggieri.** — ... porque mis observaciones se van a traducir en números.

Quería significar que en este punto aparece la destreza, típica de la cultura conservadora, para escamotear, como en un pase de prestidigitación...

**Sr. Martínez (J. H.).** — ¡Escamotear, señor diputado, cuando voluntariamente nosotros proponemos el impuesto!

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Ruego al señor diputado por Córdoba se sirva no interrumpir.

**Sr. Ruggieri.** — ... la disposición del proyecto primitivo sobre la renta mínima imponible del 1 %, después de efectuadas todas las reducciones.

Se ha evaporado del proyecto ese mínimo de renta imponible, y esto implica, señor ministro de hacienda, restarle a sus recursos fiscales del presente ejercicio un mínimo de más de 3.000.000 de pesos. ¡Y yo sostengo, señor presidente, que una Cámara que ha sustraído del bolsillo de los modestos servidores del Estado más de 5.000.000 de pesos, según la cifra aproximada que nos diera en la sesión de anteayer el señor ministro de hacienda, no tiene derecho

de regalar esa suma de 3.000.000 de pesos a los grandes propietarios del suelo argentino! (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sé, señor presidente, que se ha pretendido explicar la supresión de ese mínimo de renta imponible. Se afirma que cuando en virtud de las disposiciones de este despacho las deducciones absorben la totalidad de la renta presunta, sea la elevada real o la escasa que pueda probar la habilidad de los señores propietarios, el gravamen incidirá sobre el rédito de los acreedores hipotecarios incluidos en otra categoría o cédula de renta. Pero la lógica del argumento es más aparente que real. Como base de nuestra obra de legislación preferimos la verdad de los hechos a las ficciones de forma, por más explicables que puedan parecer en cierto momento, porque esas ficciones en definitiva conspiran contra el interés general, que es uno de los más serios fundamentos de la justicia que debe encerrar todo cuerpo de ley.

Es que nosotros no admitimos, señor presidente, la posibilidad de que se mantenga el dominio de un inmueble que no es capaz de soportar las cargas que pesan sobre él. ¿Cómo vamos a creer que se pueda mantener la propiedad de una cosa que produce menos de lo que se necesita gastar para su conservación? Y cuando se ofrece un ejemplo, no vacilamos en presentar la causa efectiva de esa aparente contradicción económica. El secreto es muy fácil de descubrir, señores diputados. O la renta que se declara es inferior a la real, o bien — y este es el caso más frecuente — el valor del inmueble es mucho mayor que el de su tasación fiscal.

Es probable que el avalúo del fisco, establecido en forma directa por la clase terrateniente, tan bien representada, en esencia o en potencia, en todos los gobiernos que se han sucedido en el país, se haya excedido, en muy contados casos, en la determinación del valor de los bienes. Pero el hecho general es reconocidamente distinto. Ese valor fiscal es la tabla de salvación de los terratenientes para reducir el monto de sus

contribuciones directas y, en casi todas las provincias, también para liquidar con ventaja el impuesto a las herencias o para evitar determinadas contribuciones de mejoras o de valorización por obras públicas.

Es conocido en la provincia de Buenos Aires el caso de un rico terrateniente que separa con un enorme latifundio la ciudad capital de la República de la ciudad capital de la provincia, y que pudo conseguir, con el escudo de una tasación fiscal irrisoria, por no decir vergonzosa, que se declarase inconstitucional la ley sobre pago del camino pavimentado que une esas dos grandes ciudades de la República.

Se ha hablado mucho, señor presidente, de la demagogia del más alto representante del gobierno depuesto por el pronunciamiento de Septiembre. Hemos sido los más tenaces y capaces censores de esa demagogia, aunque deplorando, al mismo tiempo, que se la agitara por otros adversarios del régimen depuesto para denigrar el salario mínimo y otras conquistas sociales de los últimos tiempos. Pero lo que otros no han dicho y ha sido denunciado por nosotros, es que la demagogia se ha complicado también, sirviéndola holgadamente, con la clase rica del país.

El señor Irigoyen obtuvo del ex gobernador Vergara la atenuación de los resultados del revalúo de la propiedad inmobiliaria y la eliminación de la progresividad, que rigió durante dos años en el impuesto territorial de la provincia de Buenos Aires. ¡Demagogia visible, al servicio incondicional de la clase pudiente argentina! (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Pasemos ahora a los números y para probar, señor diputado Martínez, la evasión de más de 3.000.000 de pesos en los recursos calculados por la comisión por concepto de impuesto a la renta...

**Sr. Martínez (J. H.).**—No la evasión, sino la discriminación.

**Sr. Ruggieri.** — Excluyo a la Capital Federal y a los territorios nacionales, porque en éstos se paga la tasa

adicional del dos por mil, ya votada en el despacho relativo a la ley de contribución territorial.

El propio poder Ejecutivo estima en 18.000.000.000 de pesos aproximadamente el avalúo fiscal de las provincias. Si se elimina un 20 por ciento por las propiedades que escapan al gravamen, en virtud de su valor, tenemos 14.400 millones de pesos. Deduciendo un 60 por ciento, y es mucho en un país como el nuestro, libre de todo gravamen hipotecario, se tendrá un valor de 5.760 millones de valor fiscal; una renta mínima imponible, si se aceptara el 1 por ciento del proyecto del Poder Ejecutivo, suprimido por la mayoría de la comisión, de 57.600.000 pesos, y un recurso también mínimo de 3.168.000, por impuesto a la renta.

En el proyecto de la minoría socialista se fija como renta mínima imponible, después de efectuadas las deducciones, del 3 %, lo que aseguraría al fisco un ingreso de 9.504.000 pesos, que no ha querido aceptar la mayoría de la comisión.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Porque es un impuesto a los réditos y no al capital.

**Sr. Pinedo.** — No es esa la razón.

**Sr. Ruggieri.** — He demostrado la existencia real de los réditos que la mayoría de la comisión está empeñada en declarar inexistentes.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Si los réditos existen tendrán que pagar impuesto.

**Sr. Ruggieri.** — ¡Si el Poder Ejecutivo deja a un lado el procedimiento indiciaire y establece energicamente la verdad de las rentas!

No podría decirse que incurrimos en una afirmación sectaria al asegurar que las deducciones por intereses absorberán la totalidad de la renta presunta.

La verdad matemática de nuestra aseveración sobre la pérdida que supone el despacho de la mayoría se explica fácilmente. Un mínimo de renta de tres por ciento; si aceptamos, como promedio, que las hipotecas afectan el

50 por ciento del valor de los inmuebles, y que el servicio hipotecario, siempre como promedio, es del 8 por ciento, tenemos que mientras la renta presunta es del 3 %, el monto de las deducciones es del 4 %. La absorción, entonces, es completa. La deducción, en este caso, señores diputados, produce el milagro, que yo no sé si habrá realizado algún animal portentoso de la mitología, de quemar en su propio cuerpo todo lo que consume, sin tomarse el molesto trabajo de la expulsión.

Podría agregar ahora que el despacho de la minoría socialista propone un mínimo de renta presunta de 5 por ciento, sin admitir prueba en contra, y un mínimo imponible del 3 por ciento, después de las deducciones, lo que representa un rendimiento probable de la renta de las propiedades libres de todo gravamen, además del que supone la mayoría de la comisión y el calculado con el 1 % que acabo de mencionar y desaparecido del despacho de la mayoría, de otros 9.504.000 pesos, que también se substraen en estos momentos de los recursos necesarios para la Nación.

En la sola categoría de la renta rural el despacho de la minoría socialista asegura un rendimiento de 19.003.000 pesos más que el proyecto en debate.

Otra injusticia, que cargo en la cuenta de las contradicciones de la mayoría de la comisión...

**Sr. Martínez (J. H.).** — En una cuenta nueva, señor diputado.

**Sr. Dickmann (A.).** — Es una cuenta vieja.

**Sr. Ruggieri.** — Ha aceptado el señor diputado el adicional del 2 o/oo sobre la contribución directa de las propiedades inmuebles de la Capital y territorios nacionales; pero para esos bienes, y sobre ese anticipo de impuesto a la renta — admirable armonía impositiva de la mayoría de la comisión —, no se acuerdan las deducciones por intereses e impuestos, no obstante haberse votado como un anticipo del impuesto a la renta.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Es un impuesto distinto. Es, en realidad, un aumento de la contribución territorial.

**Sr. Ruggieri.** — ¡Es de imaginar la protesta que encenderían en este recinto los contribuyentes de los territorios nacionales, si tuvieran aquí su representación!

La misma contradicción existe en cuanto a exenciones, aunque esto se pudo reparar al tratarse el despacho sobre adicional del 2 o/oo de la contribución directa, con la proposición que hizo en la sesión de ayer el señor diputado Bogliolo. En efecto; en el despacho votado se exime del adicional, vale decir, del anticipo del impuesto a las propiedades de valor inferior a 5.000 pesos, sin limitar la exención a una sola propiedad y sin distinguir, tampoco, entre las que están ocupadas o trabajadas personalmente por sus propietarios y las que están arrendadas por éstos. En este despacho, en cambio, el beneficio se reduce a una sola propiedad del contribuyente y siempre que se trabaje por su dueño o se utilice como vivienda del mismo, incluyendo en la exención a las propiedades cuyo valor no exceda de 25.000 pesos.

Aparte de otros detalles, que marcan diferencias entre los dos despachos de la comisión, debo señalar, por ser una de las más substanciales, la relativa al impuesto que debe aplicarse a la renta global. Hemos aceptado el tipo mixto, que incluye el gravamen de las diversas categorías de rentas, con distintas bases o porcentajes de imposición, y el impuesto a la suma de todos los róditos, el primero proporcional y el último progresivo. Disentimos en la escala del impuesto global. El despacho de la mayoría parte de una base de  $\frac{1}{2}$  % que se aplicaría sobre el total de las rentas superiores a 25.000 pesos, que no excedan de 30.000, hasta llegar a la tasa de 7 % para las rentas superiores a 250.000 pesos; y el proyecto socialista propone una tasa que, partiendo del 1 %, llega al 35 % para las rentas superiores a 3.000.000 de pesos, tasa, esta última, que afectaría desde luego a un número muy reducido de felices rentistas, pero que proporcionarían ellos solos al tesoro fiscal unos veinte millones de pesos aproximadamente.

Se trata, evidentemente, la proyectada en el despacho de la mayoría, de una tasa ridícula, inferior a la que establecen las leyes semejantes de otros países.

No he de referirme a las de los proyectos anteriores que han llegado a la consideración de la Honorable Cámara, porque parten de principios completamente distintos. No la voy tampoco a abrumar con un estudio comparativo de la legislación extranjera sobre esta materia. Voy a ahorrarme ese trabajo, recordando sólo, como antecedentes muy ilustrativos, las escalas, y rendimientos denunciados por el ministro de Finanzas de Inglaterra, señor Neville Chamberlain, en los fundamentos de su nuevo proyecto de presupuesto, que han difundido los grandes diarios de esta capital, en sus ediciones del miércoles de la semana corriente. Se proyecta de nuevo por el gobierno de filiación conservadora, repitiendo lo que dispone una ley de emergencia en vigor, la escala siguiente: para rentas de 3.600 pesos, un impuesto de 340, o sea un noventa y cuatro por ciento de 9,44; para rentas de 12.000 pesos, un impuesto de 12,73 %, con un total de 1.540; para las de 24.000, uno de 17,71 %, con un total de 4.350 pesos; para las de 120.000 pesos, el 38,58 %, con un total de 46.300 pesos; para una de 600.000, el 56,62 %, con un total de 339.720 pesos; y para una renta de 1.200.000, señores diputados, un impuesto de 61,43 %, con un gravamen total de 737.220 pesos!

**Sr. Bustillo.** — Me permite el señor diputado...

Cuando se implantó en Inglaterra el impuesto a la renta, él se inició con tasas más bajas que las nuestras; luego han sido aumentadas, en primer lugar, por la guerra, y en segundo lugar, porque ha tenido dos gobiernos socialistas...

**Sr. Dickmann (A.).** — Ese impuesto se ha iniciado hace más de un siglo en Inglaterra.

**Sr. Ruggieri.** — Informo al señor diputado y de paso a la Cámara, que el gobierno británico conservador ha agregado al gravamen a la renta san-

cionado por iniciativa de la representación laborista, una sobretasa que ha dado, en el último ejercicio, según cuadro que tengo a la vista, 76 millones 700 mil libras...

**Sr. Bustillo.** — El gobierno conservador tiene que corregir los errores cometidos por los gobiernos socialistas.

**Sr. Briuolo.** — El señor diputado acaba de culpar a los gobiernos laboristas. Sin embargo, el pueblo no lo ha comprendido así. Acaba de hacer triunfar a un candidato laborista en contraposición a otro conservador, hace unos días, en el distrito de Wakefield.

**Sr. Ruggieri.** — El rendimiento de estas tasas, en el ejercicio que terminó el 31 de Marzo de este año, fué el que sigue: 287.367.000 libras, más 76.700.000 libras, que acabo de recordar, en concepto de sobretasa, o sea un total de 364.067.000 libras esterlinas, que equivalen, aproximadamente, a 4.368.804.000 pesos de nuestra moneda. Cifra sin duda fantástica y que lo será evidentemente más para la mayoría de la comisión cuando sepa — si es que hasta ahora no ha realizado el cálculo correspondiente con la base de la información telegráfica — que ella representa, señor presidente, el 48 % del total de los recursos ordinarios y extraordinarios que ingresan al tesoro nacional: recursos que ascienden a 770.963.281 libras, o sea aproximadamente, 9.258 millones de pesos moneda nacional argentina.

Estas tasas y estos rendimientos, entiéndase bien, corresponden a un país que sufre en estos momentos una de sus más agudas crisis coloniales — y es harto conocida la permanente rebelión civil en los dominios de la India — y la que en sus mismas puertas debe afrontar, como la del grave problema republicano de Irlanda; que soporta también una crisis industrial intensa, consecuencia inevitable de la criminal política aduanera que impone en estos momentos la plutocracia capitalista en todos los países del mundo, inclusive en el nuestro, donde aquélla tiene su calificada representación en esta misma Cámara del Congreso!

El ministro Chamberlain ha podido declarar, con profunda satisfacción,

exaltando el patriotismo de los contribuyentes británicos, lo siguiente:

«Estos pagos oportunos fueron mucho más allá que conseguir únicamente un aumento en el presupuesto. El hermoso ejemplo de los pequeños contribuyentes fortalecerá y llenará de vigor a los pueblos de muchas otras regiones que están con los ojos puestos en la Gran Bretaña, retemplando su confianza y las esperanzas de que se ponga a la cabeza del mundo para resolver las actuales dificultades económicas.»

Y agregaba en otra parte de su información a la Cámara: «Debo rendir un sincero homenaje a la magnífica respuesta de los contribuyentes en el impuesto a la renta, quienes demostraron sentimiento de comprensión de su deber y patriotismo tales como los pueblos británicos podrán siempre desplegar en los tiempos de angustia y de preocupación.»

Yo repito, señor presidente, las palabras con que el diario oficial de mi partido, «La Vanguardia», en su edición de ayer, clausuraba un brevísimo comentario sobre el informe del ministro de finanzas de la Gran Bretaña: «Inspírese la Cámara en el ejemplo de Inglaterra, y hará obra de verdadera justicia social.»

Ya hemos visto que nuestra Comisión Especial de Presupuesto, calcula un rendimiento probable de 51.000.000 de pesos con el impuesto a la renta; esperanza infundada, que sólo ha podido abrigar el espíritu optimista, superlativamente panglosiano, de los que están empeñados en descubrir colores de rosa en el horizonte sombrío de las finanzas y de la economía argentinas. Y esos 51.000.000, que no alcanzarán a 30, aun en la hipótesis de que ingresen totalmente a las arcas de la Nación, sin participación de las provincias, representan apenas el 6 % del monto total de los recursos calculados por la mayoría de la comisión.

No deseo terminar esta exposición sin considerar, casi lacónicamente, otro aspecto del asunto, traído con evidente timidez en sesiones anteriores, y especialmente considerado en publicaciones

dispersas, al desplegarse las primeras líneas de ataque contra la sanción de este impuesto.

Se ha vuelto a poner en duda, a mi modo de ver sin razón, la facultad del Congreso para imponer contribuciones directas, como es esta del impuesto a la renta, en todo el territorio de la Nación; y se amalgama el escrúpulo constitucional con el problema de las necesidades fiscales de las provincias, que nosotros no pretendemos, por supuesto, desconocer en estos momentos. No es precisamente esta última modalidad del proyecto la que me propongo considerar. En general, sobre este punto, participo, en parte, de las observaciones formuladas por el miembro informante de la mayoría. Creo que el Congreso podrá hallar, ahora o más adelante, la manera de establecer la participación de las provincias en la distribución del impuesto, aunque sin la limitación de tiempo que determina el proyecto. Se podrá llegar a ese resultado, mediante un concierto previo del gobierno federal y las provincias, o por el procedimiento que se anuncia propondrán los señores diputados del sector mayoritario de Santa Fe, o bien por el que rige en Francia, donde el porcentaje del impuesto llega al 10 % de la renta y se autoriza, además, a los departamentos y municipalidades, a fijar una tasa adicional, que cobra y distribuye la Dirección Central del Impuesto, y que ha elevado aquella tasa primitiva a un promedio general del 22 % de la renta.

Pero veamos, ahora, señor presidente, el primero de los aspectos enunciados, y en demostración, al mismo tiempo, de la tranquilidad espiritual con que desde el punto de vista de la legalidad del gravamen lo vamos a votar.

Los antecedentes, las mejores interpretaciones de los textos constitucionales, cuyos términos, por otra parte, son bien explícitos, establecen muy claramente, en esta materia siempre debatida de la formación del tesoro nacional, que es poder delegado al gobierno federal la imposición de contribuciones indirectas, las que enumera en su primera



parte el artículo 4º de la Constitución, además de las comprendidas en la enunciación general del último apartado del mismo artículo y las directas, por tiempo determinado, según previsión del artículo 67; poder concurrente, éste último, con el de las provincias.

Se ha pretendido más de un vez — y no es el caso ahora de demostrar si con razón o sin ella — que las contribuciones de que habla la última parte del artículo recordado no son ni pueden ser otras que las directas autorizadas por el artículo 67, queriéndose significar con esto que el gobierno federal no puede imponer otras contribuciones indirectas que las de aduana, además de las rentas de correos y las que se obtengan por la venta o arrendamiento de las tierras de propiedad del estado general; es decir, que fuera de éstas, el poder de imposición de contribuciones indirectas es exclusivo de las provincias y prohibido, por lo tanto, a la Nación, aun en casos de emergencia o de situaciones extraordinarias para el país.

Yo no participo, desde luego, de esa opinión.

Pero lo que nadie ha podido desconocer, por lo menos con algún fundamento, es la facultad de imponer impuestos directos, no obstante ser también una fuente de recursos para las provincias, por tratarse de un poder expresamente delegado a la Nación, sin otras restricciones que la de fijar un término para la percepción del gravamen.

El impuesto a la renta, señores diputados, es la contribución directa por excelencia, por su propia naturaleza y conforme a la clasificación, ya elemental, de los clásicos de la economía, y que Alberdi, el primer intérprete de nuestra Carta Fundamental, en sus estudios sobre el *Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según la Constitución de 1853*, repite y explica al comentar las dos disposiciones que acabo de citar.

Entendemos nosotros que si alguna vez han podido concurrir, para co-

honestar la creación por el Congreso de este impuesto nacional directo, las circunstancias que determina el artículo 67 de la Constitución, vale decir la defensa, la seguridad y el bien general del Estado, es precisamente en estos momentos. ¿No son acaso, señores diputados, esas mismas circunstancias las que invoca el Poder Ejecutivo al proyectar el empréstito patriótico que reclama a todos los habitantes del país?

La misma situación angustiosa del tesoro es motivo bastante para vencer a los espíritus más prevenidos contra la sanción de este impuesto que, además de llenar una necesidad fiscal del momento, incorpora al régimen impositivo argentino un principio de justicia social, una de las clásicas reglas fundamentales de Adam Smith, al graduar la imposición de acuerdo con la fortuna de cada contribuyente, en proporción a sus facultades o posibilidades y sin lesionar ningún interés general.

Yo no creo, señor presidente, que los tribunales de la Nación puedan declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la renta, sobre todo cuando al fijar un término para su vigencia se ajusta estrictamente al texto constitucional. ¿Y cómo vamos a temer, señor presidente, los pronunciamientos de la justicia, cuando en su seno se han manifestado, en estos últimos tiempos, y en proporción sorprendente, los que reconocen la validez y constitucionalidad de gravámenes aplicados sin ley del Congreso, por simples decretos de un gobierno de fuerza? (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!*).

En un país como el nuestro — me han de excusar esta reflexión los eminentes profesores de derecho que representan, como ministros, en este recinto, al Poder Ejecutivo de la Nación —, donde es tan fácil vestir de ropaje jurídico los más torpes atentados al derecho y a la ley, no ha de ser difícil al gobierno — y entendiéndolo bien los señores ministros; no por su influencia política o administrativa, sino por la ciencia y el empeño de sus

representantes legales — obtener que se respete o reconozca la validez de este impuesto a la renta, que llega respaldado por reglas precisas y escritas de la Constitución argentina.

Respeto también este impuesto el principio de la igualdad y de la proporcionalidad en todo el país; proporcionalidad relativa a la esencia del gravamen y no a la población, como se ha querido ver alguna vez, más que por lo que dice el texto constitucional argentino, por lo que establece la cláusula derogada de la Constitución norteamericana. Proporcionalidad que se mantiene con el carácter progresivo del impuesto, que es una forma de proporción, por lo mismo que esa proporcionalidad, que responde a un concepto inseparable del de igualdad, se aplica a todos los contribuyentes de fortuna o rentas semejantes. Sobre esta materia, señor presidente, los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hecho doctrina, sobre la que no podría volverse sin dañar profundamente los prestigios de la jurisprudencia.

La historia constitucional argentina — lo ha recordado muy oportunamente en la comisión el señor diputado Pinedo y en el recinto el señor diputado Aguirrezabala — ofrece un antecedente ilustrativo y categórico sobre el derecho del gobierno federal para imponer estos impuestos directos. En uso de las facultades que le atribuyó el Acuerdo de San Nicolás para dictar todas las leyes orgánicas que necesitaba el país, el Congreso Constituyente sancionó en 1854 una contribución territorial para toda la Nación, del 4 o/oo sobre todo bien raíz, y por un término mucho menos preciso que el determinado en los despachos de la comisión.

**Sr. Aguirrezabala.** — Era muy preciso, señor diputado.

**Sr. Ruggieri.** — Menos preciso, porque el Estatuto de Hacienda y Crédito estableció que se aplicaría el impuesto hasta tanto se reformase la Constitución, conforme a su artículo 30.

**Sr. Aguirrezabala.** — Pero se fijó un plazo de dos años para la reforma. Era bien preciso, señor diputado.

**Sr. Ruggieri.** — ¿Cómo vamos a dudar de la facultad del Congreso para crear estos impuestos directos, cuando los propios autores de la Constitución la usaron en la forma que acabo de expresar?

**Sr. Aguirrezabala.** — No desconozco el antecedente, pero insisto en que el término que se fijó era preciso.

**Sr. Ruggieri.** — Era impreciso, por lo mismo que lo establecía hasta la reforma de la Constitución, realizada, por otra parte, seis años después.

**Sr. Aguirrezabala.** — No vamos a discutir.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Sirvanse no dialogar los señores diputados.

**Sr. Ruggieri.** — No hay, pues, en nosotros, al votar esta ley, ningún escrúpulo constitucional. Y formulamos votos para que este gravamen nacional a la renta sea el primer paso, y decisivo, hacia la estructuración de un nuevo régimen fiscal argentino, que no persiga al trabajo ni a los consumos del pueblo y reclame la contribución de las fortunas personales para la formación del tesoro nacional, proporcionalmente al volumen o importancia de las mismas. Nada más. (*Prolongados aplausos*).

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba doctor Courel.

**Sr. Aguirrezabala.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — La ha solicitado previamente el señor diputado.

**Sr. Carreras (J.).** — Yo había pedido la palabra.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Antes que el señor diputado la han solicitado otros señores diputados.

**Sr. Courel.** — La Honorable Cámara ha escuchado los dos sesudos discursos de los miembros informantes de la mayoría y minoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y necesitábamos los diputados demócratas nacionales por la provincia de Córdoba expresar

algunas palabras que no se refieran al articulado ni a la contextura en sí de la ley que se discute, sino a la faz institucional del tema tocado tan hondamente por el señor diputado Ruggieri. Reconocemos que se trata de una conquista de orden impositivo adelantada, ya que el impuesto a la renta es un tributo elástico y de notoria justicia social destinado a evolucionar el sistema financiero argentino para afirmar en su aplicación una reforma que afianza satisfactoriamente el credo democrático de nuestras instituciones, que declaran que la igualdad es la base de los impuestos y cargas públicas. A pesar de ello, el gobierno de la provincia de Córdoba, como ya lo hiciera notar el ex gobernador doctor Rafael Núñez el año 1920, al discutirse el proyecto Molina, ha expresado sus reservas que significan una afirmación de su autonomía impositiva en esta materia y nosotros no queremos nada más que destacar y reafirmar este hecho que habla por sí solo del sano propósito que anima a aquel Estado argentino que comprendiendo la hora excepcional por que atraviesa el país consiente en desprenderse de lo propio para otorgarlo a la Nación para su crédito y su estabilidad.

**Sr. Fresco.** — Pido la palabra.

**Sr. Courel.** — El gobierno de Córdoba en una nota dirigida al Honorable Congreso de la Nación señaló su verdadera situación en dos párrafos que me voy a permitir leer nuevamente a la Cámara. Dice así:

«Al gobierno que presido no se le escapa el valor de las circunstancias que determinan y justifican medidas excepcionales, en el orden impositivo, en este momento, para salvar el desorden de las finanzas de la Nación, asegurar servicios públicos indispensables, y hasta mantener el crédito de la República. No entra al debate sobre esos aspectos del momento que vivimos. Piensa que por encima de todos los principios fundamentales de organización política, en ciertas ocasiones graves, se impone el principio de asegurar la subsistencia ordenada, satisfaciendo los fines superiores del grupo social.

La seguridad común, la defensa y el bienestar general, necesidades supremas de la nacionalidad, no pueden subordinarsen, en circunstancias de emergencia, a una mayor eficiencia de los entes autónomos. Los propios constituyentes del 53 lo previeron con sabiduría.

«El gobierno de Córdoba no afirma, ni mucho menos, la imposibilidad, enfrente de situaciones de excepción, de exigir sacrificios transitorios, a las provincias, en aras de la República unida y solidaria.

«Pero el gobierno de Córdoba, sin oponer ninguna resistencia moral a sanciones que puedan afectar fundamentalmente su existencia autónoma, reclama de vuestra honorabilidad, recaudos para el futuro, que aseguren su propia vitalidad financiera y económica, y que frustren, en forma absoluta, la posibilidad de prolongar indefinidamente una situación de excepción, y que tal se impone el sacrificio de aceptar.

«Porque, por otra parte, esos recaudos o reservas, en lo que respecta al impuesto sobre los réditos, están determinados expresamente por una cláusula de la Constitución nacional, que faculta a vuestra honorabilidad a imponer contribuciones directas, pero por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la República, y siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan.

«Córdoba comparte las razones superiores que instan a imponer contribuciones directas, pero por tiempo determinado de acuerdo al inciso 2º del artículo 67 antes transcrito, desde que le anima un auténtico afán de concordancia, que nace de una aspiración profunda de solidaridad nacional.

«Pero si participa del criterio que determina esa exigencia, se cree también en el deber de expresar su discrepancia con cualquier tesis que prescindiera de aquellas tres condiciones, cuya concurrencia simultánea exija con imperio el texto constitucional. Acepta, por los motivos indicados, el régimen de excepción que se instaure, pero le

interesa dejar a salvo la recta aplicación de la ley fundamental, desde que sería funesto sentar un precedente que la cláusula en cuestión rechaza de modo terminante.»

Queda, como ven, señores diputados, expresada con claridad la situación institucional que plantea la provincia de Córdoba con respecto al impuesto a la renta, propiciado por el Poder Ejecutivo y despachado por la comisión. Pero no quiere ello significar que las finanzas de la provincia de Córdoba sean prósperas, sino que en aquella provincia, el Partido Demócrata, representado en el gobierno, ha tomado las medidas que la ciencia financiera aconseja realizar en forma prudente, en presencia de la hora difícil por que se atraviesa, haciendo un presupuesto provincial de verdad, de sano equilibrio, suprimiendo la inflación de la burocracia estéril, las partidas superfluas y todo aquello que significa un gasto inútil y perjudicial a los intereses públicos.

Los sacrificios de todo orden que ha debido realizar para disminuir sus gastos, de acuerdo al sentir del momento y de la hora actual, los comprenderán los señores diputados con un solo dato que he de proporcionar a la Honorable Cámara.

Con fecha 27 de Febrero del corriente año, es decir, diez días después del cambio de gobierno, se sometió a la Legislatura el proyecto de presupuesto que fué aprobado para el año en curso, con una reducción sobre el vigente de más de 3.000.000 de pesos y sobre el del año 1929 de más de 7.000.000 de pesos. Hago presente que el monto del mismo era de 38 millones y medio de pesos, incluidos los servicios de la deuda, es decir, ha quedado reducido a 31.000.000 de pesos, habiendo disminuído más de un 30 % en forma global sin que el resorte administrativo sufra perjuicio, dificulte su acción al gobierno, ni paralice las obras públicas por las que siempre se ha caracterizado. Se ha procedido con un criterio de economía que califico de heroico, pero economía necesaria, im-

prescindible e impostergerable, pues era menester ponerse a tono con las exigencias del momento. No se ha aumentado ningún recurso ni se han establecido nuevos; lejos de ello: se han disminuído los existentes, modificando y ajustando sistemas de percepción, pues así cree aquel gobierno que debe procederse en los actuales momentos para satisfacer las imperiosas exigencias de la opinión pública y de la situación de la provincia.

El gobierno de Córdoba, pues, ha afrontado y conjurado en la medida de sus fuerzas la situación económica de la provincia, absteniéndose de recargar en los contribuyentes el enorme peso de los impuestos que ya soportan, con nuevos tributos que creemos difícilmente resistirán por la situación de depresión colectiva y general y en la esperanza de que no haciéndolo, ningún otro poder podía crearlos, de acuerdo con la Constitución. Pero ante la supremacía de orden político que se viene manifestando, desde tiempo atrás agregada también hoy a la supremacía económica del gobierno nacional, no podemos los diputados por Córdoba dejar de expresar nuestros reparos, en concordancia con su gobierno, ya que ello implica invadir facultades privativas de orden impositivo local que importan, si continuamos en este plano inclinado de renunciamientos autonómicos, no prever los resultados desastrosos de los problemas institucionales y económicos que pueden producirse.

Los poderes de la Nación existen por voluntad de las provincias, quienes le han fijado sus deberes, atribuciones y recursos, a los que deben sujetarse para que la vida federativa del Estado se desarrolle dentro de la armonía constitucional. Pero si ellos, fundándose en una circunstancia de excepción, pretenden dar como consumada y aceptada una facultad de tipo extraordinario y limitado que se tolera por circunstancias de estabilidad y crédito nacional, incorporando recursos originarios de los Estados provinciales, manifestamos claramente que eso constituye un artificio irritante a nuestro sistema fede-

rativo, que nosotros, los diputados, estamos obligados a defender. Preferimos la reforma constitucional que contemple estos problemas antes que consentir una ley impositiva que afecte a esas facultades tan claras y terminantes.

Hecha esta reserva y comprendiendo las exigencias patrióticas de la hora presente, declaro que votaremos los impuestos proyectados en el despacho de la comisión, ya que el mayor recaudo de nuestra tesis, es el tiempo limitado de su vigencia y la proporcionalidad que ha de dictar este Congreso, como significación de que estos impuestos los otorgan las provincias al gobierno nacional para hacer frente al crédito y estabilidad del mismo en la hora en que es necesario afianzarlo, consolidarlo y darle vida.

Con estas palabras reafirmamos nuestra situación frente a los impuestos creados y sólo esperamos que para felicidad de la Nación contribuya nuestro voto a salvar las dificultades del presente.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*).

**Sr. Palacio.**—Iba a proponer una pequeña modificación a la última parte del artículo que está a la consideración de la Cámara.

**Sr. Aguirrezabala.**—Eso correspondería hacerlo en la discusión en particular.

**Sr. Presidente (López).**—Se está discutiendo en general, señor diputado.

**Sr. Aráoz (E. M.).**—Pido la palabra.

Deseo formular a este despacho de la comisión, en nombre de la representación Demócrata Nacional de Salta, algunas observaciones; pero antes he de hacer ciertas consideraciones de carácter general.

Razones de orden superior, que derivan de la gravísima situación por que atraviesan las finanzas del país, nos han llevado a muchos diputados de provincia a aceptar el despacho de la comisión tal cual ha sido concebido, aunque en algunos casos hayamos tenido que sacrificar ciertos puntos de vista particulares que, a no mediar urgentes necesidades fiscales, nos habría complacido tratar más circunstanciadamen-

te. El despacho de referencia es evidentemente el resultado de un trabajo metódico en el que se han armonizado ideas y se han ensamblado conceptos por miembros de los diversos sectores de la Cámara; él es el fruto reflexivo y madurado de un estudio que ha venido realizando la comisión con la dedicación más ejemplar, con el patriotismo más acendrado y con el máximo de consagración mental por parte de legisladores de reconocida ilustración y experiencia en la vida económica y financiera de la República.

El plan así coordinado y propuesto a la consideración de la Honorable Cámara por la mayoría de la comisión, es un plan integral y su estructura consta de un andamiaje que no podría ser destruido, por lo menos en lo que a cifras se refiere, en la discusión en particular, sin ocasionar un grave daño a la base sobre que reposa, el equilibrio del presupuesto. Pero en este despacho parcial que estamos discutiendo en este momento hay una situación de carácter institucional que no puede ser aceptada a mi juicio, por los diputados de provincias, contrariamente a lo que opina mi distinguido colega el diputado por Corrientes señor Bermúdez, y es esta: se establece en el proyecto de ley: «A partir del 1º de Enero de 1932, y por el término de dos años, todos los réditos derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o de extranjeros, residentes o no residentes en el territorio de la República, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece la presente ley», y luego se agrega: «Una ley determinará cómo deberá repartirse a contar del 1º de Enero de 1934 entre la Nación y las provincias, el producido del impuesto. Si a esa fecha no hubiera sido sancionada esa ley se considerará derogado este impuesto.»

Acepto, señor presidente, que el Congreso pueda sancionar impuestos directos por una razón de emergencia.

Considero que la disposición del inciso 2º del artículo 67 de la Constitución nacional expresa claramente la situación del Congreso cuando le acuerda la facultad de imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcional-

mente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Creo que en este caso existen concurrentemente las condiciones que la Constitución enuncia para que el Congreso pueda sancionar un impuesto directo; pero no me explico qué razón habría para incorporar al texto mismo de la ley una disposición estableciendo que el Congreso una vez terminada la emergencia que dió lugar a la sanción dictará una ley en la que se establezca cómo ha de repartirse el producido de ese impuesto entre la Nación y las provincias. Creo que en principio, la facultad impositiva pertenece en este caso a las provincias y que la Constitución la acuerda también a la Nación únicamente como un recurso de emergencia.

Citaré en apoyo de esta doctrina una opinión del profesor de derecho constitucional, doctor González Calderón, quien dice: «Como que es una contribución directa, el impuesto a la renta pertenece en principio a las provincias. El Congreso sólo puede crearlo en las circunstancias previstas por el inciso 2º del artículo 67, y ajustándolo a las condiciones estipuladas allí: «Imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan». Son, pues, tres condiciones concordantes que deben presentarse «conjuntamente», porque el texto las reúne con una conjunción copulativa, y no tres situaciones distintas previstas separadamente como algunos han pretendido sostener. Proveer a la «defensa» del Estado es afirmar la «seguridad común» y, por lo tanto, proveer al «bien general» del pueblo. Todo ello comprueba el carácter «extraordinario y circunstancial de las contribuciones directas que el Congreso está facultado a crear por el inciso 2º del artículo 67 como lo entendieron los Constituyentes y Alberdi en su *Sistema económico y rentístico*».

Por mi parte, creo más, señor presidente, creo que siendo esta facultad impositiva nacional una facultad de excep-

ción, hay que interpretarla restrictivamente, en su verdadero sentido doctrinario.

¿Cuál es el objeto de la creación de este impuesto? Llenar ciertas necesidades fiscales extraordinarias del momento, vale decir, proveer a la realización de un presupuesto que es forzoso equilibrar. Por consiguiente, entiendo yo, que cualquier impuesto directo de emergencia debiera tener el carácter de anualidad que tienen las leyes de presupuesto. En este sentido el doctor Montes de Oca dice: «Para las contribuciones directas la Constitución establece reglamentaciones fijas. En primer lugar ellas se han de dictar por tiempo determinado; con esto la Constitución no establece una novedad: todos los impuestos son por tiempo determinado en la República, y el Congreso debe votar anualmente la ley de presupuesto y «anualmente también las de impuesto». La diferencia que puede notarse en este caso explica las palabras del texto constitucional, al aceptar que algunas de esas rentas son fijas; la Constitución ha querido que siempre existan rentas de aduana, etcétera.»

Yo no voy a plantear ahora a la Honorable Cámara el problema de que ella se pronuncie sobre la anualidad de este impuesto, por una razón de orden práctico, porque hay ya dos despachos de comisión a votarse que no son ajenos al plan financiero que luego trataremos en otro proyecto de ley; yo votaré el despacho de la mayoría que establece un plazo más limitado, pues no desearía perder mi voto o que él determine el triunfo de la solución que menos me satisfaga, pero afirmo que la facultad del Congreso es una facultad de excepción. El Congreso al sancionar el impuesto directo, debiera tener en cuenta que el fin de su sanción es únicamente el de servir necesidades de un presupuesto en el que se han votado gastos para los cuales es necesario crear otros recursos, ya que los ordinarios y permanentes han disminuído en forma inusitada, catastrófica; sin ello ese presupuesto se cerraría con un déficit apreciable. Estas necesidades fiscales del momento pueden modificarse en otro ejercicio y el Congreso tendría así cada

año la oportunidad de votar sus recursos, usando de los de emergencia sólo en los casos de gravedad a que se refiere el inciso 2º del artículo 67 de la Constitución.

Nada más.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra, señor presidente, para una aclaración respecto de lo que acaba de decir el señor diputado, que me ha aludido.

Me extraña la observación que ha hecho sobre mis palabras el señor diputado, porque no estoy en contradicción con él. Me he limitado a decir. — a propósito de la exposición del señor diputado Ruggieri, quien manifestó su extrañeza por este último apartado del artículo 1º. — que para los diputados que representamos a las provincias, ese último apartado es la garantía más eficaz de que el Congreso ha de dictar en su oportunidad la ley que establezca la distribución proporcional y equitativa del producido de este impuesto entre la Nación y las provincias. Contiene además ese apartado, la disposición expresa de que si esa ley que ha de distribuir el producido del impuesto, no se dictara, el impuesto caducará, lo que le da el carácter de una transitoriedad perentoria, porque automáticamente dejará de estar en vigor si el Congreso no dicta la otra que determine la distribución.

En consecuencia, no discrepamos con el señor diputado, sino en cuanto él cree que estas leyes deben ser anuales, mientras que por el despacho de la mayoría de la comisión se establece que durante tres años la renta que producen corresponderá a la Nación. El sector socialista discrepa también con el despacho de la mayoría, pero sólo en cuanto cree que el término de tres años que se establece en él será insuficiente para preparar debidamente la organización y percepción de este impuesto, y entiende que debe establecerse el plazo de cinco años. No hay, en el fondo, más que una discrepancia de tiempo.

Mi observación no tenía, pues, sino el sentido que he expresado. Creo, lo repito, que esta prescripción es la ga-

rantía de que no ocurrirá con esta ley lo que ha sucedido con la de impuestos internos, es decir, que no se convertirá en un impuesto nacional permanente. Y si no fuera así, probablemente muchos representantes de los Estados federales no habríamos suscripto este despacho.

**Sr. Aráoz (E. M.).** — Pido la palabra.

Para explicar al señor diputado Bermúdez, en qué disintimos.

Yo entiendo que el Congreso no tiene facultades para expresar ahora, en un texto legal, que dentro de tres años se va a dictar una ley estableciendo la forma en que se ha de distribuir en adelante este impuesto entre la Nación y las provincias. En primer lugar, porque lo considero improcedente; y, en segundo lugar, porque creo que una vez desaparecida la razón de emergencia que ha determinado la creación de este impuesto como fuente de recursos de la Nación y a los fines de cumplir las necesidades del presupuesto, las provincias recobran plenamente su facultad impositiva.

**Sr. Bermúdez.** — Quiere decir que el señor diputado cree que no debe subsistir como recurso de la Nación sino durante tres años, y luego desaparecer.

**Sr. Aráoz (E. M.).** — Y luego desaparecer.

**Sr. Bermúdez.** — En ese punto sí discrepamos, porque la ley podría subsistir pero en base del reparto proporcional entre la Nación y las provincias.

**Sr. Aráoz (E. M.).** — Es lo que no acepto. Si, con posterioridad llegan a concurrir nuevas circunstancias que justifiquen otra vez la aplicación de este impuesto como fuente de recursos para la Nación, habría llegado recién el momento de que el Congreso considerara nuevamente esa situación; si ello no ocurriese, el impuesto quedaría exclusivamente reservado a las provincias como impuesto permanente, o mejor dicho como fuente de recursos fiscales a imponerse por las Legislaturas de Provincia.



Por eso pido a la comisión el retiro de la segunda parte del artículo.

**Sr. Bermúdez.** — Si se retira la segunda parte, algunos retiraríamos nuestras firmas del despacho.

**Sr. de la Vega.** — En particular tendrán la oportunidad, los señores diputados, de tratar ese punto.

**Sr. González (B. S.).** — Pido la palabra.

El impuesto a la renta pertenece a las provincias. A pesar de las dificultades económicas y financieras de la Nación, considero inconveniente que el Congreso imponga al país el impuesto a la renta, para aliviar las penurias del erario público de la Nación, sin dar desde ya participación proporcional a las provincias de la recaudación que realice por tal concepto.

Si la Cámara sanciona el proyecto en discusión, en los términos aconsejados por la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda, colocará a las provincias en condiciones de inferioridad, al restarles la materia imponible sobre la renta, y las provincias, con derecho legítimo, como en los impuestos internos, podrían también imponer en estos momentos impuestos a la renta, con el propósito de aliviar las situaciones económicas precarias de la mayoría de los Estados argentinos. Si ello llegara a producirse, tendríamos desde luego en el país la superposición de impuestos sobre una misma materia imponible.

Considero, además, señor presidente, que propender a la disminución del haber rentístico de las provincias, constituye un debilitamiento del federalismo y debemos, en cambio, robustecer las autonomías de las provincias, dejándoles a salvo las fuentes impositivas propias. Es así como aseguraremos a las provincias su bienestar e independencia económicos.

Por estas breves consideraciones, votaré por la negativa del proyecto de ley a consideración de la Cámara, salvo que la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda limitara su vigor para la Capital Federal y territorios nacionales, o se estableciera, desde ya,

en el proyecto de ley en discusión, la participación de las provincias en la recaudación a efectuarse.

Nada más.

**Sr. Carreras (J.).** — Pido la palabra.

No me mueve otro propósito que el de dejar claramente establecido, cuál ha de ser nuestra situación frente al delicado y gravísimo problema que se plantea con este proyecto de impuesto a la renta.

La brevedad del tiempo fijado y la preocupación de no repetir conceptos elocuentemente emitidos por los señores miembros informantes de la comisión, me obligan a no entrar en mayores consideraciones, no obstante la inmensa trascendencia de este asunto, que afecta el orden social, económico y constitucional de la Nación y de las catorce provincias argentinas.

Muchos motivos, señor presidente, nos inducen y obligan, a la representación Demócrata Progresista, a prestar nuestra adhesión a este proyecto de impuesto. Nos obliga, en primer término, la circunstancia especialísima de estar incorporado a nuestro programa de gobierno, como algo sustancial que nos permitiría reformar el primitivo y vergonzoso sistema impositivo. Y nos obliga, asimismo, el hecho, no menos elocuente, de responder, como se ha dicho ya por el señor diputado por la Capital, a nuevas y modernas orientaciones en materia rentística, y cuyas características consultan, en un todo, nuestra ideología, por la misma finalidad social de sus principios, y nos obliga, más aún, la íntima convicción de interpretar el sentimiento de solidaridad y concordancia que predomina en el pueblo de todas las provincias, en esta hora de angustia y de justificadas inquietudes financieras para toda la Nación. Estas sencillas razones nos inducen a dar como aceptados los extremos de situación excepcional, extraordinaria y circunstancial a que se refiere el inciso 2º del artículo 67, no obstante no haber surgido ni haberse evidenciado en las alternativas que ha tenido este debate, donde los gastos

públicos no parecieran preocupar demasiado a los que tienen en sus manos la dirección y la responsabilidad de los negocios públicos.

Ese espíritu conciliador y solidario, a que me he referido, del pueblo de las provincias, es necesario que también predomine con más relieve aún en el seno de esta Honorable Cámara, buscando con la mayor buena voluntad la solución práctica y justa que debemos hallar sin apartarnos del camino de la legalidad en el difícil momento histórico que vivimos; solución práctica que no es otra que la de dar a todas las provincias una equitativa participación en los beneficios del impuesto a la renta, participación que debe establecerse de inmediato en el proyecto que discutimos: proceder en otra forma, importaría no responder a las verdaderas necesidades del país, y hasta diría que significa violar abiertamente el espíritu de nuestra Constitución nacional, ya que no puede pensarse en forma alguna que estuviera en el pensamiento de los constituyentes del 53 al echar las bases de nuestro sistema de gobierno representativo, republicano, federal, el poner al mismo tiempo en manos del poder central el instrumento destructor de ese organismo que se acababa de crear, agotando sus fuentes de riqueza e impidiendo a las provincias el libre desenvolvimiento económico a que tienen derecho como estados autónomos; creándoles una situación a la que serían fatalmente arrastradas en caso de aprobarse el impuesto como está redactado, para colocarlas en la imposibilidad de dar cumplimiento a los mismos preceptos constitucionales del artículo 5º, como serían el de asegurar la justicia y proveer a la educación primaria, ya que sus recursos se encontrarían exhaustos, su crédito disminuido y sus finanzas al borde de la bancarrota.

Cuando escuchaba en la sesión de ayer la palabra vibrante de los representantes de Mendoza que defendían calurosamente sus puntos de vista, pensaba, señor presidente, que los diputa-

dos que venimos de las provincias estamos obligados a hablar con claridad y valentía para traer al seno de esta Cámara la síntesis suprema de los sentimientos, de los intereses, de los anhelos y de las aspiraciones que predominan en las diversas regiones del país, y traducirlos luego, sin egoísmos ni preeminencias, en fórmulas concretas que reflejen y traduzcan fórmulas definitivas en el lógico ordenamiento de la legislación nacional.

Conforme a ese criterio y a esas normas de conducta, estamos autorizados a afirmar desde nuestras bancas que el pueblo de la mayor parte de las provincias no está conforme con el impuesto a la renta en la forma propuesta por el Poder Ejecutivo y los miembros de la comisión. Yo preguntaría a los señores diputados que han sustentado este proyecto, si se han detenido, siquiera por breves instantes, a meditar sobre los graves trastornos y las gravísimas consecuencias que fatalmente se producirían en caso de que las provincias, en su afán de sanear sus finanzas y cumplir con sus obligaciones, establecieran también este impuesto a la renta, ejercitando el derecho que les da facultades concurrentes, tratándose de un impuesto que por su misma naturaleza, sus modalidades y por las dificultades de su organización y percepción, no permite la doble imposición. Yo presiento la objeción. Se me dirá acaso, que este impuesto se establece por un brevísimo término después del cual las provincias se encontrarán en libertad de acción para ampliar sus recursos o reformar su régimen impositivo.

Pero yo diría a los señores diputados que si la Nación se encuentra apremiada por sus deudas, las provincias no pueden esperar más porque idénticas obligaciones las inquietan en esta hora de profunda conmoción económica. Y diré más aún, señor presidente: Se ha dicho en esta Cámara en la sesión de ayer, y se ha repetido hoy; que tenemos un elocuentísimo ejemplo con la implantación de los impuestos internos en 1891, que se hizo con las mis-

mas promesas de que sería transitoria. Ese ejemplo ha alarmado seguramente a los señores diputados, y especialmente, a los miembros de la comisión, al establecer que ese impuesto quedará sin efecto si no se dicta una ley dando participación a las provincias en los beneficios del mismo.

Es merecedora de todo elogio esa preocupación de los señores diputados que han advertido el peligro. Pero es necesario no sólo advertir el peligro, sino también evitarlo. Y la única forma de evitarlo, es establecer desde ahora la debida participación de las provincias en la percepción de este impuesto, como lo vamos a proponer en el proyecto que presentaremos a la consideración de la Honorable Cámara.

Desde el punto de vista exclusivamente fiscal creo, en consecuencia, que este impuesto no reportará mayores beneficios a la Nación si las provincias establecen, como tienen derecho, el impuesto a la renta. En cambio, se habrá perdido mucho en la vida de nuestras instituciones, debilitándose los lazos del federalismo, que tantos sacrificios costara en las horas tristes y aciagas que precedieron a la organización nacional, y robusteciendo, por otra parte, un centralismo que puede ser funesto y peligroso para la evolución social, política y económica de nuestro pueblo.

Por estas razones, por la misma preocupación que todos han demostrado por evitar estos graves peligros, yo pido la mayor atención para resolver este problema con el mayor acierto e inteligencia. Ya que no podemos resolverlo con exactitud y en la forma definitiva que en Estados Unidos resolvieron en su última reforma constitucional el conflicto creado por el impuesto a la renta, resolvámoslo, repito, con un criterio práctico y conciliador evitando los peligros del futuro.

Nada más. (*Aplausos*).

**Sr. Presidente** (López). — Tiene la palabra el señor diputado Saggese.

**Sr. Saggese**. — Los radicales vamos a votar el despacho de la comisión en mayoría, pero consideramos necesario for-

mular serias salvedades con respecto a nuestro voto.

Deseamos, de acuerdo con lo que han manifestado todos los sectores de esta Cámara, contribuir como los que más a la solución del grave problema financiero que aflige a la Nación y al gobierno nacional. Pero eso no significa que olvidemos la situación también afligente por que atraviesan todas las provincias argentinas.

Se podrá argumentar — y yo argumento así en este instante — que el interés supremo de la Nación ampara, auspicia y resuelve el interés fraccionado de las provincias; pero eso no significa reconocer como un derecho legítimo de la Nación el imponer sobre las rentas, excluyendo a las provincias de los beneficios de ese impuesto.

La Constitución nacional en su artículo 5º, como acaba de manifestarlo el señor diputado por Santa Fe doctor Carreras, impone a las provincias obligaciones muy serias en cuanto a la atención de su régimen económico, político y social, y las provincias atraviesan en las presentes circunstancias, una situación realmente afflictiva. La crisis que agobia a la Nación — y que se refleja en el reclamo hecho al Congreso por el Poder Ejecutivo solicitando una política económica urgente, de emergencia — gravita también sobre las provincias, y los legisladores que representamos a los Estados argentinos no podemos desentendernos en absoluto, ni aún con carácter transitorio, de esas necesidades y esos derechos.

El artículo 4º de la Constitución establece con toda claridad cuáles son las fuentes de las que puede sacar recursos la Nación para atender sus necesidades de todo orden, como ser instrucción pública, secundaria y superior, ejército, marina, servicio de correos, de navegación y puertos, obras públicas, etcétera... Leyendo con atención se ve que no establece, en absoluto, el gravamen a las rentas que corresponde por derecho constitucional a las provincias. Yo me digo, si debemos en estas circunstancias atenarnos con estrictez al artículo 4º de la Constitución.

En el artículo 67, inciso 2º, se establece, como lo han recordado otros señores diputados, que el Congreso puede imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado así lo exija. Habría, entonces, señores diputados, que determinar si el momento de crisis que se atraviesa faculta a la Cámara a sancionar la imposición que estamos discutiendo.

Si hemos de escuchar el mensaje del Poder Ejecutivo sobre las medidas de que nos ocupamos, si hemos de auscultar la opinión pública, si hemos de atenernos a las cifras estadísticas; si hemos de recoger los informes de las oficinas del gobierno nacional en cuanto a la disminución de las rentas que se perciben; si hemos de interpretar, en fin, el angustioso instante que se vive por las conversaciones de todas las personas, el país, la Nación, atraviesa un momento irregular e insólito en cuanto a su desenvolvimiento económico. A mi criterio, entonces, el artículo 67 en su inciso 2º, en estas circunstancias corresponde aplicarlo; pero si la comisión en mayoría no hubiera establecido un plazo fijo y perentorio para la vigencia de la ley que estamos discutiendo, los representantes de Santa Fe, los representantes radicales en general en cuyo nombre estoy realizando esta exposición, no hubiéramos votado ese impuesto, no lo hubiéramos votado porque hubiéramos considerado que se establecía un impuesto arbitrario, que se desconocía un derecho indudable de las provincias y sólo como un caso de emergencia, como un caso de salud general es que vamos a contribuir — si otras razones que aquí se expongan no hicieran variar nuestro criterio — a la sanción del despacho de la mayoría.

¿Esta situación de emergencia habrá terminado dentro de los tres años que se reclama para su aplicación y el año y medio que se establece para dictar la ley que ha de distribuir los beneficios del impuesto a la renta a las provincias? Podría ocurrir que sí, aun cuando la

crisis tiene raíces muy hondas, de toda naturaleza: crisis comercial, crisis industrial, crisis nacional y crisis mundial. La crisis mundial se refleja sobre todos los países que componen la sociedad humana y nosotros no podemos encontrarnos apartados de los efectos de la crisis general del mundo; de manera que si, acaso dentro de un año y medio y al finalizar el año 1933 la crisis persevera, eso no significa que el impuesto ha de continuar siendo usufructuado pura y exclusivamente por la Nación y que la ley de distribución no haya de dictarse.

Varios gobernadores de provincia han hecho llegar estas ideas que sustentan en forma sintética, al señor presidente del Cuerpo, en notas todas ellas perfectamente documentadas; y si no bastara la opinión autorizadísima de los gobernadores de provincia que han hecho llegar a este recinto su concepto con respecto al impuesto a la renta, estableciendo que él es un derecho de las provincias y que es de todo punto necesario a las provincias porque todas ellas están en déficit, si no fuera suficientemente eso, está la opinión autorizada que acaba de citar el señor diputado por Salta doctor Aráoz, del doctor González Calderón.

—Reasume la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan F. Cafferata.

El señor diputado representante de Salta ha leído unas palabras de un artículo publicado hace algunos días por el distinguido constitucionalista enterriano que he citado. Para establecer principios constitucionales intergiversales, que sólo pueden dejar de ser atendidos en el caso de la facultad del Congreso que establece el inciso 2º del artículo 67, dicho constitucionalista ha manifestado también lo siguiente:

«Están plenamente autorizados los legisladores enviados por las provincias al Congreso de la Nación para invocar los derechos inviolables de los pueblos que los han elegido, defendiéndolos, o haciéndolos reconocer por el Gobierno

Federal. Si creen que es posible instituir ahora el impuesto a la renta como uno de los recursos inexcusables para equilibrar el presupuesto, no ha de ser él un motivo para conmover la solidez de la estructura federal del Estado argentino, poniéndola en riesgo inminente de ser socavada en sus cimientos necesarios y provocando la inventiva de los gobiernos locales en sus justos propósitos de arreglar las finanzas propias.»

Tiene razón el señor González Calderón y también tienen razón los urgentes reclamos del país y éstos son en el sentido de que se armonicen los gastos con los recursos, que se establezca una equidad perfecta entre las necesidades del erario público y los impuestos que se apliquen para establecer un cómputo exacto en los recursos.

Es por eso, señor presidente, ateniéndonos a esos conceptos, puntualizando los aspectos constitucionales de la cuestión y estableciendo que ellos son los de los radicales que representamos en este Congreso a diversas provincias argentinas, que exigimos que ese plazo no pueda pasar del establecido en el proyecto de la comisión y es por eso, sólo por eso, que votaremos ese despacho. Y agregaré que lo hacemos además con espíritu de abnegación argentina.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. Aguirrezabala.** — Señor presidente: advierto la situación, un poco rara, en que nos coloca a los diputados radicales por Entre Ríos las manifestaciones que han hecho otros representantes del interior de la República en este debate. Parecería como un argumento decisivo y perentorio para decidirlos a votar por este impuesto la necesidad apremiante y urgente de la Nación, que exige en estos momentos el sacrificio de los intereses provincianos en homenaje a los de la unidad nacional.

Quiero decir, antes de seguir en mi exposición, que no se nos ha de poder hacer a los diputados radicales por Entre Ríos el cargo de que conspiramos

contra el espíritu de unidad de la Nación si votamos en contra de este impuesto; porque si bien es pública y notoria nuestra conducta de siempre manteniendo el prestigio de la autonomía de los estados provinciales, no son menos públicas y notorias en la historia de la República los sacrificios de la provincia de Entre Ríos para la organización del país, y la disposición de siempre en sus hijos de contribuir al mayor prestigio y a la mayor grandeza de la Nación.

Viene este impuesto a incorporarse al régimen impositivo de la República afectado por el pecado original de su nacimiento. Es la obra o el producto de un gobierno que no lo hubiera decretado nunca por las razones de justicia social que este impuesto involucra y que lo ha hecho simplemente para allegar a las arcas del Estado mayores recursos que le permitieran seguir manteniendo el andamiaje muy costoso y muy caro de la administración pública.

No viene el impuesto a la renta a establecerse entre nosotros obedeciendo a fundamentales razones que aconsejan la derogación de otros impuestos que no tienen carácter social plausible, sino que viene, como todas estas reformas fiscales, atropelladamente, sin mayor estudio del asunto para llenar un claro allí donde flaquean las rentas de la administración para satisfacer los gastos de la misma. Así aparecieron los impuestos internos y así aparece en este instante de la vida del país, el impuesto a la renta, que será aprobado como una necesidad perentoria, se nos dice, para atender las necesidades de la administración pública y los compromisos de la Nación.

Sostengo que no existe la razón que determina el artículo 67, inciso 2º, de la Constitución para establecerlo por tiempo determinado; y lo sostengo porque si este Congreso hubiera querido hacer en el presupuesto de la administración pública las podas necesarias y urgentes que se imponen por las circunstancias por que atraviesa el país, se hubieran podido ahorrar millones de pesos, que habrían hecho innecesaria la

implantación de este impuesto que viene a vulnerar principios fundamentales de la organización federal que la República se ha dado. Si no se hubiera querido a toda costa mantener la administración frondosa que el país no puede soportar, si no se hubiera querido mantener una enormidad de instituciones que dentro del organismo de la administración gravitan sobre sus intereses, este impuesto no hubiera sido necesario, ni se votaría.

Sé, como lo ha dicho el señor diputado socialista, doctor Ruggieri, que a este impuesto no habrá Corte de Justicia que lo declare inconstitucional, porque ya han establecido los tribunales de la República la jurisprudencia de que el único cuerpo de gobierno del país que puede fijar si es el momento o la oportunidad perentoria para la creación de estos impuestos, es el propio Congreso de la Nación. Pero yo digo que el Congreso de la Nación lo va a hacer sin cumplir estrictamente y a conciencia con el deber que las circunstancias le imponen. Será siempre necesario este impuesto para sufragar gastos cuantiosos, como he dicho, para pagar a la administración, porque lo cierto es que año tras año, ésta se va haciendo más costosa y llegará el momento en que la economía de la Nación naufragará por mantener este costoso edificio de la administración pública del país.

**Sr. Lima.** — En el mal está el remedio. Eso provocará la reacción.

**Sr. Aguirrezabala.** — Lo que ocurrirá con este impuesto, será esto: que demorará la necesidad y urgencia de reformatar el sistema rentístico de nuestro país, de readaptarlo a las nuevas tendencias que predominan en el mundo, contemplando la situación de las provincias respecto de la Nación y dentro de las provincias la de los municipios. Es necesario y perentorio un ajustamiento de funciones y de organismos. Todo impuesto nuevo que se crea, toda nueva carga que se acumula antes de que hagamos este estudio, es un serio inconveniente para esa organización impositiva. Este impuesto que-

dará incorporado permanentemente a pesar de las ilusiones de los señores diputados de provincia que hablan de porcentajes y de reparticiones entre las provincias y la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Ese porcentaje o esa repartición del impuesto que se proyecta entre la Nación y las provincias agrava aún más el carácter de inconstitucionalidad que denuncio, porque la Constitución en el inciso 2º del artículo 67, no faculta al Congreso para semejante reparto y sí sólo para el establecimiento de un impuesto en las circunstancias bien graves que enuncia: cuando está comprometida la salud del país. Y su característica ha de ser por tiempo determinado, de donde se deduce que en cuanto la necesidad de su implantación hubiere desaparecido, el propio impuesto debiera desaparecer. Habremos de estar, entonces, también en contra de la cláusula contenida en el despacho de la mayoría en cuanto afirma que en determinado plazo ha de ser distribuido el impuesto entre la Nación y las provincias.

Disento la constitucionalidad del impuesto y me fundo en una regla de interpretación sana y honesta que no puede desconocerse. La Constitución autoriza en el mencionado artículo la creación de un impuesto por período determinado, pero la Constitución dice algo más a todos los argentinos. Obliga a mantener el régimen federal de gobierno; y la creación de estos impuestos es un atropello más inferido a los Estatutos federales en su autonomía que ha de sumarse a los de orden político de toda especie de que está llena nuestra historia. Esto significa violar en el hecho y en la teoría el régimen de la Constitución; significa olvidarse que las provincias fueron anteriores a la Nación, que la constituyeron con su esfuerzo y la crearon con su sacrificio, cediéndole una parte de sus atribuciones y derechos, no para desaparecer como entidades provinciales, sino para organizar un régimen que asegurara la representación exterior ante la opinión del mundo y la atención de los intereses generales de la

entidad que se constituía. No renunciaron las provincias a su carácter de estados autónomos, sino para constituir y coordinar un órgano de mayor personalidad y carácter frente a las naciones del mundo.

Sostengo, pues, señor presidente, que para interpretar las cláusulas de la Constitución no nos hemos de atener solamente a su letra fría y sino a su espíritu general. Debemos ir más adentro. Demos ahondar en el espíritu y en las necesidades del pueblo argentino cuando se constituyó en nación bajo el régimen federal y respetando la autonomía de los estados provinciales.

Lo que sucede — y acaso me repita un poco en esta exposición desordenada — es que en el país los impuestos no se han hecho, no se hacen y no se harán, mientras no cambiemos de métodos, con criterio social y económico, sino con el simple criterio de voracidad fiscal que, insaciable, día a día pide más porque el tesoro de las arcas nunca alcanza para cubrir los gastos superfluos e innecesarios.

¡Habremos de cambiar alguna vez, señor presidente! Yo recojo las últimas palabras del señor diputado doctor Ruggieri para decir que el voto patriótico que él ha formulado, de que la aplicación de este impuesto signifique una reforma en los procedimientos fiscales de la República, se va a ver postergado, se va a ver relegado con la sanción de este impuesto, que con tanto calor ha defendido el señor diputado, se va a ver relegado porque éste será un nuevo motivo agravante del caos fiscal de la República. Este impuesto irá a gravitar nuevamente sobre las mismas fuentes de imposición que la República ya tiene afectadas y lejos de producir los efectos benéficos que él podría traer, establecido más racional y científicamente, no hará sino agravar y empeorar la situación del país frente a su régimen fiscal. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Fresco.** — Pido la palabra.

Yo deseo acentuar con el más intenso relieve la trascendencia del debate que

en este momento preocupa nuestra atención.

La Honorable Cámara discute y sancionará con el voto de representantes de partidos a quienes se ha tildado en este recinto de «reaccionarios», una de las conquistas sociales más grandes, que incorpora el régimen impositivo del país. Y quiero destacar esta circunstancia: es nada menos que el impuesto a la renta, un fruto óptimo de la revolución de Septiembre que todo lo ha cambiado, que todo lo ha trastrocado, hasta la misma fisonomía de la Cámara, hasta la mentalidad del Congreso argentino.

Señores: Si echamos una mirada por el recinto notamos una barra nueva, hombres serenos, ilustres damas que captan y asimilan las diferentes argumentaciones que hacen los representantes de los distintos sectores en que se divide la opinión pública, que aplauden la frase y el concepto de su simpatía. Ya no existe desorden ni la provocación en la barra. Todo ha cambiado, señores diputados.

Los bancos azules, en la avanzada del hemiciclo, están ocupados: no hay ministerio ausente; háy, en cambio, señor presidente, gabinete que colabora en la acción del Congreso con energía, con patriotismo, con sinceridad y hasta con resistencia física.

Hemos escuchado y visto la recia figura del señor ministro de guerra soportando la tortura dantesca del debate y la arremetida briosa de los sectores de izquierda, defendiendo con palabra espartana y apostura militar el presupuesto de las instituciones armadas argentinas.

Y hemos escuchado, señor presidente, con verdadera fruición la palabra fina y armoniosa del señor ministro de relaciones exteriores, que ha revivido en la vastedad de este recinto los días felices del Parlamento.

Todo ha cambiado, señores diputados. ¡Hasta la izquierda socialista!

Quien haya leído los conceptos, la orientación y el pensamiento de esos grandes tribunos, hace veinte años, y

escuchado la palabra serena y ponderada de los grandes parlamentaristas del momento, tiene la sensación de que esa gran fuerza política que se llama Partido Socialista, ha comprendido la necesidad de la colaboración para bien del país. Y para mí, tengo la impresión de que a medida que se amplía, a medida que percibe su aproximación al gobierno, se torna más moderado: ¡hasta estima el ejército! Eso me ha parecido comprender en las palabras del señor diputado Repetto.

**Sr. Repetto.** — Hace unos dieciocho años que estamos en esa corriente de colaboración.

**Sr. Fresco.** — Pero antes, señor diputado, los armamentos eran «trastos inútiles». Hoy las máquinas de guerra, que se levantan y llevan a través de los aires la civilización y el orden, han sido motivo de un recuerdo afectuoso de parte del señor diputado...

¡Todo ha cambiado! señores diputados. Conceptos de «economía», «superávit imposterizable», «sacrificio nacional», «impuesto a la renta», flotan en el ambiente del Congreso. Se ha operado algo así como lo que ocurre con esos fenómenos de erupción volcánica que acabamos de presenciar, que lanzan sus cenizas a las altas capas de la atmósfera, las que, según la opinión de los sismólogos, recorren el mundo y se depositan después de mucho andar. Así han llegado las palabras «economía», «superávit imposterizable», «impuesto a la renta», desde las viejas naciones de la Europa tradicional, y desde la gran democracia norteamericana, a sedimentarse en la conciencia de los señores diputados, que han exhibido ante el país el espectáculo altamente patriótico de darle un presupuesto al gobierno con una gran rebaja sobre su cálculo de recursos; de darle al país un presupuesto en que honradamente se tiene la sensación del superávit y que van a darle a la Nación ese instrumento impositivo, tan en consonancia con las necesidades sociales de la hora, que se llama el impuesto a la renta. Y ese mecanismo de previsión para el manejo de las fi-

nanzas públicas y para aumentar la riqueza de los recursos del Estado va subscripto, señores diputados, con la firma de los representantes de los partidos «reaccionarios» — partidos modernos y liberales, digo yo, que son permeables a todas las solicitudes, y que los serán, señores diputados (*¡muy bien!*); — lleva la firma de los diputados de la provincia de Buenos Aires, la más rica, la más populosa y la que soportará, en consecuencia, los mayores sacrificios. (*¡Muy bien!*).

¡Todo ha cambiado! Ya no hay saturnal financiera del presupuesto, no existe la orgía de los empréstitos externos. Se piensa en poder, en restringir, en economizar. Lo hacemos prudentemente, sensatamente, sin pretensiones electorales, ni palabras demagógicas, sin entrar en competencias de reducciones hasta límites que pudieran perjudicar la propia estabilidad o la arquitectura del presupuesto.

Quiero señalar, señor presidente, que estas circunstancias son los frutos de la revolución de Septiembre; son los frutos que esperaba el señor diputado Repetto y que los está dando la expresión de la soberanía nacional, deliberando en el Congreso. (*¡Muy bien! Aplausos!*).

Sostenemos estos principios porque son los principios de la concordancia, esa fuerza de concurrencia de minorías y de partidos políticos que, como muy bien lo dijera el señor ministro de hacienda, ha dado siempre las grandes soluciones, no sólo en nuestra nación sino en las democracias perfeccionadas de la vieja Europa. Concordancia que se ensayó en aquel manifiesto pre-revolucionario, que suscribimos 44 legisladores nacionales, concordancia que dijo: ¡Presente!, en el Colegio Militar, en El Palomar y en Campo de Mayo: concordancia que trajo a la primera magistratura de la Nación al más civil de los militares argentinos; concordancia que en esta Cámara acaba de dar un presupuesto equilibrado, con las economías indispensables y que va a votar, y sancionar, señores diputados, el impuesto a la renta, definitivamente,



impuesto que no se borrará jamás de la legislación argentina. (*¡Muy bien!*).

**Sr. Saggese.** — Lo vamos a votar, pero no en la forma en que está despachado éste.

**Sr. Lima.** — Se irá perfeccionando, poco a poco.

**Sr. Carreras (J.).** — Que se ha de perpetuar, seguramente.

**Sr. Fresco.** — Estas ideas y estos conceptos liberales, en concordancia con las necesidades de justicia social que viven los países en este momento, no son nuevos para nosotros.

Recordaba al señor diputado Vicente Solano Lima, que en la Legislatura de Buenos Aires, cuando se discutió la ley de revalúos, se levantaron desde las bancas que representábamos voces que eran las nuestras, sosteniendo la necesidad del impuesto progresivo; fué testigo el señor diputado Ruggieri. En ese entonces, en las campañas electorales esgrimíamos principios de orientación económica incommovible, y mañana, señor diputado doctor Enrique Dickmann, cuando venga a este Congreso el proyecto orgánico de la ley agraria argentina, que tanto lo anhela y que nosotros lo deseamos, para bien de nuestros conciudadanos, ha de encontrar nuestra colaboración en el terreno del orden, de la justicia y de la prudencia, siempre que no implique afectar limitaciones que exige el interés social.

Para terminar, señor presidente, diré que estamos al servicio de cualquier propósito de bien público. No son otros los anhelos del Partido Demócrata Nacional, sometido siempre al contralor sereno de la opinión pública, para realizar la grande, la inmensa tarea que para mí constituye el único postulado de la Revolución de Septiembre, que no puede ser otro, señores diputados, que rectificar el camino de la República!

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)  
*Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Invi-

to a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo la hora 18 y 23.

—A la hora 19 y 5 minutos:

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Loyarte.** — Señor presidente: se ha expresado aquí, hoy, en diversas oportunidades, el concepto de que somos diputados de las provincias; algunos señores diputados lo manifiestan al decir «nosotros los representantes de las provincias». Y yo quiero reafirmar el concepto de que los diputados de este Honorable Congreso somos diputados de la Nación, por más que vengamos a ejercer la representación de grupos de habitantes de los diferentes distritos o de las distintas provincias. Este Honorable Congreso representa a la Nación entera y su deber es velar por el bien general, que es el bien supremo de la República; y el bien supremo de la Nación no puede estar, en forma alguna, en pugna con intereses determinados de muchos habitantes.

Como no deseo ser mal entendido en una cuestión de tanta trascendencia, que se refiere en el fondo al pacto federal, voy a leer breves párrafos que he escrito no hace mucho tiempo, en orden a esta cuestión.

Nuestro sistema federal, que con todos los elementos éticos sociales que constituyen las provincias se halla fundido en su crisol y en su molde imperecedero, «es una reunión indestructible de Estados indestructibles», frase que, si nadie pronunció en la República parafraseando a Lincoln, se la escribió, como ha dicho un hijo dilecto de aquélla, en la conciencia, con la vida, con la sangre, con los hechos consumados en las instituciones fundamentales. La historia viviente de estas tierras, que late en los habitantes

de sus diversas comarcas en forma de sentimientos y pensamientos que arraigan en un pasado de luchas y de esperanzas, acá en la llanura y en los ríos caudalosos, allá en bosques y serranías, acullá en las planicies y en las montañas, está diciendo que las provincias son organismos éticos sociales y, por lo tanto, políticos, con una vida propia e indestructible, como la de la Nación que han formado.

Respetar en la totalidad de su significación y contenido aquella enseñanza de la historia concerniente a un fenómeno ético y social, es servirse de una ley de la Divina Providencia o de la Naturaleza, en beneficio de la prosperidad de la Nación. Y yo, señor presidente, que tengo ese concepto ético y religioso de las provincias y de su autonomía, digo que la suma de los de los habitantes y la suma de los intereses de las provincias no constituyen todavía los intereses de la Nación. El *substractum* de los pensamientos fundamentales de las provincias, ha cristalizado y ha tomado cuerpo en el poder federal, y en ese poder federal está la Nación, está el supremo bien de ella y está su futuro destino. No puede tener este Congreso otro criterio que el que está establecido en la Constitución, que es el pacto constituyente; y si es necesario, como decía el señor diputado Aguirrezabala, interpretarla, no ateniéndose a su texto frío y mudo: ha de ser a la luz de los pensamientos que acabo de exponer respecto al criterio, al sentido y al contenido de ese concepto, de esa realidad, que es la Nación.

Este es el criterio que campea en el despacho de la mayoría de la comisión, que apoyo con todo entusiasmo con la más profunda convicción. El impuesto proyectado está estrictamente de acuerdo con las exigencias del inciso 2º del artículo 67, puesto que se refiere a tiempo limitado. En este momento lo exige, no solamente el bien general, sino que lo exige la seguridad del Estado.

Y como muy bien lo ha dicho el se-

ñor diputado Martínez, ya que es una atribución del Congreso la que se ejerce, al Congreso corresponde interpretar la necesidad, la conveniencia, la oportunidad y la forma de esa sanción.

Es todo lo que quería decir. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos*).

**Sr. Pinedo.** — Pido la palabra.

En nombre de la comisión, pero sin tener los privilegios de miembro informante en cuanto a plazo, voy a decir algunas palabras sosteniendo el despacho y contestando observaciones que se le han hecho.

Expresar ahora cual es el carácter del impuesto a la renta y la opinión que tenemos acerca de su eficacia social y económica nos llevaría demasado lejos y, por otra parte, el señor diputado por la Capital doctor Ruggieri ha expresado puntos de vista perfectamente coincidentes con los míos a este respecto.

Sé que la disidencia de los señores diputados socialistas no es de detalle, sino acerca de puntos importantes; pero ellos han de reconocer que con su colaboración hemos introducido en el despacho apreciables e importantes mejoras, que dan a esta ley un carácter mucho más simpático que el que tenía tal como fué aprobada por el Gobierno Provisional y que la hace más conveniente desde el punto de vista fiscal.

Deploro, por mi parte, que no hayan tenido éxito algunas de las iniciativas de los diputados socialistas, sobre todo en materia de impuesto global.

La objeción respecto a la duración del impuesto es fundada. El término de tres años es demasiado breve para un impuesto que requiere un proceso de organización complicado y costoso, a tal punto que si fuera a ser derogado a los tres años, quizá no valdría la pena sancionarlo. Pero no es eso lo que ha pensado la comisión cuando, como solución transaccional, ha fijado el término de tres años a que se refiere el artículo 1º, que ha merecido de parte de diversos diputados consideraciones no concordantes.

Las provincias tienen derecho a gra-

var la renta producida dentro de su territorio, pero no soy de los que creen que la Nación no tiene ese derecho, que le está expresamente otorgado por la Carta Fundamental y que se sancionó en tal carácter por el mismo Congreso que hizo la Constitución, según lo he recordado y lo ha dicho con más precisión el señor diputado Ruggieri. Con este agravante: que en aquellos tiempos, en que los asuntos económicos se estudiaban en el Parlamento con una detención y sobre todo con una perspicacia que se echa de menos en cámaras posteriores, yendo al fondo de lo que había en otros tributos, se señaló con elocuencia y con eficacia el impuesto a la exportación de cueros, pezuñas, cuernos y otros productos animales, con un impuesto que tenía entonces el verdadero carácter de impuesto a la renta. Las palabras que en el Congreso argentino pronunció el doctor Marcelino Ugarte en el año 1860 y tantos pidiendo la derogación del impuesto son tan profundas y tan serias como las que pueda pronunciar hoy el diputado más estudioso.

Respecto al impuesto a la exportación se hizo entonces la cuestión provincial, considerando los diputados que suprimiendo ese impuesto se daba a las provincias la posibilidad de otras formas de tributos sobre la renta que quedaría libre suprimiendo esa gabela.

La comisión quiere respetar el derecho de las provincias y se ha empeñado en respetarlo. He dicho antes, que yo no puedo sentirme aquí como ante una asamblea de enviados plenipotenciarios de las provincias, sino ante colegas que representan a la Nación. Mi nación no se concluye en Palermo o en Flores; mi nación llega hasta Jujuy y hasta Mendoza. La Nación aquí representada necesita dar al Estado los tributos que le son necesarios para desenvolver su acción y las provincias deben contribuir a eso porque contribuyen así al propio bienestar, a hacer posible por el Estado federal la atención de una infinidad de cargas que en toda otra organización federativa debieran estar a cargo de las provincias.

**Sr. Aguirrezabala.** — A eso me he

referido cuando he hablado de reformas de funciones y órganos de la administración del Estado. Que no se tomen las rentas a las provincias y éstas podrán atender los servicios netamente provinciales.

**Sr. Pinedo.** — En el deseo de no tomar rentas a las provincias, como dice el señor diputado por Entre Ríos, la comisión ha buscado una fórmula que significa el reconocimiento formal, por el Congreso argentino, de que las provincias tienen derecho a este impuesto.

**Sr. Zalazar Altamira.** — No era necesario.

**Sr. Pinedo.** — ¿No era necesario? Está por verse. Por lo menos, no está de más.

En virtud de esa declaración del Congreso las provincias tienen la certeza de que la Nación no quiere usurparles sus rentas; que quiere darles en ellas la participación que les corresponde y va a ser el pueblo de la Nación y sus provincias, representadas por los diputados en esta Cámara y por los «enviados plenipotenciarios» en el Senado los que van a decidir cómo se repartirán entre la Nación y las provincias esos tributos en tiempo muy cercano. Hemos establecido la cláusula de la caducidad del actual tributo, si no se dicta la ley sobre su reparto en salvaguardia de los derechos provinciales y para vencer la resistencia de los que alegaban, en contra de esta ley, el precedente de los impuestos internos, sancionados cuando el peligro de guerra con Chile, y que quedaron incorporados al sistema rentístico argentino.

Una importante reforma se ha introducido en cuanto al impuesto a la renta del suelo. Yo no creo que sea una mala reforma: estoy convencido de que es buena; y los señores diputados llegarán a la misma opinión comparando la anterior ley con la proyectada.

La ley anterior estimaba la renta de las propiedades en 5 por ciento, pero permitía al contribuyente probar que la renta no había llegado a esa magnitud y por esa prueba, y deducciones sucesivas de las cargas hipotecarias y fiscales, autorizaba a apreciar como renta el 1 por ciento; y sobre ese 1

por ciento incidía el impuesto. Por otra parte, había a favor del fisco el límite mínimo de 1 por ciento, de manera que, aun cuando la propiedad estuviera hipotecada en 90 por ciento, seguía sosteniendo el fisco que el propietario nominal del inmueble — y digo así porque no tiene sino apariencia jurídica de dueño, porque la substancia corresponde al acreedor hipotecario — tenía que seguir tributando con respecto al 1 por ciento del valor nominal de la propiedad.

La comisión modifica la ley estableciendo que se considera mínimo de renta de las propiedades el 3 por ciento.

Los señores diputados saben cómo se llegó a esa cifra. Yo sostuve que debía ponerse el 4 por ciento. Mis colegas demócratas nacionales habían puesto el 2 por ciento, y después, atendiendo observaciones mías y de los colegas socialistas, los señores diputados demócratas nacionales aceptaron elevar la tasa mínima al 3 por ciento. Yo he aceptado esa solución y me voy a mantener en ella; ni siquiera votaré un aumento, porque considero que es un deber de lealtad entre partidos que colaboran, hacer cesión de una parte de sus opiniones y aspiraciones para llegar, con el concurso de los demás que forman la mayoría en la Cámara, a una solución concreta.

Es cierto que ha desaparecido de la ley que proyectamos el mínimo de 1 por ciento. El señor diputado Ruggieri decía que del punto de vista fiscal ello es gravoso para la Nación, pero no hay duda de que se trata de una solución justa. Yo pongo este caso como ejemplo: un propietario, no gravado con hipoteca, de un bien valuado en 100.000 pesos, tenía por la ley anterior el derecho a estimar su renta en el 1 por ciento, es decir, 1.000 pesos. Por la ley actual un propietario de un bien que vale 100.000 pesos no puede estimar la renta en menos de 3.000; pero en cambio, un propietario de 100.000 pesos que tiene 80.000 de hipoteca estaba obligado por la ley anterior a estimar la renta en 1.000, y por la ley actual no se le obliga a eso, por la razón de que no

es dueño de 100.000 sino de 20.000 de saldo, y con la consecuencia fiscal de que el impuesto sobre la utilidad de los 80.000 pesos restantes la va a pagar el acreedor hipotecario.

Algunas entidades y hasta miembros del Congreso individualmente han combatido en varios órganos de opinión esta cláusula, sosteniendo que el 3 por ciento es excesivo, y paternalmente nos declararían que nos arrendarían sus propiedades al 3 por ciento. No se trata de eso; nadie les va a arrancar a los propietarios el total de la renta avaluada al 3 por ciento, aunque no la tengan. Lo que se les va a quitar es el 6 por ciento del 3 por ciento, o sea, el 1,8 por mil. Cuando por el hecho de comprar zapatillas o sombreros el Estado se cree autorizado a cobrar el 5 por mil, no tiene derecho la clase propietaria argentina a lamentarse de que se le cobra el 3 por mil del valor de sus propiedades, porque si no tiene renta efectiva y actual el propietario de 100.000 pesos no puede decir que tiene más renta efectiva y actual el que tiene que comprar un par de alpargatas.

El rendimiento del impuesto ha sido calculado por el señor diputado Ruggieri de acuerdo a la ley que él proyecta y de acuerdo a la ley despachada por la comisión, y encuentra que el Estado perderá por esta última 3 640.000.000. Pero me parece que hay una apreciación exagerada de la carga hipotecaria en las cuentas que él ha hecho.

Según las cifras oficiales, de fuente no insospechable, el valor total de las propiedades afectadas al impuesto, como dijo el señor diputado Ruggieri sería de 14.000.000.000; la carga hipotecaria del país, distribuída entre la Capital y territorios y las provincias, dejaría para ésta más o menos 2.300.000.000. Entonces el resultado sería el siguiente: 3 por ciento de 14.000.000.000 son 420.000.000 de rentas; los servicios hipotecarios al 7 por ciento serían 161.000.000, y el 7 por mil de contribución territorial como término medio importaría 98.000.000, es decir, en total, 259.000.000 de carga a deducirse de los 420.000.000 de renta. Quedarían 161.000.000 impondibles, que

al 5,5 por ciento darían 8.855.000 pesos, es decir, una cantidad algo más elevada que la que figuraba en el cálculo previo hecho por el doctor Prebisch, de acuerdo a la base anterior. No figura la capital de la República por la circunstancia conocida de que se ha adelantado el impuesto a la renta con el 2 por mil adicional.

El impuesto no es perfecto pero nunca se puede exigir que se sancione un impuesto a la renta perfecto en un país que no lo tiene. Las estadísticas y la organización necesaria para aplicarlo con equidad y eficacia, sólo se conseguirán en la marcha, porque nunca estará el Estado argentino en condiciones de destinar 3 ó 4.000.000 de pesos para preparar la máquina impositiva mientras no cobre el impuesto.

Con todo, yo no puedo negar que el tributo es pesado para clases distintas de la propietaria, especialmente para los profesionales. Y puedo afirmarlo, porque a título de profesional estoy dispuesto a pagar el impuesto y no he hecho ninguna gestión para que se disminuya, y sólo las he realizado para que otras categorías de privilegiados en el país tributen al Estado nacional en proporción más equitativa.

La Cámara conocerá la justicia de todo esto con el pequeño cuadro de cálculos que voy a hacer y que calificó amablemente mi colega el señor diputado Adolfo Dickmann. Por el proyecto de ley anterior un médico que paga 400 pesos por su casa y 400 pesos por su consultorio — o un abogado en esas condiciones — era reputado poseedor de 38.400 pesos de renta al año y pagaba un impuesto de 1.920 pesos; el mismo impuesto que paga un propietario de 3.200.000 pesos. Y es evidente que el hecho de pagar 400 pesos de alquiler y estar obligado a pagar otro tanto por la casa no es un beneficio tan grande como la posesión de 3.200.000.

El proyecto ha sido reformado y hoy la proporción es ésta: un profesional que paga 200 pesos de alquiler y 200 pesos por el arrendamiento del estudio o consultorio es reputado poseedor de 19.200 pesos de renta y paga 960 pesos de im-

puesto. Es lo que paga un propietario de 533.000 pesos, aunque estoy seguro que todos los que pagan 400 pesos por su oficina y casa no se consideran dueños de 533.000 pesos y enajenarían por esa suma gustosos sus derechos al ejercicio de la profesión.

Hemos introducido una mejora apreciable en la ley y los señores diputados deben acompañarnos en la sanción de este despacho con el compromiso formal de todos los sectores de la Cámara, de que irá modificándose en el sentido de la justicia tributaria y que irá modificándose en el sentido de la justicia distributiva entre la Nación y las provincias. No es una obra perfecta, pero es una obra buena; es el principio de una gran obra que puede ser la base de una transformación total del sistema fiscal argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Zalazar Altamira.** — Pido la palabra.

No voy a hacer un discurso. Sólo dos palabras pronunciaré para fundar el voto de los diputados del Partido Popular de Jujuy, y no digo de Jujuy después de lo que ha expresado mi distinguido amigo el doctor Loyarte.

Votaremos el despacho de la mayoría de la comisión porque entendemos que las exigencias fiscales del momento así lo imponen, pero no ha de ser sin dejar constancia, también nosotros, de las reservas que con respecto a la facultad del poder de la Nación, a propósito de esta imposición, han formulado colegas de otras provincias.

Conceptuamos que es una facultad privativa de las provincias la de establecer el impuesto que se discute y que sólo en el caso del artículo constitucional ya tantas veces mentado y en los casos excepcionales y en las condiciones que el mismo prescribe, puede concederse a la Nación.

Y si no abundo en otras consideraciones, es porque no nos interesa en realidad la redacción del artículo en la parte respecto de la cual han hecho cuestión otros colegas, porque estamos convencidos de que cualquier declara-

ción que se haga ahora no va a modificar el fondo de la cuestión. Si la Nación no tiene la facultad de crear este impuesto, de más están todas las salvedades en la ley. La ley no se las va a dar. La Nación no puede dar lo que no le pertenece. Son las provincias las que pueden consentir, si les parece bien, en esta cesión de alguno de sus reconocidos privilegios. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Con este concepto vamos a votar el despacho de la mayoría, reconociendo, lealmente, que ésta ya había tomado en cuenta la observación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Antelo.** — Pido la palabra.

Hemos articulado para este proyecto de ley algunas disposiciones referentes a la participación de las provincias.

La Cámara dirá si es ésta la oportunidad de fundarlas, o si ha de ser al discutirse el artículo 1º. Preferiría que fuera ya, por la trascendencia general del asunto y porque se abreviaría la labor de la Cámara.

**Sr. Pinedo.** — Los agregados correspondería considerarlos al discutirse en particular.

**Sr. Antelo.** — No tengo ningún inconveniente en hablar entonces.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — En esa oportunidad tendrá la palabra el señor diputado.

**Sr. Gómez.** — Pido la palabra.

Señor presidente: no pensaba intervenir en este debate, después de las palabras de mi colega, el señor diputado González, que definieron con exactitud el pensamiento del grupo demócrata nacional, distrito Corrientes, al que pertenezco. Pero me veo obligado a hacerlo por una serie de circunstancias complementarias que hacen que adopte, en este debate, una posición práctica.

Estoy perfectamente de acuerdo con las ideas enunciadas, de que este impuesto corresponde a las provincias, que el Estado nacional no puede aplicarlo si no concurren las tres condiciones que expresa el inciso 2º del artículo 67 de la Constitución del país.

Esas tres condiciones no concurren actualmente; falta aquella de «seguridad nacional», en cuyo nombre pueden exigirse todos los sacrificios, y falta porque hemos escuchado, con amplitud, los informes del Poder Ejecutivo sobre la paz y sobre la serenidad del horizonte argentino. Tenemos también una visión optimista de la situación económica del país: no creemos se trate de una crisis intensa. Nos fundamos para ello en que dentro del relativismo de las cosas, estudiando la situación de cada uno de los países con respecto a la crisis universal, la República Argentina tiene una ubicación que no es despreciable. En el año 1931 invirtió la balanza comercial en forma positiva, ganando más de 250.000.000 de pesos oro a su favor, frente al saldo negativo, de 1930, en el intercambio internacional.

En los tres meses que van del año 1932, el trabajo argentino ha superado y ha establecido un nuevo saldo favorable dentro de la balanza comercial, de acuerdo a las estadísticas oficiales que publicara la prensa toda.

La deuda pública no es tan inmensa como se dice, dentro de la relatividad del fenómeno. Todos los demás países de América deben conjuntamente más de 2.000.000.000 de dólares, y la República Argentina sólo adeuda 775 millones, de acuerdo a los datos que han sido suministrados por el ministro y comentados por el ingeniero Bunge en su celebrada conferencia de la Facultad de Ciencias Económicas.

No tenemos, entonces, una sensación derrotista del panorama económico del país. Sabemos que es una crisis financiera, del Estado, una simple crisis fiscal, que va a ser resuelta con las medidas que tan acertadamente ha propuesto el Poder Ejecutivo y con la colaboración de todos los argentinos.

Pensamos que si se exige a las provincias este nuevo sacrificio, que tal significa el impuesto a la renta, resulta necesario considerar que ello implicará una evolución completa del sistema rentístico de los catorce estados argentinos.

Naturalmente, para probarlo, voy a referirme a Corrientes, que es el organismo económico que más conozco, pero estas reflexiones son perfectamente generalizables a todas las provincias. Lo verán los señores diputados.

Corrientes tiene un presupuesto de poco más de 5.000.000 de pesos. ¡Qué poco gasta la provincia de Corrientes! ¿Por qué no tiene una mayor renta? Porque es una de las provincias más castigadas por una serie de circunstancias que han venido pesando sobre ella y que la han hecho una verdadera sacrificada argentina.

Un primer problema es el de las tarifas ferroviarias.

Han de saber los señores diputados, que las cargas traídas desde el Paraguay por el N. E. A., abonan para llegar aquí, a la estación Lacroze, menos flete que las cargas que se traen de cualquiera de las estaciones ferroviarias de la provincia de Corrientes. Un vagón de naranjas, producción selecta de mi provincia, que representa más de 1.200.000.000 de frutos por año, un vagón de naranjas que viene del Paraguay paga 300 pesos de flete, mientras el vagón de naranjas que viene de cualquiera de los pueblos de Corrientes paga 700 nacionales.

No sólo tenemos esta cuestión de altos fletes, que ata el trabajo de la provincia, encarece su producción subtropical sobre la análoga del Paraguay e impide se pueda imponer como recurso fiscal otra producción que la de los frutos de su ganadería, sino que la propia ganadería de Corrientes se encuentra trabajada por una serie de obstáculos que impiden su desarrollo. Desgraciadamente para ella uno de los grandes propietarios de la provincia es Liebig's. Liebig's es también uno de los grandes propietarios en el Paraguay. Y procede en la siguiente forma: en Formosa no tiene ni un animal ni una propiedad, pero tiene registrada una marca, y pasa los ganados paraguayos a Formosa. La marca de Formosa es la misma marca del Paraguay, y, embarcándolos en Formosa, lanza sus ganados a los mercados internos

de la provincia y a sus fábricas de todo el litoral. Y resulta que el ganadero honesto de Corrientes, que paga impuestos elevados, como lo voy a demostrar después, que mestiza, que concurre a las grandes ferias del Sur a buscar sus mejores reproductores, está en condición de inferioridad en relación al que introduce esta otra hacienda del extranjero, por medio de esa simulación, y que llega a derrotar hasta el propio trabajo de los hijos de Corrientes en los mercados de la misma provincia, es claro, por una simple razón económica.

Un diario de Corrientes que me llegó en estos días — lo tengo aquí — consigna la información de que a raíz de investigaciones que se han efectuado en los mataderos de la capital de Corrientes, resulta que desde el año 1925 hasta la fecha, más del cincuenta por ciento de los ganados que se faenaron para el consumo urbano, fueron introducidos a la provincia por medio de esta maniobra ilícita.

Me dirán los señores diputados que por qué la provincias no toma medidas. Las está tomando, señor presidente. Hasta ahora la ley de policía sanitaria animal tenía atadas nuestras manos en cuanto a iniciativas de esta naturaleza. Pero ahora, cambiados los hombres en lo nacional, el gobierno correntino acaba de anunciar que va a establecer la cuarentena, a fin de impedir la introducción de plagas ganaderas, y así, real o simuladamente, en una forma o en otra, vamos a defender nuestros asuntos.

No cito otros ejemplos para no cansar a la Honorable Cámara. Basta con lo dicho para que puedan apreciar los señores diputados la situación de verdadera inferioridad en que se encuentra todo aquello que puede ser objeto de renta imponible en la provincia de Corrientes.

¿Cómo financia Corrientes su presupuesto? Lo financia a base de dos impuestos: el de contribución directa y el de impuesto al ganado. Anteriormente el impuesto al ganado se cobraba en el momento en que el ganado se ven-

día; ahora se ha establecido el impuesto al ganado en forma de una sobretasa por hectárea de tierra empleada en la ganadería, es decir, que esté fuera de las zonas agrícolas o de los pueblos.

Corrientes tiene una recaudación, término medio, de 1.700.000 pesos por contribución directa del año, más medio millón o 600.000 pesos de contribución directa atrasada, vale decir, unos 2.300.000.

Y la recaudación por impuesto al ganado, aplicado por hectárea, que viene a ser una especie de adicional de la contribución directa, representa entre la del año y la atrasada, pesos 700.000 en números redondos. Quiere decir, entonces, que las dos terceras partes del presupuesto de la provincia se financian con esta clase de impuestos.

Ahora bien: ¿qué es el impuesto de contribución directa, y qué viene a ser, en resumidas cuentas, el impuesto de contribución sobre el capital empleado en los ganados, cobrado en forma adicional por hectárea? Sencillamente un impuesto a la renta; no es un impuesto al capital. Y es tanto más un impuesto a la renta cuanto que en la provincia de Corrientes rige el sistema proporcional, vale decir, que el impuesto de contribución directa no es siempre el mismo, según sea el valor de la propiedad o propiedades que tenga una persona, sino que partiendo el impuesto — para tomar la base que consulta el proyecto que estudiamos, de 25.000 pesos —, del 7 por ciento con el adicional, sobre las propiedades de 25.000 pesos, sube en escala progresiva, según sea el valor de los inmuebles de cada propietario.

En esta forma progresiva, el impuesto de contribución directa es, exclusivamente, en Corrientes, un impuesto a la renta. Y ahora vamos a ver cuál es la renta que producen los campos en la provincia de Corrientes.

Actualmente, la ganadería de Corrientes está en verdadera quiebra. No produce absolutamente nada, como consecuencia de las maniobras del mercado de carnes, que no tengo por qué explicar, desde que todos las conocen.

La contribución directa pesa sobre las propiedades de Corrientes de acuerdo a zonas, en las que se fijan valores máximos y mínimos. Hay cuatro zonas en la provincia.

Yo he hecho un término medio y encuentro que el tipo más común es el de la propiedad de 2.500 hectáreas, valuadas en veinte pesos término medio por hectárea, es decir, en 50.000 pesos. ¿Qué gravámenes tiene esta propiedad?

Esa propiedad, que vale 50.000 pesos, y que según el proyecto del 5 por mil de su tasación para fijar la renta presumible, devenga 2.500 pesos, tiene los siguientes gravámenes, de acuerdo a la ley de contribución directa y al ganado: 400 pesos por contribución directa y 250 por contribución al ganado. De manera que esa renta, precio del arrendamiento, tiene por estos dos conceptos un gravamen de 650 pesos. De modo que, fijando en 2.500 pesos la renta presumible a los efectos del impuesto al rédito que consigna el proyecto en debate, tendríamos nosotros previa deducción de los actuales impuestos provinciales, una nueva cuota de 111 pesos, de impuesto a la renta. En una palabra, del arrendamiento de esa propiedad de 50.000 pesos, que es el tipo común, apenas quedaría libre la proporción de 1.500 pesos al año, reservando una pequeña cantidad para reparación de alambrados. Mil quinientos pesos para este capital, vale decir, apenas un 3 por ciento!

El establecimiento del impuesto a la renta en esta provincia va a anarquizar no solamente el juego de los capitales privados, sino que va a anarquizar también las finanzas provinciales, y entiendo que esto mismo va a ocurrir en todas las demás provincias donde el impuesto de contribución directa, vuelvo a afirmarlo, no es un impuesto al capital ni está fijado en la proporción directa con éste, sino que es un verdadero impuesto a la renta inmobiliaria.

Por desgracia, toda tentativa para defender esta anarquía que se va a introducir en el régimen fiscal de las provincias no será posible, porque la



Honorable Cámara tiene hecha ya su composición de lugar. De acuerdo a las declaraciones de los diputados por la Capital Federal y los de la provincia de Buenos Aires, tanto de la mayoría como de la minoría, que representan 74 votos, y constituyen la mayoría del Cuerpo, el voto a producirse garantiza desde ya el establecimiento del impuesto a la renta, de tal modo que lo que podamos decir nosotros, en nombre de los intereses provinciales, no queda sino como una simple reserva que nos dignifica. Y digo en nombre de los intereses provinciales, señores diputados, porque aun cuando sé que somos aquí diputados nacionales, elegidos por distritos, debe saberse que representamos a fuerzas políticas con programas determinados. Así, el Partido Demócrata Nacional, que tiene una plataforma electoral mínima y general, ha admitido en una de sus últimas convenciones que ella podía complementarse en concordancia, con plataformas electorales de las secciones del mismo partido en las provincias. Y si yo represento en esta banca al Partido Demócrata Nacional, también soy representante del Partido Demócrata Nacional del distrito de Corrientes, y debo lealtad a los principios particulares de su plataforma electoral.

Por estas consideraciones, y ante la situación de hecho que se crea, ya que el impuesto va a ser aprobado, nosotros votaremos el despacho de la mayoría, y pedimos que al artículo 1º se agreguen las palabras que voy a rogar al señor secretario se sirva leer.

—Se lee:

El Poder Ejecutivo deberá entretanto negociar con los Estados provinciales las bases de coparticipación de éstos en el producido de este impuesto, convenciones que serán pasadas al Congreso para su aprobación.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Pido la palabra para una moción de orden.

Me parece que se ha debatido este asunto con toda la amplitud que nece-

sitaba, y haría indicación para que votáramos en general, para circunscribir las observaciones a cada uno de los artículos, a medida que se discuten en particular.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — ¿Hace moción de cerrar el debate en general?

**Sr. Martínez (J. H.).** — Cierre del debate y votación en general.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Hay una moción de cerrar el debate; si el señor diputado quisiera retirarla, podría el señor ministro hacer uso de la palabra.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Retiraré la moción, pero ya sé lo que va a significar.

**Sr. de la Vega.** — Puede repetirse inmediatamente después.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Retirada la moción, correspondería hacer uso de la palabra al señor diputado por Córdoba.

**Sr. da Rocha.** — Con todo gusto la cedo al señor ministro. Por mi parte, hablaré en la discusión en particular sobre el artículo 1º.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — En vista de la urgencia en resolver el asunto, y en obsequio a la brevedad, no insistiré.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — ¿Repite su moción el señor diputado por Córdoba?

**Sr. Martínez (J. H.).** — Mantengo mi moción.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar si se cierra el debate en general sobre el despacho número 3 de la Comisión de Presupuesto.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar en general el despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda.

—Resultado afirmativa general.

—En discusión el artículo 1º.

**Sr. da Rocha.** — Pido la palabra. El artículo que está en discusión es,

precisamente, el que ha motivado un largo debate a propósito de la constitucionalidad de la disposición que encierra, que ha derivado después hacia la discusión doctrinaria ya clásica sobre autonomía y federalismo. Deseo aclarar brevemente la posición de los diputados de la minoría de Córdoba en este debate, al que se ha dado, a nuestro juicio, una trascendencia que no tiene; y aspiro también a traducir el pensamiento de los representantes socialistas de los demás Estados argentinos. El Partido Socialista, consciente de los errores y defectos de nuestro federalismo, vaciado en los moldes del sistema norteamericano, ha sido siempre respetuoso de nuestro régimen constitucional, como lo ha demostrado al oponerse a intervenciones por decreto de los ejecutivos absorbentes y a las intervenciones políticas de parlamentos desorbitados. Pero hemos sostenido siempre la necesidad de la nacionalización de ciertos servicios públicos y de una centralización administrativa que permita facilitar y mejorar la percepción rentística.

El proyecto que se discute es, a nuestro juicio, el primer paso hacia la unificación de la renta y desearíamos que más tarde se ampliara incluyendo, con la participación correspondiente para las provincias, la contribución territorial, de acuerdo al proyecto que presentara oportunamente el diputado Justo; pero debo manifestar la sorpresa que me produce la actitud contradictoria de muchos diputados que han levantado su voz en este recinto en forma de una reacción violenta contra el impuesto a la renta y en defensa de las autonomías provinciales, cuando hasta ahora no han emitido una sola expresión conderatoria contra el impuesto a las transacciones que tiene, lo mismo que el que estamos discutiendo; un carácter nacional.

Como representante de la provincia de Córdoba creo que no nos apartamos en absoluto de la norma invariable que ha seguido nuestro partido, al apoyar los despachos coincidentes de la mayo-

ría y de la minoría de la comisión, en cuanto ponen en ejercicio una facultad de emergencia del gobierno federal, conforme lo establece de una manera explícita el artículo 67 de la Carta Fundamental. Considero que no debe magnificarse más este asunto y que debe ser circunscripto al único aspecto en que el Congreso debió considerarlo, es decir, el aspecto económico y financiero.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Palacio**. — Ruego al señor secretario que previamente dé lectura de mi proyecto de modificación a este artículo.

**Sr. Secretario** (Zambrano). — El señor diputado propone la siguiente modificación a la segunda parte del artículo: «Una ley limitará hasta un máximo del 50 por ciento del monto establecido por la presente ley la imposición de la Nación desde el 1º de Enero de 1934, para dar lugar a la creación del mismo impuesto por las provincias si lo creyeran conveniente. Si para esa fecha no hubiera sido sancionada esa ley, se considerará derogado este impuesto.»

**Sr. Palacio**. — La indicación que propongo tiene por objeto concluir con la dependencia financiera y administrativa en que quedarían las provincias si se sancionara el artículo tal como lo propone la mayoría de la comisión. El impuesto a los réditos que la Cámara considera es un impuesto directo y como tal corresponde a las provincias establecerlo, desde el momento que irán a gravar la riqueza que se produce dentro de las fronteras de los Estados federales. El gobierno de la Nación sólo puede establecer este impuesto en las condiciones de excepción a que se refiere el artículo 67, en su inciso 2º, es decir cuando así lo exijan la seguridad del país, la defensa de la Nación y el bienestar general.

El Congreso va a votar el impuesto a los réditos y así se desprende de los despachos favorables, y que se aconse-

jan, no sólo por el de la mayoría, sino también por el de la minoría de la comisión. Los diputados, que somos expresión de los Estados federales vamos a votarlo como una contribución voluntaria y de carácter transitorio que las provincias hacen en beneficio de la Nación, en esta hora grave para su situación financiera; vamos a votarlo, porque así lo impone la solidaridad nacional, que ahora, como en todos los momentos, se ha expresado por las provincias en favor de la Nación a través de todas las vicisitudes de nuestra historia. Pero si las provincias pueden renunciar a percibir en este momento el impuesto y abstenerse de gravar su riqueza en beneficio de la Nación, no pueden renunciar a la autonomía financiera y administrativa que les corresponde, como no podrían renunciar a su autonomía política.

El artículo, como lo propone la mayoría de la comisión, dispone que desde el 1º de Enero de 1934 este impuesto, que desde ya empezará a percibir la Nación, deberá ser distribuido entre la Nación y las provincias en la forma como lo establece la ley, que el mismo artículo prevé. La proposición que hago, en cambio, preceptúa que, desde el 1º de Enero de 1934, ha de limitarse la imposición de la Nación, para que entonces las provincias puedan entrar, si lo juzgan conveniente para el equilibrio de sus presupuestos, a establecerlo en beneficio de ellas. Es mi propósito hacer que resplandezca en toda su amplitud la facultad que asiste a las legislaturas de los Estados federales para crear este impuesto, graduarlo en la forma que crean conveniente y sobre todo, salvaguardar la autonomía administrativa de las provincias que no pueden recibir este impuesto como el resultado de la contribución que la Nación les haga, sino como la consecuencia de ser establecido directamente por ellas mismas, sin sujetarse a la dependencia del rodaje que existe y existirá al distribuir el impuesto sin el contralor ni freno de los Estados federales. Este criterio lo establezco con toda sinceridad, no como un diputado pleni-

potenciario de las provincias, calificativo que nos ha dado, hace un rato, mi distinguido amigo el diputado por la Capital doctor Pinedo.

Este criterio quiero que lo sancione el Congreso de la Nación, para que se evite de una vez por todas lo que está sucediendo desde que existe nuestra República: que el fisco nacional va desde Buenos Aires hasta Jujuy y desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego como una enorme aplanadora a cuyo paso las provincias desaparecen como moléculas imperceptibles.

Pido, pues, a mis distinguidos colegas miembros de la mayoría de la comisión quieran aceptarlo y a la Honorable Cámara prestarle su aprobación.

**Sr. Aráoz (E. M.).** — Pido que se lea por Secretaría otro proyecto, que acabo de presentar sobre la segunda parte del artículo 1º.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se leerá en oportunidad.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Antelo.** — Previamente pido que se lean los artículos propuestos en sustitución del segundo apartado del artículo 1º.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se van a leer.

**Sr. Secretario (Zambrano).** — El proyecto del señor diputado es el siguiente:

«Artículo 1º — Del producido del impuesto a la renta se destinará a las provincias que se ajusten a esta ley, el 40 por ciento líquido de lo que se recaude en el respectivo territorio.

«Art. 2º — Las cuotas serán liquidadas trimestralmente por la Contaduría de la Nación y abonadas de inmediato a las provincias por el Ministerio de Hacienda.

«Art. 3º — Las provincias que acepten participar de los beneficios de esta ley, se comprometen a no crear gravámenes sobre la renta durante su vigencia.

«Art. 4º — El gobierno de la Nación afectará la participación de las provincias al pago de los créditos que tengan contra éstas y una vez abonados

les entregará el porcentaje correspondiente.

«Art. 5º — Facúltase al Poder Ejecutivo a liquidar con los gobiernos de provincia el estado de las cuentas respectivas y a concertar las convenciones necesarias a la mejor organización, recaudación y distribución de este impuesto.»

Además del señor diputado Antelo, firman el proyecto los señores diputados Bordabehere, Sellarés, Colombres, Vionnet y Carreras.

**Sr. Antelo.** — Señor presidente: perdonará la Honorable Cámara que a pesar del apuro razonable que tiene de terminar cuanto antes con las leyes impositivas, vaya a insistir acerca de la necesidad de considerar inmediatamente el punto referente a la participación de las provincias en el impuesto a los réditos.

Creemos que ésta, y no otra, es la oportunidad para que la Cámara exprese de una manera categórica el porcentaje de las provincias en el monto de esos recursos que se crean con carácter de emergencia. Creemos que ese reconocimiento puede hacerse sin perturbar el anhelado equilibrio del presupuesto, afectando la participación de las provincias a los créditos que tiene contra ellas la Nación y que ascienden a 38.000.000 de pesos.

El despacho de la mayoría de la comisión contiene un reconocimiento expreso del derecho de las provincias a participar de este impuesto desde 1934 en adelante. Es un reconocimiento sincero; pero no basta la sinceridad con que lo han hecho los señores miembros de la comisión, sino que es necesario ver si será o no realizable el propósito que ellos persiguen.

La Nación va a gastar de acuerdo a los recursos que ahora se le autorizan. Sus gastos han sido fijados con un criterio de economía. Debe presumirse que esos recursos son recursos indispensables, según el criterio de la mayoría, para los gastos ordinarios de la administración.

Dentro de dos años no habrá gobierno que afronte una modificación funda-

mental por la cual se les dé a las provincias la participación del 40 por ciento que nosotros le adjudicamos. Los impuestos internos nos dicen ya qué es lo que va a ocurrir en 1934. Cuando se sancionaron, los legisladores lo hicieron con la misma esperanza que ahora tienen los autores del despacho de la mayoría: temporariamente, para que una vez terminada la situación de emergencia, las provincias lo compartieran. Y así se continuó hasta hoy en que asciende a 160.000.000, sin que ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores se atrevan a concretar un solo proyecto tendiente a disminuir ese recurso del tesoro de la Nación.

Esta es entonces la oportunidad de reconocer la participación de las provincias. Este impuesto — se lo ha reconocido categóricamente esta tarde — es un recurso ordinario de los Estados, como lo es también el de las transacciones que grava el comercio interno. Sólo por circunstancias excepcionales y «siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan», condiciones conjuntas, simultáneas y concurrentes, puede utilizarlos la Nación.

Es posible que nuestros constituyentes no hubieran previsto la posibilidad de plantear como recurso de emergencia el impuesto a la renta. La misma determinación de plazo indispensable acusa que el propósito ha sido dirigido más bien a acordarle recursos de cómoda percepción, como la contribución directa, pero no crear todo un sistema difícil y fundamental como es el del impuesto a la renta.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara doctor Augusto Bunge.

Pero como para nosotros el criterio con que debe interpretarse la Constitución no es el que tuvieron los constituyentes a la época de la sanción de esas normas sino el que habrían tenido en este instante frente a la realidad y a las exigencias económicas del país,

creemos que habrían autorizado el impuesto a la renta como fuente impositiva de base amplia como recurso de la Nación y de las provincias.

La participación de las provincias, la concurrencia de nuestros Estados a un impuesto percibido por la Nación no significa deponer la autonomía. Esta se basa en la disposición de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y así tenemos el caso de Alemania, donde a pesar de su sistema federal — más federal que el nuestro — con una larga tradición de confederación, existe el impuesto a la renta percibido por la Nación, pero destinado a las provincias y a los municipios. Y la Nación cumple sus compromisos, como habría de cumplirlos aquí, porque no se trata de limosnas, sino de obligaciones jurídicamente exigibles.

Creemos que no habría sido necesario apelar al impuesto a los réditos para equilibrar el presupuesto de la Nación. Lo hemos dicho y tenemos la creencia de haberlo demostrado ampliamente. Una energética reducción de los gastos, una derogación de las tarifas que han hecho mermar tan sensiblemente la renta aduanera y el aumento de otros impuestos que están dentro del sistema rentístico de la Nación, habrían permitido el ineludible equilibrio del presupuesto. Pero hay una opinión formada que para algunos es el equilibrio del presupuesto y para otros, como me parece descubrirlo a través de la posición de los señores diputados socialistas, aprovechar simplemente esta oportunidad propicia para que se incorpore un instrumento social y justo para rectificar el deficiente y deplorable sistema rentístico argentino.

El destino mixto del impuesto va a moderar la ingerencia de la Nación en las provincias y va a permitir lo que éstas están pidiendo a gritos en esta hora: solución para sus finanzas averiadas, como averiadas están las finanzas de la Nación.

Por eso creemos que interpretamos un anhelo de solidaridad nacional porque la solidaridad nacional nos lleva

a defender el crédito de la Nación como el crédito financiero de las provincias. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Este impuesto, tiene una deficiencia original, señalada ayer por el señor ministro cuando decía: «se trata de un trabajo de aliento al que no se le pueden restar méritos indiscutibles, pero no puede desconocerse que su falla fundamental está en haber nacido sin el calor que da la libre discusión.» Pues bien; hoy se realiza en el Parlamento la libre discusión de este impuesto y esa libre discusión demuestra que para que este impuesto tenga prestigio, debe dársele participación a las provincias.

El prestigio de un impuesto, su acogida por los contribuyentes, está vinculada a su rendimiento. El prestigio de un impuesto es la obra de la justicia con que se aplica, es la obra de la riqueza que se grava y es la obra del objeto hacia el cual se destina. Prestigiarán el impuesto los señores diputados si al mismo tiempo demuestran al pueblo de las provincias que este Congreso no se ha reducido a una solución aislada, sino que ha tenido un punto de vista amplio y generoso para solucionar los problemas financieros locales.

No dejemos, señores diputados, pasar la oportunidad de reconocer en esta ley de impuesto a los réditos nuestro respeto por el sistema federal de gobierno que está incorporado a nuestra Constitución. En este Parlamento se han desarrollado largas e interminables jornadas en defensa de la autonomía política de las provincias. Nosotros queremos que en estas pocas horas de que se dispone se haga el alegato necesario para la defensa de la autonomía económica de los Estados. Defendemos la descentralización de nuestro régimen de gobierno, interpretamos el verdadero espíritu de los Constituyentes que querían los Estados provinciales autónomos y las comunas libres. Imitemos el ejemplo no cumplido todavía de la Constitución norteamericana y que ha hecho de ese gran país, en

cien años, la población más grande del mundo. Para asegurar la descentralización del gobierno, para impedir este centralismo que atrasa y perturba el progreso de la Nación, para que los Estados provinciales se defiendan con recursos propios y cumplan los fines de educación primaria de justicia y demás funciones que le correspondan, y para que las comunas sean hogares de democracia y de práctica de instituciones libres, quiere la representación democrática progresista asegurar la participación de las provincias y de las comunas en el impuesto a los réditos.

**Sr. Presidente** (Bunge). — Advierto al señor diputado, por si le fuera útil, que para su exposición no le quedan sino tres minutos.

**Sr. Antelo.** — Voy a terminar...

El reconocimiento por parte de la Honorable Cámara, en esta oportunidad, del derecho de las provincias a participar en el impuesto a los réditos no se va a traducir en un desequilibrio del presupuesto. El proyecto presentado por la representación democrática progresista establece en su artículo 4º que el gobierno de la Nación afectará la participación de las provincias al pago de los créditos que tenga contra éstas, y, una vez abonados, les entregará el porcentaje correspondiente: así las rentas que ingresen podrán destinarse a los gastos del presupuesto ordinario de la Nación sin que sufra perturbaciones de ninguna naturaleza.

El impuesto se recaudará con mucha mayor facilidad si cuenta con el aporte de las provincias, y a ese efecto nuestro proyecto autoriza al gobierno a concertar las convenciones necesarias para su mejor organización, recaudación y distribución. Cada provincia pondrá en sus manos los padrones de contribución respectivos y todos los elementos que permitan perfeccionar rápidamente estos nuevos tributos y obtener de ellos el mayor rendimiento posible.

La Nación sola, aislada, teniendo a su cargo la tarea de crear los vastos organismos que exigen estos graváme-

nes, no logrará a corto plazo el rendimiento que espera, ni habrá encontrado la solución que busca.

**Señor presidente:** Las provincias han sufrido hasta la revolución del 6 de Septiembre una intensa crisis política en lo que respecta a su autonomía. Es propósito del nuevo gobierno rectificar el escándalo del avasallamiento de las autonomías provinciales. Recientes notas del señor ministro del interior, evidencian respeto por las autonomías de los Estados. Que esa buena corriente no se rectifique, y que el primer acto que realice este Congreso, surgido después del 6 de Septiembre, no sea el avasallamiento de la autonomía económica de los Estados argentinos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Frías Silva.** — Pido la palabra.

Deseo fijar la posición de la Defensa Provincial de Tucumán y del gobierno de la provincia en el asunto que se discute.

Consideramos que la Honorable Cámara, con la aceptación del segundo párrafo del artículo 1º del despacho de la mayoría de la comisión sobre impuesto a la renta, contrae un compromiso formal con las provincias: el de respetar sus derechos en materia impositiva.

El señor diputado Antelo al plantear el proyecto de ley en disidencia con el de la comisión, ha fijado con precisión y claridad aquel derecho inalienable. Nosotros compartimos en todos los puntos su opinión, pero creemos también, como muy bien lo ha expresado el señor diputado por Córdoba, que los Estados argentinos deben en estos difíciles momentos hacer el sacrificio de entregar al erario nacional el producido que pudiera corresponderles. Por otra parte, pensamos que una poda tan grande, como sería la del monto total de la parte que corresponde a las provincias, desequilibraría y afectaría profundamente la armazón de este presupuesto de gastos y el cálculo de recursos ya votado en gran parte por esta Cámara.

La solución que en el artículo 4º de su proyecto propone el señor diputado

por Santa Fe, a objeto de no cercenar los recursos calculados, es decir, la de afectar la participación de las provincias al pago de los créditos que la Nación tenga contra ellas, sería factible si no colocara al tesoro nacional en condiciones desfavorables frente a las provincias que no tienen deudas con la Nación.

Pero creemos también que mucho se habría hecho en este sentido si la Cámara diera un voto favorable al despacho de la comisión, por considerar, como lo dije en un principio, que este voto sería un compromiso serio, un reconocimiento formal, por parte de la Cámara y de la Nación, del derecho que pertenece a las provincias.

Votaremos, pues, el despacho de la comisión, sin perjuicio de apoyar calurosamente en su oportunidad la modificación del impuesto a las transacciones y el proyecto del señor gobernador de Santa Fe, en la importante materia que se discute.

Nada más. (*¡Muy bien!*).

**Sr. de la Vega.** — Pido la palabra.

He escuchado, señor presidente, todas las exposiciones de los señores diputados, que con referencia a este artículo han reanudado otra vez la discusión del asunto en su aspecto constitucional.

Yo creo que hay un poco de confusión en las ideas manifestadas, en cuanto se considera que el proyecto que propone la mayoría de la comisión va en contra de facultades exclusivas de las provincias en materia impositiva y que está también en contra de las disposiciones de nuestra Carta Fundamental. ¿Qué es, en definitiva, este impuesto que la comisión presenta a la consideración de la Honorable Cámara? Es el ejercicio indudable de una facultad constitucional, en virtud de la cual este Congreso puede sancionar esta clase de contribuciones, cuando lo exigen necesidades imperiosas y el bienestar del país. ¿Cómo se puede sostener, señor presidente, que en este momento, en que la Nación se encuentra bajo esta penuria financiera, no sea necesario recurrir a estos tributos para

equilibrar su presupuesto, para sanear sus finanzas, para defender su crédito, es decir, los sólidos cimientos sin los cuales no es posible la prosperidad de los pueblos? ¿Qué es lo que se puede exigir en este caso a la comisión, sino que se encuadre dentro de las condiciones constitucionales, que no son otras que dar carácter transitorio y de emergencia al tributo? Y yo considero que en este sentido la comisión ha cumplido por dos veces con el mandato constitucional. Una, en cuanto dispone el plan de realización financiera con un determinado número de años: tres. Otra, como si no bastara esto, sometiéndolo a una cláusula de carácter resolutorio, reconociendo el derecho de las provincias e imponiendo al gobierno nacional la obligación de sancionar dentro de los dos años de ejercicio de estos tributos, el plan financiero de reparto y de prorrateo con las soberanías provinciales. ¿Qué quiere decir, en realidad esta última exigencia? No tiene otro significado que la obligación de los poderes públicos políticos nacionales de ponerse en contacto y de resolver con los poderes públicos provinciales, lo que tiene que ser este acuerdo de las dos potestades que son indispensables, no tanto por respeto de cláusulas constitucionales, sino por el buen sistema rentístico, que es indispensable para que cada uno dentro de su órbita no se perjudique y para que vaya armónicamente restableciéndose el bienestar general y para que se preocupen del pobre contribuyente que debe ser considerado también y de modo preferente.

¿Por qué se dice que este proyecto implica la renuncia de las provincias para imponer dentro de sus órbitas esta clase de tributos? ¿Pero si no renuncian a nada! Se dice que significa una negativa del derecho de las provincias para ejercitar estas facultades impositivas. ¿Pero si no se niega nada! Si las provincias pueden, en perfecto uso de su derecho, realizar dentro de sus jurisdicciones provinciales la obra tributaria sobre la renta que sea indispensable para satisfacer sus necesida-

des fiscales propias. Lo único que se establece en el artículo en debate y se hace, es abrir la puerta y poner como un imperativo categórico, el deber de los poderes públicos nacionales de entrar en contacto inmediato con los provinciales para dar la legislación retardada e indispensable para el país y para que en virtud de la cual no exista la guerra económica ni una superposición tributaria funesta y para que, al mismo tiempo, todas las potestades nacionales y provinciales conjuguen armónicamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. (*¡Muy bien!*).

Pero, señor presidente, ¿tenemos ahora la oportunidad, el tiempo y los elementos de juicio para realizar esta obra de conjunción y de armonía indispensables? Yo creo que no. Y llamo a la serenidad, a la reflexión y al concepto del instante actual a todos los señores diputados. ¿Cómo es posible, señor presidente, que en estas horas premiosas para la Nación, se presenten a consideración de este Parlamento disposiciones aisladas y otras que significan, como la del señor diputado por Santa Fe doctor Antelo, todo un proyecto de ley con una cantidad de artículos?

Yo reconozco en el señor diputado aludido la bondad de su propósito y aplaudo el entusiasmo con que sirve estos fundamentales intereses del país, en concordancia con el respeto a las autonomías provinciales, pero yo invito al señor diputado y a todos los demás que han presentado proposiciones en substitución del despacho de la mayoría de la comisión, a que demoren un poco sus iniciativas loables y benéficas, las que hemos de estudiar para que, en su hora, traigamos la solución que el país reclama.

El país, señor presidente, que está constituido por las provincias, está, principalmente, constituido por la Nación. Y quiero terminar estas breves palabras repitiendo las que dijo un tu-cumano eminente, que fué una gran figura nacional, el doctor Nicolás Avellaneda, quien, en un momento solemne para la patria, dijo: «No hay nada

más grande dentro de la Nación que la Nación misma». (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!*).

**Sr. Aráoz (E. M.).** — Pido la palabra.

Deseo que se dé lectura de la proposición que hago, en substitución de la segunda parte de este artículo.

—Se lee:

«El 1º de Enero de 1934 se considerará derogado este impuesto.»

**Sr. Dickmann (A.).** — Entonces, ¿cuándo se va a aplicar?

**Sr. Bermúdez.** — No tendrá vigencia, sino por el resto de este año y por el año siguiente.

**Sr. Aráoz (E. M.).** — Las razones que me han determinado a presentar en substitución de la última parte del artículo 2º del despacho de la mayoría, lo que acaba de leerse, se apoyan en las consideraciones que he formulado hace un rato a la Honorable Cámara.

Entiendo, señor presidente, que la facultad que el Congreso tiene para sancionar impuestos directos está fundada en las razones establecidas en el inciso 2º del artículo 67 de la Constitución; y que es ella una facultad de emergencia: que el impuesto debe tener la duración de las causas que han determinado su sanción y, una vez desaparecidas éstas, las provincias cobran ampliamente su facultad impositiva en esta materia. En ese sentido, había citado una opinión del doctor González Calderón.

No, creo que el Congreso pueda legislar la forma en que han de dividirse permanentemente esos impuestos entre la Nación y las provincias, porque, en mi concepto, esos impuestos corresponden en principio a las provincias. El agregado del despacho de la comisión no tiene razón de ser. Es una declaración de principios inaceptable que tiende a afirmar que el Congreso puede legislar sobre impuestos directos como una materia permanente de legislación nacional, lo que que está en contra de disposiciones expresas de la Constitución.



**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

Nuestra posición respecto de este proyecto es bien conocida de la Honorable Cámara. Vamos a votar este artículo, y queremos recordar a los señores diputados que originariamente el proyecto tenía una duración mínima de cinco años; la comisión redujo a tres años su aplicación, y ha agregado la disposición contenida en el segundo párrafo, que hace coincidir el período de duración del impuesto con la época de su derogación, si para ese momento no se ha dictado la ley que establezca la distribución con las provincias.

Creemos que este impuesto es de organización compleja que exige la inversión de cuantiosos recursos: originariamente se calculó invertir cuatro millones de pesos en papeles, en libros y en empleados. Pregunto a la Honorable Cámara si es concebible que una inversión de esa magnitud, para un impuesto destinado a salvar a la Nación de graves dificultades financieras, admita la reducción de su aplicación a tres años, que prácticamente serán sólo dos porque, mientras lo discutamos, va al Senado, se promulga y empieza a aplicarse, se reducirá a muy poca cosa el resto de este año. Hemos sostenido la necesidad de que este impuesto rija, por lo menos, durante cinco años.

La razón de este impuesto está dada ampliamente por el debate que ya ha tenido la Cámara a propósito del presupuesto y por el debate mucho más grave que la espera a propósito del empréstito. Si todavía queda por resolver el empréstito llamado patriótico — ¡al 6 % señores diputados!; patrióticos se llaman los empréstitos cuando tienen la mitad del interés corriente —, y si este gravamen ha logrado que algunos hombres de provincia depongan el espíritu localista que tantas veces en esta Cámara ha sido una valla insalvable para los progresos necesarios de la legislación; ¿cómo afirmar ahora que el producido de este impuesto, que tiene un destino perfectamente claro, inmediato y urgente, pueda ser otro que el que están dicién-

do a gritos que requieren las finanzas nacionales?

Yo no creo que se trate de un avasallamiento económico de las provincias. El señor diputado por Santa Fe ha referido la situación leal en que nos encontramos. Entendemos, por el contrario, que este impuesto nacional será un gran estímulo para la autonomía económica de las provincias, porque las va a obligar a buscar los recursos modificando sus leyes de impuestos. El señor diputado por Santa Fe sabe que en su propia provincia existen impuestos a la exportación.

Va a resultar necesario, por vía de este impuesto nacional, que también las provincias modifiquen un poco la estructura de su sistema de impuestos. Esta será una gran oportunidad y una gran lección que habrán recibido las provincias para modificar su sistema rentístico. Les quedan muchos recursos a las provincias, pero desgraciadamente éstas, siguiendo el mal ejemplo del gobierno nacional están endeudadas por enormes sumas.

**Sr. González (B. S.).** — Corrientes no le debe un solo centavo al gobierno de la Nación.

**Sr. Pena.** — Lo felicito al señor diputado por Corrientes.

Hay provincias argentinas cuyas deudas son enormes. Está en la conciencia pública que se han invertido sumas enormes de dinero por las provincias, obtenido de empréstitos cuyos servicios de intereses y de amortización no se realizan y que la Nación ha tenido que tomar a su cargo.

**Sr. Aguirrezabala.** — La provincia de Entre Ríos ha pagado puntualmente...

**Sr. Pena.** — No deseo ser interrumpido.

Cuando hablo de las provincias el señor diputado se siente aludido. Hablar de provincias no implica referirse necesariamente a Entre Ríos. Son catorce las provincias.

—El señor diputado Aguirrezabala interrumpe nuevamente al orador.

**Sr. Presidente (Bunge).** — Le ruego al señor diputado por Entre Ríos no me obligue a usar la campana del recinto, de tan triste tradición en años anteriores.

**Sr. Pena.** — Gravita sobre las rentas generales de la Nación el pago de servicios de empréstitos que las provincias no cumplen de una manera regular.

Sé, también, que la Nación debe a las provincias. ¿Cómo voy a ignorarlo? Estamos frente a la bancarrota financiera, que hace crisis en este momento.

Pero doy la razón al señor diputado por Santa Fe, en lo que se refiere a la deuda externa. Ellos tienen un cálculo de recursos en la provincia y han querido pagar dicha deuda, pero no pudieron suponer que tendrían que realizarlo con un quebranto de 30 por ciento, porque no se le permite retirar oro a la par de la Caja de Conversión.

Yo sé todas estas cosas que están en el ánimo de los señores diputados. Pero la situación es realmente grave y no se podría ahora, ante un impuesto cuyo producido está afectado a inversiones urgentes e inmediatas, establecer un sistema de cuentas corrientes, según el cual la Nación que no paga porque no puede y las provincias no pagan a la Nación porque ésta les debe. Si la Nación no les paga es porque no tiene con qué hacerlo, y si las provincias se quedan con el dinero de la Nación ésta no podrá pagar.

Es un hecho tan grave — ya lo he dicho y lo repito — que hombres de un espíritu localista tradicional han sostenido ese punto de vista, frente a la necesidad nacional de resolver este grave problema financiero.

Nosotros, en alguna parte hemos conseguido que el despacho de la mayoría de la comisión fuera mejorado y se reconociera una renta mínima no imponible y se aceptara discriminaciones para salvar de una nueva carga el trabajo y la familia argentina. Entonces, vamos a votar este impuesto — lo hemos votado en general —, y diremos que esto da a las provincias ga-

rantías más que extraordinarias en lo que respecta a su participación ulterior, pues están perfectamente contempladas todas esas dificultades en las que nosotros no creemos mucho porque entendemos que este es un impuesto llamado a reformar, a revolucionar el sistema rentístico de la Nación. Y es por eso, señor presidente, que en nuestro despacho de minoría damos al impuesto una duración de cinco años, y admitimos que mientras no se determine la distribución de este impuesto, no se aplique a los empleados públicos de las provincias la cédula que grava los réditos del trabajo.

**Sr. Aguirrezabala.** — Eso está previsto por la ley.

**Sr. Pena.** — Estoy hablando del despacho de la minoría socialista. Si hay coincidencia, felicítese el señor diputado de que alguna vez coincidimos.

**Sr. Aguirrezabala.** — Quiere decir que el señor diputado no ha leído bien el otro despacho.

**Sr. Pena.** — Es sencillamente intolerable que hablando yo del despacho de la minoría, el señor diputado hable del otro y no reconozca que si hay alguna coincidencia es mejor para él y para la comisión.

**Sr. Ghioldi.** — El señor diputado Pena ha formado parte de la comisión de tres diputados encargada de redactar el despacho, de manera que lo ha leído y escrito.

**Sr. Aguirrezabala.** — Pero entonces no recuerda.

**Sr. Pena.** — Yo hablo de una cosa y usted habla de otra.

**Sr. Presidente (Bunge).** — Continúa el señor diputado Pena con la palabra.

**Sr. Pena.** — Vamos, pues, a votar este primer artículo, como he dicho, dejando constancia de que en nuestra opinión la duración mínima de este impuesto ha de ser de cinco años y, por lo que respecta a las provincias hemos contemplado que ya en el artículo se ha dado la solución que nosotros creemos que, para el momento, es la única realmente digna de ser contemplada,

por la razón de urgencia y el destino del producido de este impuesto.

Nada más.

**Sr. Presidente (Bunge).** — Tiene la palabra el señor diputado Lima.

**Sr. Lima.** — Señor presidente: La intensidad con que los señores diputados que representan a los Estados del interior han hecho el alegato en contra del proyecto impositivo excluyendo a las provincias, me induce a pronunciar algunas palabras respecto a este mismo asunto.

No es poniendo en contradicción los intereses de la Nación considerada como una sola entidad, con los intereses de las provincias consideradas como individualidades del conjunto nacional, que se puede alcanzar la solución de este conflicto. No es en el choque sino en la armonía, en la concurrencia y en la convergencia de los propósitos que se ha de alcanzar la sana y limpia interpretación del espíritu de la Constitución nacional.

«Pacto de familia» llamó Urquiza a la unión nacional en la alborada de la reconstrucción del país y de su organización definitiva; pacto de familia era, y fué Buenos Aires el único de los Estados argentinos que puso reparos de orden financiero, de orden político y de orden histórico a la realización del propósito de quien devolvió al país la libertad en Caseros. Buenos Aires restableció luego los propósitos de armonía nacional, entró en el pacto de familia, se incorporó y se identificó con la idea de nacionalidad; y sus diputados, a través del proceso histórico del país, vienen hoy al Congreso a deponer sus intransigencias de ayer y mostrarse dúctiles a las necesidades impostergables del tesoro de la Nación.

Los señores diputados de las provincias no discuten una renuncia posible de éstas a sus facultades impositivas. Ellos reclaman otra cosa; reclaman de la absorción de la capacidad impositiva del pueblo argentino por el gobierno federal. He ahí, en el fondo, donde está toda la dificultad. No es una cuestión constitucional en sí misma, sino de

intereses financieros y administrativos de las provincias frente a la solución nacional.

Yo voy a votar con todo entusiasmo el despacho de la mayoría de la comisión. Las palabras que acaba de pronunciar su presidente, señor diputado de la Vega, son decisivas. No se cercena ni mutila el derecho de las provincias. Lo único que se hace aquí es respaldar, con el concurso tributario del pueblo argentino, una situación difícil de las finanzas nacionales. Ese es el resumen de toda la cuestión.

No pongamos en evidencia los viejos recelos históricos de la nacionalidad. Hemos vivido una historia dolorosa y larga. La intensidad de las pasiones políticas ha podido llegar a dividir a los Estados que forman la Nación Argentina. Pero todo eso ha pasado. La vida ya vivida nos ha enseñado en el dolor de la larga tragedia de la formación de nuestra nacionalidad, que es necesario el olvido de todo ese pasado histórico.

Debemos enfrentar este problema de la concurrencia de las facultades impositivas de las provincias con las de la Nación, con el criterio de que la solución existe en la armonía, la armonía que es la paz y la conciliación de los espíritus, que tanto necesita el país para consolidar el vasto edificio de su organización constitucional.

Y bien, señor presidente; yo me alegro de la intensidad y de la elocuencia y aun de la extensión con que se ha producido este debate en el Congreso nacional, porque esto es vivificador para la política argentina. Nos enseñará que debemos salir de una vez de las luchas políticas realizadas alrededor de los prestigios personales, para rodear la bandera de los principios y de los grandes conceptos constructivos. De hoy en adelante, quizá por efecto contrario de estas malas leyes impositivas de mero carácter fiscal que va a dictar el Congreso nacional, habremos de provocar reacciones espontáneas en el espíritu público. Los partidos ya no marcharán a la zaga de los prestigios personales sino que habrán de susten-

tar conceptos profundos, y será un buen día para la política argentina — que ya amanece — que los partidos políticos del país se dividan por el librecambio o por la protección, o por la discusión sobre estas cláusulas de la Constitución nacional que se refieren a la vida misma de la nacionalidad.

Eso es lo que debemos esperar; ésa es la experiencia, la enseñanza y el fruto que habremos de obtener de estas malas leyes que va a dictar el Congreso de la Nación; malas porque son sancionadas bajo el apremio de una situación de emergencia; malas porque les falta el análisis, el estudio meditado y el contralor de la opinión; malas porque han nacido, como lo ha dicho el propio señor ministro de hacienda, en el gabinete frío del gobierno de «facto», sin haber recibido el concurso ni el calor, que es vida y que es luz, de la opinión nacional; malas porque les falta un estudio y una investigación analítica de la capacidad tributaria del pueblo argentino; malas porque van a resolver precipitadamente problemas fundamentales de orden doctrinario y teórico, como son los del librecambio y protección, cuando se discutan las leyes aduaneras; malas — repito — porque todavía les falta el largo proceso de elaboración en las comisiones con tiempo, con estudio, con investigación, con análisis y, sobre todo, con el inmenso calor de la opinión, sin la cual no pueden salir de ningún Parlamento leyes prestigiosas y prestigiadas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Señor presidente: en el largo sendero recorrido por nuestro país hay una experiencia en lo que se refiere a nuestra vida política. El concepto del federalismo histórico debe modificarse, ese concepto de federalismo histórico que dividía a los argentinos en azarosas luchas, cuyos fragores parecen llegar desde el fondo de su historia: ese federalismo histórico que tuvo su proceso y su tragedia en la lucha fraticida del año 1820, en la hostilidad de la campaña contra la ciudad que tuvo su epílogo en Caseros, y que produjo después el segundo drama en la lucha

de los estados federales para concordar y unirse hasta llegar al Acuerdo de San Nicolás, que fué el principio de la realización de los ideales de los hombres que organizaron nuestro país. Mala tradición, sin duda, que se ha transformado mientras el país se va poblando lentamente desde afuera hacia adentro y el trabajo es ya una religión en forma tal, que se podría repetir la palabra de aquel gran agitador social, de que nosotros estamos realizando hoy el ideal de las sociedades más avanzadas del mundo en que cada hombre no es sino un trabajador y en que cada ciudadano no es sino un soldado dispuesto a empuñar las herramientas del trabajo. (*¡Muy bien!*).

Eso es lo que deseamos. La evolución pacífica vendrá a través del proceso lento de transformación de todas nuestras actividades. El país necesita paz en los espíritus para poder gozar de sus enormes beneficios. El país necesita de las diputaciones que representan no a las provincias como individualidades autónomas de nuestro régimen federal, sino el concepto de una unidad nacional, que respalden con su voto y con la sanción de este proyecto al gobierno nacional. Al fin y al cabo los pensadores que en las convenciones constituyentes del país concibieron y fundaron el estatuto más hermoso entregado a la contemplación y al respeto de los hombres, pensaron lo mismo que hoy expreso en esta circunstancia solemne para la vida política del país.

La Nación, señores diputados, no es el enemigo de las provincias: no asume nunca actitudes hostiles frente a ellas. Todo lo contrario: es la más fuerte frente a las provincias que son las más débiles, y La Nación es el protector tutelar de los intereses locales de las provincias. Eso lo expresó en el seno de la Convención no un hombre de la Capital, no un ciudadano vinculado a las actividades políticas de la Capital, sino un hombre que venía de la lejana Salta, don Salustiano Zavalla, quien definió el concepto de las dos soberanías — la soberanía de las provincias y la soberanía de la Nación — en las siguien-

tes palabras: «En la complicada máquina de la forma federal de gobierno, hay una soberanía federal de la Confederación que se compone de aquellas ramas del poder que se refieren a los intereses de los Estados componentes, y las soberanías particulares de éstos, compaginadas de las atribuciones concernientes a la dirección de los intereses locales y privativos: en cuanto a éstos, se consideran los Estados como pueblos distintos y en cuanto a los objetos generales se miran como uno e idéntico pueblo. Pero para que estas dos soberanías no se encuentren en choque, estando fundadas sobre un mismo territorio y unos mismos individuos era preciso que una parte se constituyera en protectora de la más débil. Este protectorado resalta en el espíritu de la Constitución norteamericana y en la que nos ocupa es tan buena como la mejor en su forma.»

Y bien: si hay algún legislador de provincias del interior que trae en su corazón y en su pensamiento la idea de la tierra nativa, que trae junto a las amarguras de los problemas del interior del país que contempla en sus viajes al Congreso de la Nación todas las tribulaciones de un pueblo que sufre y se agita en el vasto territorio de la Nación, olvídense de los conceptos rígidos del federalismo histórico y haga un nuevo federalismo que sea la concurrencia del esfuerzo, la colaboración de todos los argentinos para hacer de esta tierra la patria de la libertad, del orden y del progreso. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!*)

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan F. Cafferata.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Se va a votar por partes el artículo 1º del despacho. En la segunda parte se dará lectura, por su orden, de las proposiciones formuladas, para someterlas a la consideración de la Honorable Cámara.

**Sr. Secretario** (Zambrano). — La primera parte del artículo es la siguiente:

«A partir del 1º de Enero de 1932, y por el término de tres años, todos los créditos derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o de extranjeros, residentes o no residentes en el territorio de la República, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece la presente ley.»

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Secretario** (Zambrano). — El segundo apartado del artículo dice:

«Una ley determinará cómo deberá repartirse a contar del 1º de Enero de 1934 entre la Nación y las provincias, el producido del impuesto. Si a esa fecha no hubiera sido sancionada esa ley, se considerará derogado este impuesto.»

En substitución de esta parte se han presentado las siguientes proposiciones...

**Sr. Dickmann (A.)**. — Pido la palabra.

Como se han formulado diversas proposiciones referentes a la segunda parte del artículo 1º, proposiciones que anticipan un tanto la fecha fijada en el artículo como término para que se dicte la reglamentación, y como hay diversos conceptos en la Honorable Cámara que pueden determinar, por votaciones divididas, un desequilibrio de fuerzas, tal vez el rechazo del artículo tal como lo ha despachado la comisión, me voy a permitir hacer indicación en el sentido de que todas las proposiciones modificatorias del artículo 1º sean tomadas como antecedentes para el estudio ulterior que está obligada a hacer la Honorable Cámara, de acuerdo con la propia disposición del artículo.

De manera que no nos pronunciáramos en este momento sobre ninguna de ellas. Tendremos en las expresiones de los señores diputados, elementos de juicio que, con los que ulteriormente puedan venir, servirán de base para la reglamentación. De los tres elogios que me ha hecho ayer el señor diputado

por Córdoba, el único que merezco y acepto es el de ser hombre práctico; tengo esta convicción: que si las provincias resistieran la aplicación de este impuesto, la ley fracasaría en su aplicación.

Soy como el que más, partidario de que la ley tenga carácter nacional, pero tengo que ajustarme a la realidad de las circunstancias. Por eso, señor presidente, pido que todas estas proposiciones pasen a la comisión como antecedentes para el estudio ulterior.

**Sr. Palacio.** — Por mi parte acepto la indicación que acaba de formular el señor diputado Dickmann.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Si hay asentimiento pasarán a la comisión todas las proposiciones formuladas sobre el segundo apartado del artículo 1º, a fin de que sirvan de antecedentes para el estudio que se ha de realizar.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar el segundo apartado del artículo 1º del despacho.

—Resulta afirmativa.

—En discusión:

Art. 4º — Inciso b) Las ganancias que las sociedades cooperativas distribuyan a sus asociados de acuerdo con el artículo 2º, inciso 17 de la ley número 11.688 y las que se destinen a su fondo de previsión o reserva. Quedan excluidas de esta exención, las ventas realizadas a los no socios y a los que siéndolo compran productos a las cooperativas para su reventa;

**Sr. Aguirrezabala.** — Si no hay ninguna proposición modificando el despacho, se podría suprimir la lectura para ganar tiempo.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — El señor diputado por Entre Ríos propone que se suprima la lectura. Si hay asentimiento así se hará.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar el inciso b) del artículo 4º.

—Resulta afirmativa.

—En discusión:

e) Las indemnizaciones, premios y devoluciones de primas que paguen las compañías de seguros;

**Sr. Bunge.** — Hay aquí un error de terminología, señor presidente. Propongo a la comisión que acepte sea rectificado. Dice el inciso: «las indemnizaciones, premios y devoluciones de primas.» Debería decir, en cambio: «las indemnizaciones, participaciones y devoluciones», porque «premios» significa lo mismo que «primas».

**Sr. Presidente (Cafferata).** — ¿La comisión acepta?

**Sr. de la Vega.** — Acepta, señor presidente.

**Sr. Pena.** — El inciso dice una cosa que se entiende perfectamente; está bien como está.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observación, se aprueba:

f) Las indemnizaciones que en forma de capital o rentas se paguen por accidentes o por enfermedades profesionales, por lesiones o incapacidad parcial o absoluta para el trabajo, temporal o permanente, y las que perciban los herederos a título de indemnización por la muerte de miembros de su familia.

Art. 5º — La renta de los inmuebles rurales queda gravada en la siguiente forma:

a) Cuando la tierra no fuese trabajada personalmente por su propietario, se pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los arrendamientos devengados anualmente, previas las deducciones del artículo 7º. Se presume que el monto total de los arrendamientos

equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo prueba en contrario, y hasta el límite mínimo del 3 por ciento;

- b) Cuando la tierra fuese trabajada personalmente por su propietario y su valuación fiscal excediese de \$ 25.000 moneda nacional, se pagará un impuesto de 4 % sobre su renta anual. Con tal propósito se presume que la renta anual equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo que el propietario, demostrase que la renta no alcanza a la proporción precitada y hasta el límite mínimo del 3 por ciento;
- c) Cuando la tierra fuese trabajada personalmente por su propietario, y su valuación fiscal no excediese de \$ 25.000 moneda nacional, queda exento del gravamen establecido en el inciso b).

Esta exención no se aplicará a más de un inmueble del mismo propietario.

Art. 6º — La renta de los inmuebles urbanos queda gravada en la siguiente forma:

- a) Cuando el propietario arrendase su inmueble pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los alquileres devengados anualmente.

Se presume que el monto de los alquileres equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo prueba en contrario por el contribuyente y hasta el límite mínimo del 3 %;

- b) Cuando el propietario habitase su inmueble o lo emplease para el ejercicio de su profesión o negocio, pagará un impuesto de 5 % sobre la renta anual que se presume equivalente al 5 % de la valuación fiscal del inmueble.

En este caso si la valuación no excediese de \$ 25.000 m/n., el propietario queda exento de gravamen; pero la exención no se aplicará a más de un inmueble.

Art. 7º — Antes de la liquidación del inmueble referido en los artículos 5º y 6º, el contribuyente podrá deducir del monto de la renta los intereses de los gravámenes hipotecarios sobre los inmuebles en cuestión, los impuestos y tasas que recayesen directamente sobre los mismos, y en el caso de edificios o construc-

ciones urbanas además la suma que determinará el fisco entre un mínimo del 5 % y un máximo del 10 % de la renta que presume el fisco para el inmueble, por concepto de gastos de mantenimiento.

Art. 8º — Suprimido.

Sr. de la Vega. — El artículo 9º pasa a ser 8º.

Sr. Martínez (J. H.). — Hay que correr la numeración, señor secretario.

—En discusión.

*Ausentismo*

Art. 9º a) (Nuevo). — Los propietarios territoriales, sean personas de existencia ideal o de existencia visible, que no tengan domicilio en la República, pagarán el impuesto de esta categoría (renta territorial), con un recargo del 30 %. Se incluyen en esta situación a los domiciliados en el país que, sin estar al servicio de la Nación, se hallen ausentes durante más de un año, así como las sociedades anónimas o personas jurídicas que tuvieran su directorio fuera del territorio nacional.

Sr. Aguirrezabala. — Pido la palabra.

Voy a proponer una modificación a este artículo, que creo aceptará la comisión. Es la siguiente: agregar al final del artículo: «exceptuándose ambas clases de personas que justifiquen haber introducido su capital de el extranjero».

El propósito del agregado es que no aparezca este impuesto como un fantasma, como una cosa temible para el capital extranjero que viene a instalarse en el país y que éste precisa.

Sr. Presidente (Cafferata). — La comisión acepta el agregado que propone el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Ruggieri. — Este artículo, como ya se ha aclarado en la discusión en general, se refiere solamente a una sobretasa a la renta territorial.

Sr. Aguirrezabala. — ¿De manera que el criterio con que se votaría, al no aceptar la modificación que propongo, es que las personas que justifiquen haber constituido capitales en

el extranjero, no serían pasibles del impuesto argentino?

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

**Sr. Aguirrezabala.** — Lo que quiero es que me aclare el señor diputado.

**Sr. Ruggieri.** — El artículo dice textualmente: «pagarán el impuesto de esta categoría...» y, entre paréntesis, «(renta territorial)».

**Sr. Aguirrezabala.** — De manera que los capitales extranjeros...

**Sr. Ruggieri.** — No están comprendidos, mientras no se apliquen a la propiedad territorial.

**Sr. Pena.** — Es un caso de defensa evidente de la nacionalidad, no permitir que los extranjeros se aprovechen de la incorporación del mayor valor del suelo, como una fuente legítima de beneficio. Esta parte del ausentismo está perfectamente determinada, porque es gravar la renta territorial que es su consecuencia.

**Sr. Aguirrezabala.** — Yo voy a citar un caso concreto.

Algunas compañías que colonizan grandes extensiones de campo en nuestro país y que, desde luego, han invertido capitales venidos del extranjero, fomentan el trabajo y la producción del país y yo pienso que si a ellas se les aplica el impuesto al ausentismo, por el hecho de que los directorios o accionistas residan en el extranjero, me parece que va a ser una manera de que se ausenten del país sociedades que vienen a incorporar capitales al país. Yo pido la aclaración: si estas sociedades están comprendidas, o no.

**Sr. Ghioldi.** — ¿No cree el señor diputado que es una manera de fomentar el imperialismo?

**Sr. Aguirrezabala.** — No se trata de imperialismo. Está, por ejemplo, la Jewis y otras compañías de colonización que son muy útiles y prestan grandes servicios al país.

**Sr. Pinedo.** — Pido la palabra.

Yo creo que en esta materia hay una confusión de conceptos, que puede llegar a aclararse, y que se refiere a la esencia misma del asunto.

La proposición que ha hecho el señor diputado Aguirrezabala, como cuarenta que han llegado a la comisión por intermedio de varias entidades, plantea el asunto en la siguiente forma: Una sociedad extranjera cualquiera, el Banco de Londres o el Banco Alemán, por ejemplo, que no son sociedades de capitales argentinos emigrados, sino sociedades extranjeras que residen en el país, algunas desde hace ochenta o cien años, ¿se las puede considerar como sociedades ausentes?

Lejos de ser una entidad local que se ausenta al extranjero, entiendo que es una entidad extranjera que se aclimata a nuestra tierra. Es una entidad que aquí trabaja, que produce, que aquí paga los impuestos por las operaciones que hace. Este concepto no creo que sea el que la ley tiene del ausentismo que debe gravarse.

El punto de vista que han sostenido los señores diputados socialistas lo he compartido y defendido en la comisión, donde dije que el Estado no tiene interés en que compañías extranjeras adueñadas de buena parte de suelo argentino permanezcan en la inactividad, esperando que las tierras se valoricen, perjudicando el desenvolvimiento del país porque mantienen sus propiedades desvinculadas del proceso de producción.

Pero no es eso tal vez lo que preocupa al señor diputado por Entre Ríos y lo que preocupa a los que traen aquí esta cuestión. Hay un criterio para pronunciarse sobre si una persona está presente, o no, a los efectos de esta ley; es su domicilio, respecto de las personas de existencia visible, y respecto de las personas jurídicas es el lugar donde se encuentra su directorio. Ahora, de lo que no estoy seguro es de que, el del lugar donde se encuentre el directorio, sea indicio único y suficiente para apreciar la presencia o la ausencia de las corporaciones extranjeras en el país. No sé si una corporación, por el hecho de tener directorio en el extranjero, está ausente del país y merece a ese título un castigo especial en el tributo que paga.



Creo que ese es el punto de vista que ha preocupado a algunos colegas, y merece ser contemplado.

**Sr. Aguirrezabala.** — Este es un caso que ha preocupado en Entre Ríos, donde existe el impuesto al ausentismo, y que se ha presentado como una dificultad práctica, porque se presentaba una situación de injusticia para con las personas o sociedades comprendidas en la disposición, lo que ha hecho que se modifique el primitivo criterio, adoptado cuando se dictó la ley, haciendo las salvedades del caso.

Me mueve a presentar la modificación el recuerdo de esos hechos, para que no ocurra con la vigencia de esta ley lo mismo que ha ocurrido con la vigencia de la ley provincial. Yo quisiera que la Honorable Cámara aclarara bien el punto, para que no hubiera lugar a interpretaciones, que después puedan ser perjudiciales.

No sé si los señores diputados creen que se satisfaría la exigencia de muchos colegas borrando del despacho las palabras «así como las sociedades anónimas o personas jurídicas que tuviesen directorio fuera del territorio nacional». El domicilio de las corporaciones resultaría de otros hechos, como resulta el domicilio de las personas, puesto que — cualquiera sea el lugar donde esté el directorio —, si aquí trabajan, si aquí están establecidas y autorizadas y pagan impuestos, son personas presentes a los efectos fiscales; y si no hacen esas cosas que constituyen el domicilio para las personas, de existencia visible, son sociedades ausentes. No habría, entonces, que guiarse por el criterio bastante imperfecto del lugar donde tienen el directorio.

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

La proposición sometida a consideración de la Cámara tiene un sentido claro y evidente. La mayoría de la comisión estableció el artículo a proposición nuestra. Propusimos una tasa de aumento de 50 %, que la comisión rebajó a 30 %.

El fundamento es evidente. Si se trata de argentinos que pueden pasear, dado el estado floreciente de sus finan-

zas, no es injustificado gravarlas con mayor porcentaje con el impuesto a la renta. Respecto de las sociedades extranjeras, ya planteamos el asunto a propósito de los ferrocarriles, sosteniendo que debían tener su directorio en el país. Tratándose de sociedades territoriales, la disposición tiene fundamento mucho más racional, y es de un vigor o de una índole nacionalista — diré así — más evidente.

La renta territorial es el privilegio típico por excelencia. En nuestro país se une a la clase capitalista argentina una cantidad enorme de empresas extranjeras dueñas de buena parte del suelo: la parte Norte de Santa Fe está en manos de La Florestal; en el Sur, merced a una serie sucesiva de acaparamientos hechos por testaferros, las extensiones mayores están en manos de dos o tres compañías extranjeras; en el lejano Norte hay enormes zonas en manos de empresas azucareras, como Ledesma Sugar Refining Estates, que reparte dividendos en Inglaterra, porque allí tiene directorio. Ni siquiera el sentido territorial ha obligado a estos señores del capitalismo internacional, con los cuales son tan solidarios los capitalistas argentinos, a tener la radicación de sus actividades en el país.

No tenemos contra el capital extranjero ninguna inquina ni ninguna preocupación especial; lo hemos visto llegar aquí; no para levantarnos ni porque estuviéramos clamando por que viniera, sino porque vió la posibilidad de altas ganancias. Tenemos ahora que afirmar nuestra posición de Estado independiente el derecho de hacer que se radiquen aquí las reservas de muchas compañías extranjeras de seguros que aquí trabajan y obtienen cuantiosas utilidades, pero que mantienen sus reservas fuera del territorio nacional. Tenemos en esto un sentido nacional concordante con nuestro carácter de país libre. La proposición que hacemos, señor diputado Aguirrezabala, así como está redactada, tiende a gravar la renta territorial, porque la otra renta, la que deriva del trabajo, la considera-

mos respetable y a ella no queremos imponerle un tributo muy grande porque deriva de actividades sociales útiles y sanas.

En este caso se agrega al privilegio territorial, parasitario por excelencia, el carácter de una inversión de capitales extranjeros que se benefician de un aumento de valor del suelo que es consecuencia del trabajo de todo el país. Me parece, pues, que la Cámara hará muy bien en mantener el artículo tal cual está redactado.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Pinedo.** — Al hacer esa sugestión no creo haberme apartado de las razones que ha dado el señor diputado Peña. Creo en todas las razones de fondo que él ha dado, pero no por ello me creo obligado a proceder de distinta manera, según que una sociedad tenga su directorio aquí o en el extranjero, porque ese no puede ser un criterio para distinguir entre una sociedad nacional y una extranjera. Hay infinidad de sociedades argentinas que tienen su sede en el extranjero y que trabajan en el país, y viceversa, por ejemplo sociedades argentinas que trabajan en el Paraguay. ¿En qué puede variar la situación de una sociedad por el solo hecho de que tenga su directorio en el extranjero? ¿Cree alguien que la absorción de la renta que viene del Paraguay va a dejar de venir porque el directorio se traslade a la Asunción? Y lo mismo ocurre con compañías inglesas, francesas, alemanas, etcétera, que aquí se establecen y trabajan. Una compañía francesa que se establezca aquí y aquí tenga su directorio, pero que gira al extranjero sus utilidades, ¿ha de estar en condición distinta a la que tiene su directorio en el extranjero?

El lugar de la residencia del directorio es una cosa más o menos trivial y que de ninguna manera puede servir para distinguir las sociedades locales y las extranjeras. Hay infinidad de corporaciones que tienen su filial aquí, que tienen aquí un directorio con fines determinados, pero que en realidad son la prolongación de la entidad social ex-

tranjera. De manera que ese no puede ser un buen criterio para separar unas sociedades de otras.

Por otra parte, no se trata de eximir a nadie de la contribución territorial sino de no recargar, por razones de xenofobia, un impuesto que debe gravitar sobre todos por igual, que aquí estén establecidas.

**Sr. Aguirrezabala.** — Eso es lo que nosotros queremos que sea: una perfecta nivelación.

**Sr. Pinedo.** — El extranjero que está aquí y que aquí desenvuelve sus actividades, debe estar exactamente en las mismas condiciones que el argentino.

**Sr. Dickmann (E.).** — ¿Qué propone el señor diputado?

**Sr. Pinedo.** — Suprimir del artículo las últimas palabras, las que se refieren a las sociedades anónimas o personas jurídicas que tienen su directorio fuera del territorio nacional. Tanto las personas físicas como las jurídicas pagarán una sobretasa cuando estén domiciliadas en el extranjero, y no la pagarán cuando estén domiciliadas en el país, cualquiera sea el lugar en que esté el directorio.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — ¿El señor diputado hace una proposición en nombre propio o en el de la comisión?

**Sr. Pinedo.** — En nombre de la comisión.

**Sr. Aguirrezabala.** — Retiro la indicación porque se acaba de contemplar el caso planteado.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Muy bien, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Palacín.

**Sr. Palacín (M.).** — Señor presidente: el asunto que discute la Honorable Cámara a esta hora un tanto avanzada tiene una gran importancia y por eso, aun contrariando el pensamiento de algunos colegas de la vecindad, deseo reforzar los argumentos dados en el sentido de que se mantenga el artículo redactado tal como está. Podría la Cámara considerar si convendría que esta disposición fuera bajo otro rótulo que el de impuesto al ausentismo; pero quiero señalar que si hay una razón para que se fije un impuesto al ausentismo y

se recarga el impuesto a la renta con un adicional tan módico como el que ha señalado el señor diputado Ruggieri, no es porque nos incomode que nuestros grandes terratenientes se encuentren más cómodos en Londres, París, o en Saint Moritz que aquí. No es por eso. Que se radiquen personalmente donde les resulte más cómodo o agradable para la conservación de su salud. El principio social que da base a este impuesto, es que estos señores extraen las rentas del país para ser dilapidadas fuera del mismo, sin provecho para la Nación. Ese es el sentido social, y en este concepto hay una vinculación entre el terrateniente ausentista y las poderosas compañías terratenientes que se están radicando cada vez más en el país, y que pueden tener sus directorios en Buenos Aires u otro punto de la República, pero cuya renta va a gastarse en cualquier otra parte del mundo.

Nosotros comprendemos todo el respeto que pueden merecer los capitales que se radican en el país para promover una industria, como la ferroviaria, a pesar de que la consideramos rodeada de privilegios exorbitantes, pero los capitales que se radican para el acaparamiento de tierras significan un problema para el país, que puede agravarse.

Esta cuestión ha creado problemas realmente graves en otros países, por ejemplo en Méjico, que tiene problemas internacionales, a veces difíciles, debido a las grandes propiedades territoriales que pertenecen a compañías extranjeras. Ese es el caso de los grandes lords ingleses, que durante centenares de años han estado esquilmando al pueblo irlandés.

Valga este debate incidental, si no tiene otra consecuencia, para llamar la atención de los diputados de la Nación Argentina, no de las provincias, sobre esto que puede llegar a constituir un problema serio para la Nación.

**Sr. Pinedo.** — Pido la palabra.

Como contestación definitiva, para demostrar que los argumentos dados por el señor diputado Palacín — cuya idea de fondo comparto —, no tienen nada que ver, leeré el artículo tal como queda para aprobar también que lo ma-

lo que él pretende combatir, lo combatimos también nosotros. Quedaría así: «Artículo 9º (nuevo). — Los propietarios territoriales, sean personas de existencia ideal o de existencia visible que no tengan domicilio en la República pagarán el impuesto de esta categoría (renta territorial) con un recargo del 30 %. Se incluyen en esta situación a los domiciliados en el país que, sin estar al servicio de la Nación, se hallen ausentes durante más de un año».

De manera que gravamos al ausentismo. Lo único que no hacemos es determinar el ausentismo por el lugar donde se reúnen tres señores en una sala, dando la apariencia de que allí está todo el manejo social.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a leer el despacho de la comisión tal como queda después de la supresión de las últimas palabras de que acaba de dar cuenta el señor diputado por la Capital doctor Pinedo.

**Sr. Pena.** — Como las palabras que se acaban de pronunciar tanto por el señor miembro informante de la mayoría mantienen íntegramente el concepto que informa nuestra proposición, vamos a votar.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Estando de acuerdo los señores diputados, se va a votar el artículo.

—Se vota.

Artículo 9 (nuevo). — Los propietarios territoriales, sean personas de existencia ideal o de existencia visible, que no tengan domicilio en la República, pagarán el impuesto de esta categoría (renta territorial), con un recargo del 30 %. Se incluyen en esta situación a los domiciliados en el país que, sin estar al servicio de la Nación, se hallen ausentes durante más de un año.

—Resulta afirmativa.

—Sin observación se dan por aprobados:

Artículo 10. — Agregar al final del inciso a):

Quedan también excluidos (hasta el 4½ %) los réditos provenientes de las reservas matemáticas de las com-

pañías de seguros, destinados a integrar esas reservas, en cuanto fueran necesarios para constituir el fondo con que hacen frente a las obligaciones contraídas con sus asegurados.

- b) Los comerciantes, bancos y demás entidades comerciales y civiles, públicas o privadas, quedan obligados a retener el monto de este gravamen en el momento de abonar los intereses devengados por los capitales recibidos a título de préstamo o depósitos a la vista o a plazos.

La misma obligación tienen las entidades civiles o comerciales con respecto a los intereses devengados por los debentures o bonos emitidos por las mismas. Se excluye de esta disposición los intereses pagados sobre títulos públicos emitidos por los gobiernos nacional, provinciales o municipales, y sobre sus cédulas por el Banco Hipotecario Nacional y por el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y se excluye, asimismo, los intereses de cualquier índole pagados a los bancos de depósitos y descuentos.

Art. 11. — Los beneficios netos del comercio, la industria y los auxiliares de comercio, quedan sujetos a un impuesto de 5 % sobre el monto de los mismos. A los fines de este artículo se considera como beneficio neto el obtenido durante el ejercicio completo. El impuesto se aplicará a los ejercicios vencidos con posterioridad al 1º de Enero de 1932, proporcionalmente por los meses que correspondan a este año.

Art. 12. —

Inciso f) (*nuevo*). — La suma de 3.600 pesos al año, que se declara renta imponible. Esta reducción no regirá para las personas jurídicas o sociedades civiles o comerciales por acciones, ni cuando el contribuyente, siéndolo también de otra categoría, se hubiera acogido a alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b), o 15 de esta ley.

El impuesto de esta categoría se aplicará sobre el 75 % de la renta que exceda de 3.600 pesos moneda

nacional, hasta 24.000; y sin discriminación sobre el excedente de dicha suma.

Art. 14. — En los comercios o industrias cuyo volumen de ventas fuese inferior a pesos 50.000 anuales, se presume que los beneficios netos y el trabajo personal equivalen al 10 % de ese volumen. En tal caso los beneficios netos pagarán el impuesto como si fuesen réditos del trabajo.

Art. 15. — Los réditos del trabajo pagarán un impuesto del 4 % sobre el excedente de la cantidad de 300 pesos moneda nacional mensuales, que se declara renta mínima no imponible.

Este impuesto se aplicará sobre el 50 % de la renta que excediendo de 3.600 pesos moneda nacional no pase de 12.000; sobre el 75 % del excedente de esta última suma hasta 24.000; y sin discriminación sobre el excedente de esta cantidad.

No se descontará de estos réditos la renta mínima no imponible cuando el contribuyente que lo es también de otra categoría ha aceptado alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b), o 12, letra f).

—En consideración: Artículo 16.

**Sr. Buyán.** — Pido la palabra.

Simplemente deseo pedir a la comisión que aclare si los descuentos a los obreros y empleados, por ejemplo, se refieren a los salarios y sueldos que efectivamente perciben.

**Sr. Pinedo.** — Es evidente.

**Sr. Buyán.** — Es una aclaración a los efectos de la aplicación posterior, porque ya al aplicarse el decreto del gobierno de facto en lo que se refiere a los salarios, se presentaron algunas dificultades en empresas y en talleres industriales.

Aclarado por la comisión el concepto, nada tengo que decir.

—Sin observación, se da por aprobado:

*Sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones y dietas*

Artículo 16. — Las personas, comerciantes o entidades comerciales o civiles, públicas o privadas, que pagasen a sus empleados, obre-

ros, pensionistas o jubilados, sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones, dietas o cualquiera otra remuneración de servicios personales, excluidos los descuentos para jubilaciones, quedan obligados a deducir por cuenta del contribuyente el impuesto del artículo anterior, al efectuar el pago de dichas remuneraciones.

—En consideración: Artículo 17.

**Sr. Argonz.** — En consideración al criterio adoptado por esta Honorable Cámara de reservar las proposiciones que se formulen para el estudio posterior que debe hacerse de esta ley, retiro mi observación.

—Se da por aprobado:

Artículo 17. — A los fines del artículo 15 se presume que el rédito de los contribuyentes que ejercen una profesión u oficio es de tres veces el alquiler que pagan o que se les computa de acuerdo con el artículo 6º, letra b) por el local de su trabajo y el de su casa habitación, cuando dicho alquiler no exceda de 200 pesos mensuales, y de cuatro veces cuando el alquiler es superior a esa cantidad, sin perjuicio de la manifestación sobre las entradas reales.

**Sr. Ruggieri.** — Pido la palabra.

Solicito que se agregue como último apartado del artículo 18 del despacho de la mayoría, el que figura en el mismo artículo en el despacho de la minoría, página 62.

**Sr. Pinedo.** — Se puede aceptar.

**Sr. Argonz.** — Está contemplado en el artículo 19.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Corresponde la aclaración que hace el señor diputado por la Capital. El apartado a agregarse es el siguiente: «Este impuesto se deducirá del que deba abonarse de acuerdo con el artículo 15, cualquiera sea el monto del rédito total del contribuyente en esta categoría.»

**Sr. Argonz.** — La situación está contemplada en el artículo 19.

**Sr. Ruggieri.** — Es un error, señor diputado. Son dos disposiciones distintas. El artículo a que se refiere el señor

diputado concierne a las rentas inferiores a 25.000 pesos.

**Sr. Argonz.** — No, señor diputado. Yo me refiero al original remitido por el Poder Ejecutivo. Desde el momento que no ha sido modificado, subsiste.

**Sr. Martínez (J. H.).** — La comisión ha aceptado la proposición del señor diputado Ruggieri, de manera que debe votarse.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar el artículo 18 con el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital y aceptado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa:

Artículo 18. — Toda persona comerciante o entidad comercial o civil, pública o privada, que pague a un profesional liberal una remuneración u honorario no comprendido en el artículo 16, está obligada a descontar, por cuenta del contribuyente, al efectuar el pago, un impuesto del 2 % cuando ese honorario no exceda de 1.000 pesos moneda nacional; de 3 % cuando excediendo de esta última no sea superior a 2.000 pesos moneda nacional, y del 4 % cuando se trate de mayor cantidad.

El mismo descuento se hará en las regulaciones judiciales de honorarios en el momento de su pago. Queda derogado el artículo 25 de la ley 11.200.

Este impuesto se deducirá del que deba abonarse de acuerdo con el artículo 15, cualquiera sea el monto del rédito total del contribuyente en esta categoría.

—Se dan por aprobados:

Artículo 21. — Toda persona de existencia visible cuyos réditos en su conjunto sobrepasen de pesos 25.000 moneda nacional por año, está sujeta a un gravamen adicional progresivo sobre el monto global de los mismos, además del impuesto que hubiese pagado por cada categoría de rédito, de acuerdo con la adjunta tabla.

Artículo 21a (nuevo). — A los fines del impuesto adicional se incluirá como renta de las personas naturales las derivadas de dividendos sobre el capital social o de las ganancias netas de toda corporación, sociedad anónima o compañía de seguros, con exclu-

sión de las utilidades exentas de impuestos por el artículo 4º, inciso b) de esta ley. A este efecto, dichas entidades harán y entregarán a la dirección del impuesto a los réditos las respectivas declaraciones.

**Artículo 21b (nuevo).** — La renta de bienes de personas fallecidas y que se perciba hasta la división de la herencia estará sujeta al impuesto de su respectiva categoría, atribuyéndose a cada heredero en la proporción que le corresponda a los fines del impuesto a su renta global.

**Artículo 22a (nuevo).** — Los contribuyentes casados, tienen derecho a la reducción de un 10 % de su renta imponible por categoría y de un 5 % por cada hijo a su cargo que, careciendo de réditos propios, sea menor de veinte años o esté físicamente incapacitado para el trabajo, o ascendientes, sin rentas e incapacitado, que esté a su cuidado, o persona que perciba alimentos de conformidad con las disposiciones del Código Civil, hasta un máximo del 30 %. Esta reducción no se aplicará al impuesto global ni sobre el excedente de 10.000 pesos de cada categoría de renta.

—En consideración el artículo 22b (nuevo).

**Artículo 22b (nuevo).** — Los contribuyentes solteros, por réditos superiores a 10.000 pesos, sufrirán un recargo del 10 % sobre el monto del impuesto.

**Sr. Simón Padrós.** — Pido la palabra.

El hecho de haber sido quien propuso en la Comisión de Presupuesto este recargo a los solteros me obliga a hacer una ligera aclaración complementaria.

Las razones que motivan este recargo impositivo son sencillas. Ya tuve oportunidad de expresarlas en la comisión. Creo que debemos sancionar este recargo, aunque más no fuera como un tributo que se impone a aquellos que no rinden el debido homenaje a la exquisita feminidad argentina.

Y como no se dice si este impuesto es sólo para los varones o también para las niñas, aclaro que debe referirse a los solteros varones, solamente.

**Sr. Ruggieri.** — La aclaración me ha evitado un discurso, señor diputado.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Esa ha sido la inteligencia de la comisión.

**Sr. Pinedo.** — Pido la palabra.

En la comisión el señor diputado Simón Padrós propuso este artículo y yo voté en contra. No he creído del caso expresar en el despacho mi disidencia ni siquiera parcial, porque el asunto no tiene tanta significación; pero voy a decir por qué estuve en contra de una proposición tan galante.

Lo que la ley debe hacer en materia de cargas de familia es desgravar al contribuyente que tiene a su cargo la manutención y cuidado de varias personas, y esto está previsto y sancionado en el proyecto. Con este aditamento: que no es forzoso que la descarga se haga en las rentas muy cuantiosas y de cualquier categoría. Lo estrictamente justo es que la descarga se haga en aquellas rentas que provienen del trabajo. No es indispensable que se descargue el impuesto en todas las otras rentas.

En cuanto al recargo a los solteros sólo puede fundarse en principios religiosos o filosóficos que yo no comparto. No veo ningún motivo de orden fiscal para gravar más a los solteros ricos que a un casado muy rico, en cuanto eso no se traduzca en necesidades de familia, previstas en otro artículo.

**Sr. Amadeo y Videla.** — Yo formularía una pregunta aclaratoria. ¿Cómo quedaría por ejemplo, un viudo, una persona que no tuviera sucesores?

**Sr. Martínez (J. H.).** — Quedaría viudo. *(Risas).*

**Sr. Bermúdez.** — Ese ya pagó su tributo. *(Risas).*

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

En la comisión propusimos los diputados socialistas, que se crearan discriminaciones en favor de las cargas de familia. El artículo anterior aprobado por la Cámara, tiene este origen. Nos manifestamos en contra de la proposición del señor diputado Simón Padrós por cuanto ya habíamos contemplado el asunto en el artículo anterior, toda vez que los casados tenían derecho a reduc-

ciones de un tanto por ciento de la renta imponible por cada hijo a su cargo. Ya estaba contemplado el problema. Pero el señor diputado se empeñó en llevar una agresión a los solteros...

**Sr. Simón Padrós.** — Es poco amable el señor diputado.

**Sr. Pena.** — Pero señor diputado, hay que interpretar el resultado. En la comisión se le dijo al señor diputado: si ya está contemplada la discriminación por las cargas de familia, ¿por qué le quiere llevar una agresión a los solteros? Y además se le dijo, a los fines de precisar bien el alcance de su proposición, que definiera lo que es un soltero.

**Sr. Simón Padrós.** — La definición está en el código.

**Sr. Pena.** — Desde luego que el estado normal es el de la familia, pero sabemos que la organización actual aleja de la familia normal a una cantidad de hombres y mujeres que viven bajo las consecuencias de ese estado social.

El señor diputado adopta la posición simpática de gravar a los solteros que ganan más de 800 pesos por mes. Pero consideramos que con eso se insinúa un principio o una manera de ser de la legislación que tiene que contemplarse a la inversa: favorecer tanto como corresponda y sea de justicia la situación de las cargas de familia, pero no crear deliberadamente situaciones de excepción en contra de los solteros. Hay en eso un principio que no nos es simpático, porque también sabemos que hay no sólo razones de orden material, sino también razones de orden moral que afligen a personas de toda la sociedad, para quienes el matrimonio no siempre es posible.

De manera que los solteros pagarán más porque no podrán aducir en descargo del impuesto las cargas de familia.

No ahondemos el problema, señor presidente, porque hay solteros y solteras que tienen hijos: hay en nuestro país una cantidad de mujeres jubiladas que siguen siendo solteras y son madres. No compliquemos este asunto porque plantea un problema social.

Aceptemos lo razonable para las cargas de familias legítimas, que son las que están dentro de la ley y reconocamos que fuera de ella hay situaciones tan respetables como las legítimas.

No precipitemos, pues, una cuestión que obligaría a entrar en una cantidad de consideraciones ajenas a la cuestión en debate.

El señor diputado por la Capital acaba de manifestar que aceptó esta inserción.

**Sr. Pinedo.** — No la he aceptado. He firmado en disidencia.

**Sr. Pena.** — Lo mejor sería que la comisión comprendiera que estando resuelto el asunto en el artículo anterior, conviene eliminar este otro y que lo retirase, con lo que podríamos terminar, porque ya no quedan sino dos artículos.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Este artículo crearía una situación muy curiosa. El artículo anterior establece una reducción del 10 por ciento para los contribuyentes casados, y este artículo 22b dispone que los solteros sufrirán un recargo de 10 por ciento. ¿Quiénes van a pagar, entonces, las tasas normales? Solamente los viudos, señor presidente. (*Risas*).

—El señor diputado Simón Padrós hace una observación en voz baja, que no se alcanza a percibir.

**Sr. Bunge.** — El artículo se refiere a los contribuyentes solteros. Todos los no casados son solteros, aunque tengan un año de edad; no hay límite de edad en esto. Eso prueba que el artículo carece de sentido.

Por otra parte, hay provincias como la de Corrientes y la de Santiago del Estero, en las cuales la estadística demuestra que más de la mitad de los hijos son hijos de uniones libres. No tiene, pues, sentido el artículo por ningún lado que se le quiera tomar. Por eso votaré en contra.

Pido a la comisión que lo retire.

**Sr. Simón Padrós.** — Pido la palabra.

Como algunos señores diputados, analizando con espíritu crítico el ar-

tículo 22b, han preguntado sobre la definición de soltero, me veo obligado a contestarles que soltero es el que no es casado.

El artículo 22a establece una reducción de 10 por ciento a los casados, y yo pregunto al señor diputado Pena, ¿qué debe interpretarse por casado, dentro de la definición elástica o dudosa que él da a nuestro Código Civil? Y pregunto al señor diputado Bunge, con respecto a esas provincias en las que el régimen de la familia no ha cristalizado en lo que debe ser de acuerdo con las normas o principios tradicionales de nuestro hogar digno y honesto, ¿en qué casos se va a discriminar el 10 por ciento a los casados?

Creo que el asunto está suficientemente debatido y pido que se vote.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Se va a votar el artículo 22b.

**Sr. Martínez (J. H.)**.—Debe decirse: Solteros varones mayores de 22 años.

**Sr. Dickmann (E.)**. — Pido la palabra.

Bajo el aspecto risueño de esta discusión, hay a mi entender, un problema de importancia. Lo risueño de la discusión resulta seguramente de que sería difícil determinar en esta Cámara el estado civil de muchos señores diputados. (*Risas*).

En el fondo estoy de acuerdo con la proposición del señor diputado Simón Padrós, y como se trata de un asunto que no obliga a principios fundamentales de método socialista ni a su programa, ni siquiera a una resolución del grupo parlamentario, debo decir que considero que va en él invalorado un concepto de cierta importancia. Hay en la sociedad argentina, como en muchas otras, una categoría social de gente rica que cultiva su soltería, gente rica ociosa y por lo tanto viciosa. Un soltero de esta clase es un peligro para la sociedad. (*Risas*).

Yo no creo que se pueda obligar a casarse a un hombre porque se le aplique un impuesto. No tiene para mí mucha importancia el artículo; pero por lo que se ha dicho, se exhibe un estado social inconveniente.

Eso no reza para la gran masa popular, en la cual se contrae matrimonio en edad muy temprana. La gran masa popular cumple con el precepto bíblico y biológico de «creced y multiplicaos». Ese impuesto reza principalmente para la clase rica, donde hay más solteros intencionales y deliberados.

Sin duda, para cumplir el deber de crecer y multiplicarse, no se necesita muchas veces el vínculo legal, pero mejor que exista el vínculo legal, porque él crea a los varones la obligación de mantener a la mujer y a los hijos.

Después de meditar mucho, teniendo la más amplia libertad de criterio en estos asuntos, creo en el matrimonio legal, con anillo y todo. (*Risas*).

Si esta disposición diera lugar a la creación de nuevas familias civiles en la Argentina, sería una excelente disposición. Es bueno que el país se pueble en la forma en que pueda poblarse; pero si de todos estos hogares ilegales, al margen de la ley, se pudiera hacer familias normales y legales, sería mucho mejor, porque en las familias legales la muerte infantil es menor y la educación de los hijos es mejor.

Por eso, después de estas brevísimas consideraciones con las que quiero salvar un principio de conciencia, yo acepto ese impuesto, que para algunos puede ser odioso y paradójal. Lo considero no como un castigo a la soltería, sino con un concepto de orden social sobre la familia y los deberes que ella implica. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*).

**Sr. Ghioldi**. — Pido la palabra.

Expresaré una opinión distinta a la de mi estimado compañero doctor Enrique Dickmann. Yo, como casado, pero no anillado, quiero decir que este impuesto a los solteros es un mayúsculo error social y moral.

El estado normal de los hombres sanos es el cumplimiento de todas sus funciones fisiológicas, pero a veces los hombres y las mujeres no pueden contraer matrimonio por infinidad de circunstancias de orden moral o de orden físico: o un hombre feo no encuentra la mujer que quiera casarse con él



(*risas*) o un hombre honesto se impone la obligación de no casarse cuando sabe que eso es en perjuicio de la mujer y de la posible descendencia. No es posible que la ley intervenga en esta intimidad inaccesible. Por otra parte, la gran realidad argentina demuestra que, por falta de educación o de lo que fuere, buena parte de la población argentina tiene relaciones sexuales al margen de la ley, principalmente en el interior del país. ¿Cómo vamos nosotros entonces a aplicar ahora una sobretasa a los solteros? Creo que sólo un principio religioso, un preconcepto en el fondo, puede determinar la aprobación de esta cláusula. Y como yo estoy libre de preconceptos y de prejuicios religiosos, votaré conscientemente en contra. (*¡Muy bien! Aplausos*).

**Sr. Bunge.** — El matrimonio civil entre nosotros está sometido al dogma católico de la indisolubilidad, de manera que muchos se niegan a contraerlo por esa razón.

**Sr. Dickmann (E.).** — Quiero decir dos palabras, señor presidente.

Respeto profundamente lo que acaba de decir mi distinguido colega el diputado Ghioldi. He dicho que es un caso de conciencia y he dicho que prefiero la familia legal a la ilegal, porque ella crea obligaciones para el varón con la mujer y los hijos; comprendiendo también el fenómeno biológico de multiplicarse la población del país de cualquier manera. Y en apoyo de lo que he dicho — que prefiero el matrimonio civil con anillo y todo — cito la opinión del eminente escritor y socialista, y hombre libre en todo sentido, G. Bernard Shaw, que en un drama admirable, donde estudia la hipocresía, la mentira y la corrupción de la familia, tal como está organizada actualmente, termina diciendo que asimismo prefiere el matrimonio legal, con anillo y todo, pero sin excluir las otras formas de relación entre ambos sexos, para poblar el país.

**Sr. Brouchou.** — Pido la palabra. Para rectificar un concepto vertido

por el señor diputado Ghioldi respecto a la manera de vivir de las personas del interior.

Dice el señor diputado que en las provincias del interior se observan relaciones sexuales al margen de la ley con más frecuencia que en la Capital Federal. Yo no tengo el mismo concepto, precisamente porque en virtud de mi profesión conozco a fondo el asunto. Creo que en el interior queda la constancia más a menudo de las relaciones al margen de la ley, pero en la Capital Federal se recurre con más frecuencia a medios para ocultar esas relaciones. (*Aplausos*).

**Sr. Martínez (J. H.).** — Ya nos llevan demasiado tiempo los solteros, señor presidente. Sería bueno que se votara.

**Sr. Moret.** — Pido la palabra.

Señor presidente: se ha tratado este asunto en la Cámara bajo diferentes aspectos. Se ha mencionado desde la situación social innegable en que se encuentra gran parte de la población del país, tanto en la Capital y ciudades más populosas, como en las provincias del interior. Se han traído a colación, por mi estimado compañero de sector, el señor diputado Dickmann, hasta argumentos bíblicos, pero yo voy a decir, señores diputados, que hay algo más, pues se me ocurre que en este debate también tiene un poco que decir esto que he encontrado dentro de mi pupitre, en este libro azul, la Constitución de la Nación Argentina, cuyo artículo 16 es perfectamente aplicable al caso que estamos discutiendo: «la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles a los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

**Sr. Martínez (J. H.).** — El señor diputado Ruggieri ya ha expuesto esos mismos argumentos, al tratarse de la posibilidad de este impuesto.

**Sr. Moret.** — Voy a explicar nuestra situación.

La igualdad es la base del impuesto, pero el impuesto recae sobre los bienes. La progresividad ha sido perfectamente admitida por la jurisprudencia de todos los países del mundo, porque encierra dentro de sí ese principio de igualdad. Yo me pregunto: ¿qué tiene que ver la situación de una persona casada o soltera con la carga pública que recae sobre sus bienes? Entiendo que, únicamente, tiene que ver en el caso mencionado de las cargas de familia. Pero ello es para una discriminación favorable a las personas que tienen a su cargo a otras y que pagan el impuesto. Entiendo que se viola la igualdad, cuando se recarga un impuesto, en razón de lo que dentro de los términos de nuestra Constitución no puede ser considerado como un interés público preponderante, tanto más si se acepta el agregado que ha hecho el señor diputado por Tucumán, en cuyo caso recaería únicamente sobre los varones que se encuentran en esa situación.

La Constitución nacional no distingue, al hablar de ciudadanos, entre varones y mujeres y al respecto es sabido que la diputación socialista va a presentar en momento oportuno un proyecto de ley de voto de la mujer, interpretando que la situación actual es derivada únicamente de la ley electoral que nos rige, pero que el espíritu de la Constitución es tan terminante, que hasta esta Cámara ha aprobado, no hace mucho tiempo, una ley que acuerda derechos civiles a la mujer, para ponerla en igualdad de condiciones ilegales respecto al hombre.

De manera que el único principio con el cual se puede defender este impuesto ante las prescripciones de la Constitución nacional es el de que todos los solteros se encontrarían frente al impuesto en idéntica situación.

Eso es lo que dentro de la jurisprudencia de Estados Unidos, que ha tenido que interpretar la enmienda XIV, que tiene una disposición en parte similar a la de nuestro artículo 16, se ha llamado clasificación arbitraria

porque, si las leyes pudiesen seguir clasificando a fondo podrían encontrarse situaciones como la siguiente: que los solteros pagarían un recargo, pero podrían sufrir un recargo también personas que tuviesen alguna otra condición que la ley no puede contemplar. La clasificación — ha dicho un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos — debe ser razonable.

A la hora en que nos encontramos, voy a ahorrarle a la Cámara la lectura del fallo, que envuelve un principio constitucional de gran importancia, el principio de la igualdad ante la ley. Esta admite una discriminación favorable por cargas fundadas de familia; pero no puede admitir un recargo que no se puede jurídicamente justificar.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Se va a votar el artículo 22.

**Sr. Tourrés.** — Quisiera que la Cámara me aclarara — ya que tiene hombreros de ley que son cabezas privilegiadas — en qué situación se encuentran ante esta ley los señores sacerdotes, los divorciados y los niños. (*Risas*).

**Sr. Bunge.** — Los sacerdotes son casados con la Santa Madre Iglesia, de manera que no deberán pagar el impuesto. (*Risas*.)

**Sr. Fresco.** — Pido la palabra.

He formulado una moción concreta. Noto una extraordinaria anarquía en este asunto, por lo que haría indicación de que vuelva a comisión. Parece que no está bien estudiado, e involucra problemas de orden filosófico, moral y social que requieren un nuevo examen meditado y serio.

**Sr. Groppo.** — La comisión mantiene su despacho. Que se vote.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — ¿No insiste en su proposición el señor diputado?

**Sr. Fresco.** — No insisto.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Se va a dar lectura del artículo que se votará.

—Se lee:

Art. 22b (nuevo). — Los contribuyentes solteros, varones, mayores de 22 años, por réditos superiores a \$ 10.000, sufrirán un recargo del 10 % sobre el monto del impuesto.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Se va a votar.

— Resulta negativa.

— Sin observación se aprueban los artículos 28, 33 y 35.

**Sr. Martínez (J. H.)**. — Pido la palabra para proponer un nuevo artículo.

El artículo diría así: «La dirección del impuesto a los réditos podrá designar a mayores contribuyentes para asesorar o formar parte de las comisiones encargadas de censar a los contribuyentes, proceder a las tasaciones de oficio y demás funciones semejantes, revistiendo estas funciones carácter de carga pública. Estas designaciones deberán recaer siempre en personas residentes en el lugar donde deban desempeñar sus funciones, sin que pueda obligárseles a efectuar viajes o cambios de domicilio por razón de las mismas que son renunciabiles solamente por causa justificada.»

Se trata de un artículo que estaba ya en el proyecto del doctor Molina y que, en esencia, declara carga pública el desempeño de las comisiones necesarias para poder establecer el impuesto. Se ha puesto la limitación a efecto de que las personas sean designadas solamente dentro del lugar de su residencia.

**Sr. Saggese**. — ¿Dice «podrá» o «deberá» designar?

**Sr. Martínez (J. H.)**. — Podrá.

**Sr. Bunge**. — El agregado me parece excelente en su concepto general, pero propongo a la comisión, que suprima una palabra. Es peligroso que la administración se vea obligada a elegir únicamente entre los «mayores contribuyentes», porque pueden estar entre ellos los más interesados en desgravar su propia contribución. En cambio, si se pusiera solamente «contribuyentes»...

**Sr. Martínez (J. H.)**. — Hemos tomado el artículo del proyecto de Herrera Vegas, pero no hay inconveniente en aceptar la modificación.

**Sr. Pena**. — La proposición sería más bien relativa al decreto reglamentario.

**Sr. Martínez (J. H.)**. — La declaración de carga pública no puede ser materia de decreto reglamentario.

**Sr. Pena**. — Lo que corresponde es que, como ya han pasado varias proposiciones relativas al artículo 1º, estas proposiciones pasen a comisión, para que ésta formule un despacho. De estas proposiciones no tenemos sino el conocimiento escaso que puede habernos dado la rápida lectura hecha por el señor diputado. Por lo pronto, no nos podemos pronunciar en este momento.

Había pedido la palabra para referirme a otro asunto que tiene relación con el artículo 40.

**Sr. Martínez (J. H.)**. — Terminemos primero con éste.

**Sr. Pena**. — El señor diputado ha propuesto un artículo nuevo y yo quiero referirme al artículo 40, que es anterior.

**Sr. Martínez (J. H.)**. — La Cámara se pronunciará sobre ese agregado. El artículo que propongo es esencial para determinar que el formar parte de las comisiones que nombre el Poder Ejecutivo constituye una carga pública, y para establecer que éste deberá designar solamente personas dentro del lugar de su residencia, para evitar así que se pueda hacer de esto un arma política.

**Sr. Presidente** (Cafferata). — ¿El señor diputado por Córdoba ha hecho la proposición en nombre propio o en el de la comisión?

**Sr. Martínez (J. H.)**. — En nombre de la comisión.

— Se lee nuevamente la proposición formulada por el señor diputado Martínez, suprimiendo la palabra «mayores».

**Sr. Presidente** (Cafferata). — Está en consideración.

**Sr. Gómez**. — Entiendo que no corresponde imponer esa carga pública a la actividad individual. Esos trabajos deben hacerlos personas técnicas. De-

ben formar parte de esas comisiones las personas que quieran hacerlo de buena voluntad. Es un trabajo enorme el de hacer padrones.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Para eso habrá el personal técnico necesario. Estas son comisiones para asesorar y facilitar así la percepción del impuesto. Disposiciones análogas se encuentran en casi toda esta clase de leyes. Se trata de una ventaja para el fisco y para el contribuyente, y no hay en esto invención alguna.

**Sr. Pena.** — Convendría que el señor diputado aceptara que la proposición pase a comisión. Comprenderá el señor diputado que tendríamos que decir muchas cosas y no es este el momento oportuno para expedirnos acerca de una proposición que no estaba prevista. Espero que el señor diputado no insistirá en que se discuta la proposición, porque vamos a complicar las cosas y que aceptará que vaya a comisión para ser estudiada junto con el otro asunto.

**Sr. Martínez (J. H.).** — ¿Cómo va a volver?

**Sr. Pena.** — Podrá el Poder Ejecutivo dentro de sus facultades propias en la reglamentación considerar el auxilio que requiere para los fines de la aplicación de la ley. Pero no se trata de imponerlo así.

**Sr. Martínez (J. H.).** — Que la Cámara se pronuncie y vote a favor o en contra, según lo crea pertinente.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar la proposición formulada por el señor diputado a nombre de la comisión, con la modificación que ha propuesto el señor diputado Bunge.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Si me permite el señor diputado...

Hay un agregado del señor diputado Aguirrezabala que debe votarse y del que se va a dar lectura.

**Sr. Secretario (Zambrano).** — El agregado propuesto por el señor diputado Aguirrezabala es el siguiente:

«Para aplicar el impuesto que crea esta ley en lo referente a la propiedad urbana y rural se tomará únicamente en cuenta los registros de contribución directa urbana y rural que están en vigencia en las provincias.»

**Sr. Groppo.** — La palabra «únicamente» está de más.

**Sr. Presidente (Cafferata).** ¿La comisión acepta este agregado?

**Sr. Martínez (J. H.).** — La comisión acepta, pero sin la palabra «únicamente».

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Aguirrezabala, en la forma aceptada por la comisión.

— Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

La manera como la Cámara trata este proyecto de ley ha hecho que no fuera posible en ningún momento plantear una cuestión que revista alguna importancia, desde que el señor secretario va siguiendo el orden de un despacho que tiene artículos con una numeración salteada, porque los que no están allí están en otra parte. Me parece que es este el momento de hablar sobre la organización de este impuesto.

Este impuesto queda a cargo de una nueva dirección de impuestos sobre los réditos. Se ha creado ya una nueva organización y tratándose de un momento en que está de por medio el empeño más grande o más chico de la Cámara por realizar economías, es el caso de preguntar a la comisión si ella ha considerado este punto relativo a la dirección de impuestos sobre los réditos. Y pregunto esto por la siguiente circunstancia: Existe en la Capital Federal la Administración Nacional de Contribución Territorial, Patentes y Sellos incorporada al Ministerio de Hacienda, que tiene a su cargo el cobro de la contribución en la Capital y en los territorios nacionales, que ya forman de por sí un conjunto importante del territorio argentino.

Esta entidad pública tiene un catastro de la propiedad de la Capital Federal y una valuación atrasada reali-

zada el año 1923, tiene un archivo, con una documentación completa de la división de las propiedades y tiene además un catastro de los territorios nacionales. Dicha repartición cuenta así con una experiencia acumulada. La Cámara y el país saben que simultáneamente a la existencia de esta oficina pública, las Obras Sanitarias de la Nación tiene otro catastro de la propiedad de la Capital y ahora están haciendo, en razón de haber llevado los servicios sanitarios a las provincias, algo parecido con algunas provincias.

También la Municipalidad de la Capital Federal tiene otro catastro. Nuestro compañero Ghioldi, siendo concejal, planteó el asunto en el seno del Concejo Deliberante, que votó una resolución al respecto, tratando de coordinar esos elementos.

Y yo me pregunto si ahora, sin haberse llegado a una coordinación de estos elementos, se va a crear una quinta rueda. Es un problema muy importante, y por eso consulto a la comisión acerca de lo que ella ha investigado y pueda decir a la Cámara sobre la organización de la Dirección del impuesto sobre los réditos, porque considero que hay una oficina cuyos antecedentes y cuya actividad, ya de muchos años, la autorizan para realizar, mediante la ampliación que corresponda, las funciones nuevas que le da la ley, sin necesidad de una creación burocrática nueva y complicada para la percepción del impuesto, con un costo enorme y exagerado.

**Sr. Martínez (J. H.).** — La Cámara ha votado, señor diputado por la Capital, toda la organización relativa a las autoridades del impuesto.

Ahora bien; el señor ministro de hacienda podrá tomar en cuenta las sugerencias que hace el señor diputado, ya que el Poder Ejecutivo está autorizado por el despacho del presupuesto de gastos a refundir oficinas, para tratar de hacer las mayores economías.

Nosotros no podemos establecer en una ley lo que pide el señor diputado.

**Sr. Pena.** — Dada la estructura del despacho, en este momento no podría

redactar ni proponer una reconsideración o una supresión. Pero espero, señor presidente, que dentro del enunciado general que acaba de recordar el señor diputado Martínez y que también lo propusimos oportunamente, se tengan en cuenta estas manifestaciones para evitar que este impuesto, con todo lo que se ha hecho para restringir su aplicación, para reducir el alcance del gravamen, todavía, por un exceso en el costo de la percepción, resulte una carga para el país.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — El artículo 2º es de forma.

Queda sancionado el proyecto.

8

## INDICACION

**Sr. Martínez (J. H.).** — Como han terminado los impuestos a los réditos, voy a proponer que la Honorable Cámara trate el despacho número 7, que es un complemento a las leyes de impuesto y tiene despacho unánime de la comisión, razón por la cual no va a ofrecer ninguna dificultad.

—Asentimiento general.

**Sr. Presidente (Cafferata).** — Haciendo asentimiento general de la Cámara, se va a considerar el despacho referido.

9

## IMPUESTOS

## Disposiciones generales

**Sr. Presidente (Cafferata).** — En discusión el despacho número 7.

**Sr. Dickmann (A.).** — Está firmado por todos los miembros de la comisión.

*Honorable Cámara:*

Vuestra Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente